

Entrenamiento, Bases y Militarización en América Latina



La OTAN y Estados Unidos en América Latina

Pablo Ruiz Espinoza (Comp.)

Derechos Humanos



quimantú

ENTRENAMIENTO, BASES Y MILITARIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA
LA OTAN Y EEUU EN AMÉRICA LATINA

Compilador:
Pablo Ruiz Espinoza

ISBN: 978-956-8290-49-8

Foto de portada:
David Hormazábal Cádiz

Diagramación y diseño:
Lucía Paz

Primera edición
Santiago de Chile, noviembre 2025

Producción e impresión:
Editorial Quimantú
www.quimantu.cl

Revista El Derecho de Vivir en Paz
www.derechoalapaz.org

Entrenamiento, bases y militarización

LA OTAN Y EEUU EN
AMÉRICA LATINA

Pablo Ruiz Espinoza
(*Comp.*)

Índice

Prólogo	9
<i>Álvaro Ramis</i>	
Presentación	13
<i>Roy Bourgeois</i>	
Preámbulo	15
<i>Pablo Ruiz Espinoza</i>	
La lucha contra el fascismo y la militarización	17
<i>Alicia Lira Matus</i>	
EEUU y la militarización en América Latina	23
<i>Pablo Ruiz Espinoza</i>	
La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia	35
<i>Renán Vega Cantor</i>	
El entrenamiento militar estadounidense y su impacto en los derechos humanos desde la perspectiva de Colombia ¿Qué normas necesitamos?	45
<i>Pablo Ruiz Espinoza</i>	
Bases militares de Estados Unidos: neocolonialismo e impunidad	53
<i>Renán Vega Cantor</i>	
Argentina envía nuevamente tropas a entrenamiento a los Estados Unidos	59
<i>Paola Gallo y Pablo Ruiz</i>	
La Guerra Biológica	65
<i>Pablo Ruiz Espinoza</i>	

Guerra Biológica: Base Militar de EEUU en Perú es un peligro	73
<i>Olga Pinheiro</i>	
Las estaciones de investigación estadounidenses en Perú y otros lugares se preparan para la guerra biológica	77
<i>W.T. Whitney</i>	
El cierre de todas las bases militares extranjeras	83
<i>Gabriel Aguirre</i>	
Militarización global y dominio estratégico en América Latina: una mirada crítica a las nuevas formas del control geopolítico	91
<i>Alfonso Insuasty Rodríguez y Andrés Escobar Vásquez</i>	
Tesis sobre la militarización social en América Latina y el Caribe	107
<i>David Barrios Rodríguez</i>	
Mercenarios y contratistas civiles: el negocio sucio de las guerras	123
<i>Félix Madariaga</i>	
La Organización del Tratado del Atlántico Norte - OTAN	133
<i>Hervi Lara Bravo</i>	
El pueblo quiere paz y progreso, no guerra y derroche	147
<i>Vijay Prashad</i>	
Stella Calloni: "EEUU quiere el control total de nuestros recursos naturales"	153
<i>Pablo Ruiz Espinoza</i>	
No + Gasto Militar en América Latina ni en el Mundo	163
Comunicado final de la Reunión Regional de Las Américas del Consejo Mundial de la Paz	167

*A Raúl Pellegrin, Cecilia Magni, Mauricio
Arenas y todos mis hermanos*

*Para que haya una paz verdadera, que
haya justicia social y desmilitarización*

Prólogo

Por Álvaro Ramis

El presente libro, *Entrenamiento, Bases y Militarización en América Latina: La OTAN y Estados Unidos en América Latina*, compilado por Pablo Ruiz Espinoza, llega en un momento histórico de profunda reconfiguración geopolítica mundial. Su objetivo es tan claro como urgente: evidenciar las múltiples formas en que el militarismo global —articulado principalmente por los Estados Unidos y la OTAN— continúa reproduciendo estructuras de dominación en nuestra región bajo nuevos rostros, discursos y tecnologías.

A lo largo de estas páginas, un destacado conjunto de autores y autoras —entre ellos Alicia Lira Matus, Renán Vega Cantor, Paola Gallo, Olga Pinheiro, W.T. Whitney, Gabriel Aguirre, Alfonso Insuasty Rodríguez, Andrés Escobar Vásquez, David Barrios Rodríguez, Félix Madariaga, Hervi Lara Bravo, Vijay Prashad y Pablo Ruiz— ofrece un análisis colectivo y plural sobre un mismo fenómeno: la expansión del poder militar occidental y sus consecuencias sobre la soberanía, la paz y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.

El texto no se limita a la denuncia, sino que propone un marco interpretativo para comprender las continuidades históricas de la política imperial estadounidense, desde la Doctrina Monroe hasta la actual configuración de alianzas estratégicas, bases militares y acuerdos de “cooperación en defensa”. Las más de 800 bases distribuidas por el planeta, muchas de ellas en territorio latinoamericano, son expresión material de una lógica de control que combina injerencia política, condicionamientos económicos y dominación cultural. En este contexto, la OTAN aparece como un instrumento

de expansión global del poder euroatlántico, cuyo interés por la región se reactiva en un escenario de crisis energética, disputa por los recursos naturales y competencia con potencias emergentes.

El libro también aborda los efectos internos de esta militarización. En países donde el discurso de la “seguridad nacional” se impone como dogma, se normaliza la presencia del ejército en tareas de orden interno, el espionaje sobre movimientos sociales y la criminalización de la protesta. América Latina corre el riesgo de convertirse, una vez más, en el laboratorio de una guerra sin fronteras: una guerra que no se libra solo con armas, sino también con sanciones económicas, bloqueos financieros, campañas mediáticas y manipulación de la opinión pública.

Cada capítulo aporta una mirada crítica sobre hechos concretos: la ocupación ilegal de Guantánamo, la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en ese enclave; el resurgimiento del racismo y la xenofobia institucional en la política migratoria de Estados Unidos; las agresiones sistemáticas contra Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití; y el papel de los grandes medios de comunicación en la guerra informativa contra los procesos de emancipación regional.

Pero el libro no se queda en la denuncia: formula propuestas de acción y articulación internacionalista. Entre ellas, la exigencia de convertir a América Latina y el Caribe en una “Zona de Paz”, en consonancia con la Proclama adoptada por la CELAC en 2014. Este horizonte supone fortalecer la solidaridad entre los pueblos, promover la educación para la paz, y construir un modelo de desarrollo basado en la justicia social, la equidad ecológica y la autodeterminación.

En estas páginas se entrelazan, además, las luchas de los pueblos palestino, saharauí, haitiano, indígena y afrodescendiente, entendidas no como causas ajenas, sino como parte de una misma resistencia al orden imperial. El libro recuerda que la paz no puede construirse desde la subordinación ni desde la exclusión: requiere soberanía, memoria histórica y voluntad de transformación colectiva.

Entrenamiento, Bases y Militarización en América Latina es, en definitiva, una invitación a mirar críticamente el mapa militar del continente, a interpelar los discursos que justifican la injerencia y a reconocer que la verdadera defensa no se mide en número de tanques o bases, sino en la capacidad de los pueblos para sostener su independencia, cuidar sus territorios y garantizar vidas dignas.

Como advierte uno de los autores, “la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de justicia”. Este volumen, al reunir voces diversas de nuestro continente y más allá, constituye una contribución fundamental a esa justicia pendiente. Leerlo es un acto de conciencia, pero también de compromiso: un llamado a resistir la normalización del militarismo y a reimaginar una América Latina libre, soberana y solidaria.

Octubre de 2025

Presentación

Por Roy Bourgeois

Fundador de SOA Watch

En el año 2006 una delegación de SOAW, compuesta por Lisa Sullivan, Linda Panetta, Carlos Mauricio y yo, visitamos Santiago con la esperanza que el gobierno chileno dejará de enviar tropas a entrenamiento a la nueva Escuela de las Américas (SOA/WHINSEC). La Escuela de las Américas funcionó muchos años en Panamá y, en 1984, se tuvo que ir a los Estados Unidos donde nuestro movimiento, desde 1990 en adelante, realizó protestas demandando su cierre.

Miles de militares se han entrenado en este lugar y han regresado a sus países causando mucho dolor y muerte a su propia gente. En Chile, muchos graduados de la Escuela de las Américas fueron agentes de Pinochet.

En la visita a Chile, 20 años atrás, nos reunimos con la Ministra de Defensa de entonces, Vivianne Blanlot, quien, para sorpresa nuestra, compartió nuestra preocupación pero nos dijo que sólo podía “sugerir” al Ejército que retirara las tropas del entrenamiento en la SOA/WHINSEC.

En esos años visitamos también otros países con la misma meta y logramos, en distintos años, que Venezuela, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y Uruguay dejaran de enviar tropas a la también conocida como “Escuela de Asesinos”. Por los cambios de gobiernos, y por la fuerte presión de los Estados Unidos, varios de estos países continuaron, posteriormente, enviando tropas a la SOA/WHINSEC.

El 2015 regresamos nuevamente a Chile, nos reunimos con el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y pedimos lo mismo. Ese año protestamos fuera del Fuerte Aguayo donde Estados Unidos abrió una base militar para supuestamente entrenar “cascos de paz” y donde se enseñaba a la policía y a los militares a reprimir a la población civil. Años antes, estuvimos en Colombia demandando el cierre de las bases militares de Estados Unidos en este país.

En este libro Pablo Ruiz, quien fue durante muchos años Coordinador para América Latina de SOA Watch, comparte diversos artículos que nos invitan a seguir estudiando y denunciando los peligros que sigue representando el entrenamiento militar y el militarismo de Estados Unidos en América Latina y en el mundo.

Preámbulo

Por Pablo Ruiz Espinoza

Compilador
www.derechoalapaz.org

En esta compilación “Entrenamiento, Bases y Militarización en América Latina. La OTAN y EEUU en América Latina” encontrará diversos artículos periodísticos y de investigación, ponencias, declaraciones y una entrevista a la gran periodista argentina Stella Calloni.

El tema guía de esta compilación es la militarización con sus diversos rostros: Entrenamiento de tropas chilenas y latinoamericanas en los Estados Unidos, Ejercicios Militares Conjuntos, Bases Militares Extranjeras de EEUU y la OTAN en América Latina, El Caribe, y el Mundo, mercenarismo, represión a los movimientos sociales, impunidad, gastos militares, golpes de estados, intervencionismo, guerra biológica, resurgimiento del fascismo, entre otros. Los diversos artículos, pueden ser leídos en cualquier orden.

La gran mayoría de sus autores están ligados a movimientos sociales y de paz. Son defensores de los derechos humanos y contrarios a la militarización y la guerra. Junto a ellas y ellos militamos y defendemos el derecho de nuestros pueblos a la autodeterminación y la paz.

En general, hay poco conocimiento sobre las diversas formas de militarización que existen. Uno de los objetivos principales de este libro es poner en papel estos temas y hacer conciencia sobre los peligros que acechan a nuestros pueblos y a toda la humanidad.

En Chile, desde el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, hemos hecho seguimiento y denunciado las distintas formas de militarización. Estamos convencidos que como sociedad civil, como pueblo, como organizaciones, debemos preocuparnos sobre estos temas. También tenemos “El derecho de vivir en Paz” como canta Victor Jara.

Agradecemos a Alicia Lira Matus, Renán Vega Cantor, Paola Gallo, Olga Pinheiro, W.T. Whitney, Gabriel Aguirre, Alfonso Insuasty Rodríguez, Andrés Escobar Vásquez, David Barrios Rodríguez, Félix Madariaga, Hervi Lara Bravo, y Vijay Prashad por compartir sus artículos y hacer de este libro un trabajo y ejercicio colectivo.

Agradecemos las enseñanzas que nos han dado, en este camino, con su ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y a Martin Almada, Premio Nobel Alternativo. También a Rina Bertaccini de MOPASSOL, quien fuera vicepresidenta del Consejo Mundial por la Paz, y a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, por su compromiso permanente con la justicia social y la paz.

Finalmente, nos solidarizamos con Palestina.

La lucha contra el fascismo y la militarización

*Por Alicia Lira Matus**

Saludo afectuosamente a todas las personas y organizaciones que participan en este encuentro regional del Consejo Mundial por la Paz que es organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y por el Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y de Lucha por la Paz (Cebrapaz).

Hoy, en este lugar, queremos reiterar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina que sigue siendo atacado criminalmente por el gobierno de Israel. Recientemente, en mayo, realizamos un acto de apoyo y solidaridad con palestina a 77 años del inicio de la Nakba la “catástrofe” en que Israel expulsó de sus propias tierras al pueblo palestino. Más de cinco millones de palestinos son refugiados en diversos países del mundo.

Es trágico y criminal que Estados Unidos y los países europeos, que a través de la OTAN, sigan enviando armas para que se cometa este genocidio contra Palestina como también matarlos de hambre al impedir que llegue la ayuda humanitaria a la población palestina. De acuerdo a información de la ONU, “desde el 7 de octubre de 2023, más de 55.000 palestinos han muerto por los incesantes ataques de las fuerzas armadas israelíes”.

Nos solidarizamos con Palestina, pedimos el fin del envío de armas de EEUU y de la OTAN a Israel, llamamos a un alto al fuego contra la población de palestina y que se realicen negociaciones diplomáticas que permitan alcanzar la paz y la devolución de las tierras usurpadas a Palestina.

En el mismo sentido, nos solidarizamos con el pueblo del Sáhara Occidental. Desde hace 50 años viven bajo la ocupación ilegal de Marruecos lo que ha significado medio siglo de exilio para decenas de miles de saharauis que sobreviven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en pleno desierto argelino. Ya va más de medio siglo de represión, desapariciones, torturas y vulneración sistemática de los derechos humanos del pueblo saharauis en las zonas ocupadas por Marruecos.

Recordamos también que el 9 de mayo de este 2025 se conmemoraron los 80 años del Día de la Victoria en que el Ejército Rojo derrotó al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Un hecho histórico y lleno de gloria que nos recuerda todo lo mejor de los tiempos de la Unión Soviética. Rescatamos el sentimiento y convicción del pueblo ruso de ser un país antifascista. El fascismo es lo más trágico que le ha sucedido a la humanidad y que hoy es un peligro latente en diferentes países.

Porque el nazismo, el fascismo, el negacionismo, han seguido estando presentes mediante golpes de Estados, represión a los movimientos sociales, y el crecimiento de la extrema derecha que sigue dispuesta a usar la violencia contra nuestra población.

El intento de golpe de Estado de Bolsonaro contra el presidente Lula, el 8 de enero de 2023, es uno de los tantos ejemplos que tenemos en los últimos tiempos. La llegada de Milei en Argentina, otra muestra del fascismo y la extrema derecha. Las amenazas del presidente Trump contra Panamá y México, entre otros hechos también.

Por eso es muy importante avanzar en la construcción de un mundo multipolar donde todas las naciones sean respetadas y no sigan prevaleciendo las imposiciones de los EEUU y la Unión Europea contra nuestras naciones. Los BRICS, la UNASUR, la CELAC son instancias de mutua cooperación y deben fortalecerse todavía más para cuidar nuestra soberanía y nuestro derecho a ser escuchados.

En nuestra organización seguimos apoyando la lucha contra los gobiernos coloniales y neoliberales que es lo que nos reúne en este encuentro internacional, bajo las políticas del Consejo Mundial por la Paz, para seguir rechazando todas las formas de intervencionismo y militarismo de los Estados Unidos y de la OTAN contra nuestros pueblos.

Rechazamos las bases militares extranjeras en América Latina en especial la presencia militar de EEUU en Guantánamo la que es ocupada ilegalmente y sin el consentimiento del pueblo cubano y donde sigue operando una cárcel ilegal y que ahora también es usada para tener prisioneros a personas migrantes.

Seguimos rechazando los ejercicios militares que realiza el Comando Sur por toda América Latina como el entrenamiento que se sigue dando a soldados latinoamericanos en la continuadora de la Escuela de las Américas la que hoy se la conoce como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés).

En las últimas décadas, graduados de la Escuela de las Américas y de WHINSEC han participado en los siguientes hechos:

- En el Intento de Golpe de Estado en Venezuela (2002)
- En el Golpe de Estado en Honduras (2009)
- En el asesinato de Berta Cáceres en Honduras (2016)
- En el Golpe de Estado en Bolivia (2019)
- Las violaciones de DDHH en Chile (2019)
- En el asesinato del presidente Jovenel Moise en Haití (2021)
- En Chile en la militarización contra el pueblo mapuche, en la Zona de la Araucaria, desde el año 2021 a la fecha.

También existe, en El Salvador, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (International Law Enforcement Academy, ILEA por

su siglas en inglés) que es otra herramienta de los EEUU para inyectar en nuestras policías, jueces y fiscales su ideología y defender sus intereses.

Entonces, podemos concluir que ILEA es un instrumento para la guerra jurídica o “lawfare” que es otra forma que tiene el imperialismo y la extrema derecha para bloquear los procesos sociales al procesar y encarcelar a líderes progresistas como muy bien lo vimos que realizaron contra Rafael Correa, en Ecuador, y contra el mismo presidente Lula, en Brasil, cuando este estuvo encarcelado.

La militarización a nuestro juicio ha seguido creciendo con la llegada de Javier Milei en Argentina quien ha firmado acuerdos para que el Comando Sur tenga una base militar en el sur de la Argentina y que de concretarse será muy difícil para los gobiernos que le sigan poder revocar esos tratados.

Por otro lado, seguimos mirando con mucha preocupación la presencia permanente de militares estadounidenses en el Perú donde existe hace más de 40 años, desde 1983, un laboratorio biológico militar que se llama Unidad de Investigación Médica Naval de EEUU que también es conocido como NAMRU-6. Tiene tres instalaciones: en Lima, Iquitos y Puerto Maldonado.

También en Honduras, NAMRU-6 abrió, en los años recientes, una nueva unidad dentro de la Base Aérea Soto Cano donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del Ejército de EEUU. Esto es muy preocupante.

La historia sabe lo que significa la guerra biológica y lo sabe muy bien Cuba que sufrió, en los años setenta, un ataque del imperialismo estadounidense con Armas Biológicas el que introdujo intencionalmente el dengue hemorrágico y el virus de la fiebre porcina.

También, al igual que Argentina y Perú, Ecuador se está convirtiendo en los últimos tiempos en una base militar permanente del Ejército de los Estados Unidos para en caso de ser necesario intervenir contra otras naciones de América Latina.

Son muchos los temas en los que tenemos nuestra mirada y sería largo mencionarlos todos. Solamente reiterar nuestra solidaridad permanente con el gobierno cubano y con su pueblo y la exigencia permanente por el fin del bloqueo criminal de EEUU contra Cuba y la devolución de los territorios de Guantánamo que hasta el día de hoy controla Estados Unidos contra la voluntad de la patria de Fidel.

Reiterar nuestro apoyo a la causa de Las Malvinas y el fin de todas las bases militares de los Estados Unidos y de la OTAN en América Latina y en todo el mundo. Reiterar nuestra lucha por la paz, el fin de las guerras, y por el establecimiento de negociaciones urgentes que permitan un alto al fuego en la guerra contra el pueblo palestino que es un genocidio cometido por el gobierno sionista de Israel. Seguiremos defendiendo la Proclama de la CELAC de que América Latina y El Caribe son y deben seguir siendo una Zona de Paz.

¡¡Muchas gracias!!

* Alicia Lira Matus, nació en Concepción y reside en Santiago de Chile. Es Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW-Chile). Por su destacada labor en defensa de la paz y los derechos humanos, ha recibido el Premio por la Paz de la Unión Dominicana de Periodistas por la Paz; la distinción Arte y Memoria Joan Jara, de parte de la Fundación Víctor Jara; la Medalla de Honor por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos; el año 2023 la Universidad de Chile le entregó la distinción “Medalla Derechos Humanos y Democracia”. Desde AFEP, encabeza la lucha contra la impunidad, por la Verdad y la Justicia tanto de los crímenes sucedidos en los tiempos de la dictadura como en democracia. Apoya la lucha por la libertad de los presos políticos, por la autodeterminación de los pueblos, por la paz y contra la militarización. Esta ponencia fue presentada en el Encuentro Regional del Consejo Mundial por la Paz realizado, el 16 y 17 de junio de 2025, en Salvador de Bahía, Brasil.

EEUU y la militarización en América Latina

*Por Pablo Ruiz Espinoza**

La militarización en América Latina, de la policía especialmente, ha jugado en algunos países un papel importante en la política de los Estados con el objetivo de controlar a la población como de reprimir a los movimientos sociales que luchan por sus reivindicaciones. Sigue en el ADN de la fuerza pública la Doctrina de la Seguridad Nacional inoculada por los Estados Unidos.

En ese sentido, el tema de la seguridad pública se ha convertido en una excusa para que muchos gobiernos restrinjan nuestros derechos y permitan el abuso policial y judicial contra la población con la justificación de resguardar el «orden público» o de combatir el crimen organizado.

Así mismo se incrementan los recursos públicos para los ejércitos y las policías. Se les da más armamento y más equipamiento “antidisturbios”. En contraste, no hay recursos suficientes para financiar las necesidades más urgentes de nuestros pueblos.

A la par, se aprueban leyes que protegen más a la fuerza pública y en los pocos casos de violencia policial o militar que logran llegar a la justicia, en la mayoría de los casos se les da impunidad o condenas irrisorias. Si bien la cantidad de casos no son comparables a los de la época de las dictaduras militares igualmente son violaciones graves a los derechos humanos por lo cual, los Estados, no cumplen el derecho humano a la no repetición al que se han comprometido.

A todo lo anterior, en las últimas décadas, en muchos de nuestros países, han surgido grupos paramilitares o del crimen organizado que realizan control territorial y que imponen el miedo y el sometimiento de la población al amparo del sistema estatal que, curiosamente, no los puede desarticular.

Como es obvio, se siguen desarrollando, en la gran mayoría de los países del continente, ejercicios militares conjuntos con el ejército de los Estados Unidos. A pesar que existan gobiernos progresistas no es fácil cortar las amarras con la potencia del norte por la presión y poder que tiene este, por el poder que mantienen las FFAA y policiales, por la presión de las grandes Corporaciones que exigen estándares de seguridad de sus “inversiones”; y por las oligarquías nacionales; el poder profundo.

Miremos una foto rápida de lo qué pasa en algunos de nuestros países del continente:

Argentina

En Argentina se ha incrementado la represión de las manifestaciones sociales al mismo tiempo que el presidente Javier Milei estrecha las relaciones con los Estados Unidos y con Israel. La situación económica y social es crítica con la implementación de políticas públicas que quitan derechos sociales alcanzados.

Agenda Malvinas informó, en marzo de 2025, que EEUU y Argentina firmaron un nuevo acuerdo que permitirá la cooperación entre las Fuerzas de Operaciones Especiales argentinas y las tropas estadounidenses y que estas se puedan entrenar en territorio nacional.

“Los ejercicios tendrán lugar en Santa Cruz, la Isla Grande de Tierra del Fuego, y dentro de ella, Islas de los Estados, áreas estratégicamente sensibles de la soberanía nacional. Más aún dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en las cuales están incluidas las

Islas Malvinas y los archipiélagos del extremo sur, donde los norteamericanos han venido realizando ejercicios aéreos y navales, con los invasores anglosajones, al punto de haber destinado un submarino de propulsión nuclear estadounidense, portando misiles de largo alcance”, señalaron.

A esto, el 2024, el presidente de Argentina, Javier Milei, en la ciudad patagónica de Ushuaia, se reunió con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, y firmó un acuerdo para establecer una base conjunta en Tierra del Fuego.

Chile

En Chile, la policía sigue reprimiendo la protesta social. Así pasó en las manifestaciones por los 52 años del golpe de Estado contra Salvador Allende y en las manifestaciones que realizaron los estudiantes en Santiago. Es común el uso de carros lanza agua y de lacrimógenas contra manifestantes que se expresaban pacíficamente en la vía pública.

De las 10.142 denuncias de violaciones graves a los derechos humanos, durante el estallido social de 2019, solamente 67 casos han logrado una condenada de acuerdo a lo señalado por Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional Chile lo que deja en evidencia que la impunidad sigue imperando en el país.

Al sur de Chile, en la zona mapuche, ya se cumplieron más de tres años del más largo periodo de aplicación de estados de excepción donde los militares en conjunto con la policía pueden reprimir las acciones de los grupos mapuches que siguen reivindicando los derechos a su tierra y luchando contra las empresas forestales. Mientras el gobierno acusa a Venezuela de no respetar los derechos humanos, en las cárceles chilenas hay más de 100 presos políticos mapuche. Vale agregar que también siguen existiendo presos políticos chilenos.

En 2025, Chile y Estados Unidos participaron conjuntamente, en nuestro país, en los ejercicios militares “Estrella Austral” y “Southern Vanguard”. La relación militar ha sido muy estrecha bajo el mandato del presidente Gabriel Boric. Se realizan ejercicios militares de manera periódica en la última década y se siguen enviando tropas chilenas a formarse a las academias militares de EEUU.

Entre los años 2015 al 2023, según información de la continuadora de la Escuela de las Américas, ahora llamada WHINSEC, 1088 militares chilenos se entrenaron en Fort Benning, Estados Unidos. Sumando, en total, más de 6 mil soldados chilenos se han graduado de la Escuela de las Américas y WHINSEC.

Como sabemos Estados Unidos sigue fomentado la doctrina de la contra-insurgencia y es sabido que el ejército estadounidense ha sido acusado de cometer crímenes de guerra en varios países donde ha intervenido. Adicionalmente, Chile sigue manteniendo una dependencia militar con Israel que esta cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. CIPER, en un artículo de investigación, de agosto de 2025, señaló que “los flujos comerciales se mantienen y los contratos militares siguen activos” con Israel.

Perú

En Perú, pese a las intensas protestas y al asesinato de más de 67 personas y miles de heridos que se han producido, sigue el gobierno de facto de Dina Boluarte sin llamar y anticipar elecciones libres. ¿Qué dicen los defensores de la democracia occidental?, nada.

En Perú hay tropas estadounidenses operando en el mismo país y lo que más llama la atención es que hay 3 instalaciones militares de EEUU, en Lima, Iquitos y Puerto Maldonado, llamada NAMRU-6, estudiando enfermedades infecciosas de la población.

Nos preguntamos: ¿Están preparándose para una invasión futura a nuestros países del sur? ¿Armas biológicas? ¿Están tomando las medidas necesarias de seguridad, en sus investigaciones, para que no haya una propagación de virus infecciosos o pandemia?

Infobae señaló en agosto de 2025 que en "Challapalca, una localidad peruana ubicada en la región Tacna a más de 4.320 metros sobre el nivel del mar, fue el escenario de una operación militar conjunta entre el Ejército del Perú y una delegación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos".

Colombia

De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), a agosto de 2025, durante este año se han asesinado a 102 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, se han realizado 50 masacres y se han asesinado a 29 firmantes de los Acuerdo de Paz.

Desde enero del 2016 hasta el 22 de agosto de 2025, INDEPAZ reportaba el asesinato de 1806 líderes, lideresas y defensores DDHH, 666 masacres, y de 467 firmantes del Acuerdo de Paz.

El gobierno dirigido por el presidente Gustavo Petro, sin embargo, sigue sus esfuerzos para avanzar hacia una paz total con las organizaciones insurgentes. Entre otros, se creó la oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia.

Recordemos que en un acto de reconocimiento por colombianos asesinados por el ejército, registrados entre los años 2002 y 2008, el ex Ministro de Defensa Iván Velásquez expresó que "Estamos empeñados en una transformación de la Fuerza Pública, es decir de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, ellas tienen que privilegiar la vida sobre la muerte, la vida de toda la población".

Sin embargo, durante el mandato del presidente Gustavo Petro, la relación militar de Colombia con EEUU se ha mantenido. Vale anotar que la

Comisión de la Verdad de Colombia recomendó revisar las políticas de defensa, de seguridad, y de “cooperación” militar que se mantienen con los EEUU tras el objetivo de tener “una política nacional de defensa propia a favor de la paz y el respeto de los derechos humanos”.

En los últimos años, se han realizado ejercicios militares entre Colombia y EEUU en el mar caribe; entrenamiento en operaciones aéreas; y entrenamientos militares conjuntos.

Este 2025 la embajada de EEUU en Colombia ha informado que entre La Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aérea del Sur de los Estados Unidos y la Guardia Nacional Aérea de Carolina del Sur, se realizarán los ejercicios “Relámpago de los Andes” (RDLA).

El “RDLA es un ejercicio combinado de Colombia y Estados Unidos en el teatro del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM), enfocado en técnicas, tácticas y procedimientos que fortalecen la tradicionalmente cercana cooperación en seguridad entre ambas fuerzas armadas”.

También recordemos que, en marzo de 2023, estuvo en Colombia, en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, una delegación del Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) encabezada por su comandante Michael Rogowski.

“Durante la visita, se llevaron a cabo diversas actividades, incluyendo conferencias, talleres y ejercicios prácticos, en los cuales se analizaron estrategias y tácticas militares actuales”, señaló el ejército colombiano.

El Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad o WHINSEC es uno de los tantos institutos militares de EEUU donde soldados latinoamericanos reciben entrenamiento. Antes de llamarse así, en el mismo lugar, con los mismos instructores, se conocía como la Escuela de las Américas donde se graduaron importantes dictadores y violadores de los derechos humanos.

Es importante recordar que durante los años noventa se realizaron multitudinarias movilizaciones en los EEUU, en el frontis del Fuerte Benning, lideradas por el movimiento de la SOA Watch y por el ex sacerdote Roy Bourgeois, demandando el cierre de la “Escuela de Asesinos”. También en el Congreso estadounidense, se estuvo a muy pocos votos de cerrar la Escuela de las Américas. Todo lo anterior llevó a que, el 17 de enero de 2001, la Escuela de las Américas cambiará de nombre y pasará en adelante a llamarse como WHINSEC para seguir haciendo lo mismo el adoctrinamiento de los ejércitos de América Latina.

En WHINSEC, se siguen entrenando tropas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú, entre otros.

En julio de 2023, en EEUU, en Fort Benning, en la Ceremonia de las Banderas, donde se recibió en WHINSEC a la promoción de 2024, del Curso de Oficiales de Comando y Estado Mayor, el coronel Michael Rogowski, comandante de WHINSEC, expresó con mucha sinceridad las intenciones de los EEUU: “Sí, están aquí para aprender la doctrina del Ejército... pero creo que es esencial comprender la cultura y los valores de Estados Unidos y cómo funcionan los ejércitos democráticos”.

“Parte de la razón por la que estamos aquí es para asegurarnos de que la gente se lo pase bien, lo disfrute y lo recuerde siempre con cariño”, agregando, “De modo que, en algún momento en el futuro, si necesitamos trabajar juntos, tengamos un socio confiable y un amigo confiable”.

Las venas abiertas de América Latina y la buena memoria de quienes han padecido el terrorismo de Estado recordarán por siempre el entrenamiento contrainsurgente que hicieron los graduados de la Escuela de las Américas, los manuales con los que enseñaban, y todo lo que ha hecho el “ejército democrático” de los EEUU el que ahora, bajo la presidencia de Donald Trump, sigue apoyando y enviando armas al Estado de Israel y también a Ucrania.

México

En México, el 2023, los zapatistas salieron nuevamente a las calles al grito de «alto a la guerra» contra sus comunidades. Piden el cese en la escalada de violencia fomentada por paramilitares, el narco y el mismo Ejército. El 2025, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba) denunció que Fuerzas de Seguridad y Militares desaparecen a 2 Bases de Apoyo Zapatistas.

Es sabido que los grupos narcotraficantes en México controlan diversos territorios sembrando el miedo y la violencia. Una de las medidas que ha tomado el gobierno mexicano ha sido demandar a los fabricantes de armas de los EEUU y ha pedido al gobierno estadounidense que frene el tráfico de armas ya que las armas de EEUU, en muchos de nuestros países, terminan en manos del crimen organizado.

El Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, durante el 2023, desarrolló una campaña en apoyo y solidaridad con “las más de 110,000 víctimas de desaparición forzada en México” y “los más de 196.000 migrantes deportados el año pasado” desde los EEUU los “que están sujetos a criminalización, vulnerabilidad, brutalidad policial y otras formas de violencia organizada”.

A 11 años del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sigue desaparecida hasta la misma verdad para sus familiares.

“La información faltante en estos momentos es la que tiene el Ejército Mexicano, y es una información clasificada, una información sumamente relevante porque ellos dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida (de Ayotzinapa) y durante los hechos”, ha señalado Vidulfo Rosales Sierra abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

La relación militar de México con EEUU sigue muy activa. En mayo de 2025, el sitio infodefensa.com informó que “mandos militares de México y Estados Unidos supervisan adiestramiento conjunto en Chihuahua”.

El Salvador

En El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, se han incrementado las violaciones a los derechos humanos por parte de las policías y de los militares: detenciones arbitrarias, detenciones forzadas, torturas, faltas al debido proceso y el desmantelamiento de la independencia del poder judicial.

La cifra de detenidos, por ejemplo en el año 2023, bajo el régimen de estado de excepción, ya supera las 71.770 personas, más del 1% del total de la población. Quienes son detenidos no tienen las garantías de un debido proceso o de un juicio justo y rápido. El 2025, ya supera las 88.000 personas capturadas.

De estos, a marzo de 2023, Cristosal documentaba la muerte de 153 reos bajo custodia del Estado. En agosto de 2025, “Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, organizaciones cuyos directores se retiraron de El Salvador, han reportado más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal durante el régimen de excepción” (El Mundo).

Noah Bullock, director de Cristosal, dijo que “da mucha tristeza ver que el Estado ha recurrido nuevamente a las detenciones arbitrarias y torturas en nombre de la seguridad nacional”.

Todo esto sucede en El Salvador donde funciona la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en Inglés) del gobierno de los Estados Unidos, donde se forman policías, fiscales y jueces, y que según su misión busca hacer “hincapié en la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho”.

Asimismo, en agosto de 2025, en El Salvador, se han realizado los ejercicios y competencia denominada Fuerzas Comando 2025, bajo el auspicio del Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command), donde participaron equipos de élite, fuerzas de operaciones especiales, provenientes de Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Haití

En Haití, nuestro hermano siempre olvidado de nuestro continente, la situación sigue siendo muy grave. En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha autorizado el despliegue de una nueva misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití.

Nueva, digo, porque ya estuvieron en Haití, del 2004 al 2017, con el despliegue de la MINUSTAH, y nada mejoró para su población.

En una declaración firmada por organizaciones sociales de América Latina y El Caribe se ha señalado, entre otras cuestiones, que:

“La MINUSTAH ha sido responsable de masacres, fraudes electorales, saqueo de recursos, abusos sexuales y niñas y niños abandonados, introducción de la epidemia de cólera, y otros hechos de gravedad similar. Ni la ONU ni ninguno de los países participantes ha asumido ninguna reparación por los más de 30.000 muertos ni demás daños y damnificados”.

“El pueblo haitiano a través de sus organizaciones sociales, políticas y humanitarias se ha expresado claramente en contra de cualquier ocupación y contra cualquier elección controlada bajo ocupación”.

Finalmente, sobre Haití recordar que entre los asesinos del presidente Jovenel Moïse figuraban siete colombianos que fueron entrenados militarmente por los Estados Unidos, el mismo país que también ha entrenado a la policía haitiana acusada de abusos y violencia. El mismo país que el 2004 orquestó un golpe de Estado y donde un comando de Fuerzas Especiales estadounidenses, con el apoyo de Francia, secuestró al presidente Jean-Bertrand Aristide siendo depuesto de su cargo legítimo.

¿Qué necesita Haití? Respeto al derecho de autodeterminación. No necesita más militarización sino apoyo internacional para reconstruirse social y económicamente luego de tantos años de tragedias, intervenciones y saqueos.

* Pablo Ruiz Espinoza es egresado de Periodismo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador en Chile del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, organización que trabaja en alianza con SOA Watch, International Peace Bureau (IPB) y con World Beyond War. Es editor del sitio www.derechoalapaz.org.

Ha realizado en los últimos años, el 2021, el Curso de Monitoreo de Derechos Humanos para Defensores y Defensoras el que fue organizado por Naciones Unidas Ecuador; Naciones Unidas Derechos Humanos, Alto Comisionado; Fundación Idea Dignidad. El Curso Internacional de Derechos Humanos: “Memoria, Verdad, Justicia y Democracia. Herencias y Proyecciones” realizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos UNESCO-CIPDH, Argentina, año 2021. La Diplomatura Internacional en Comunicación y Defensa Nacional dictada por la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina, año 2023; El Curso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y sus mecanismos desde un enfoque en materia de memoria, verdad y justicia realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), año 2024.

La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia

*Por Renán Vega Cantor**

Hemos obtenido todo lo que hemos solicitado a este país [...]. Colombia no ha regateado sino que de todo corazón ha salido en apoyo de nuestra política [...] y no existe país en Sur América que se haya desempeñado en forma más cooperadora.

(Spruille Braden, Embajador de los Estados Unidos, 6 de marzo de 1942, citado en David Bushnell, Eduardo Santos y la política del Buen Vecino, Bogotá: El Ancora Editores, p. 45).

Consideramos que [...] debe realizarse un esfuerzo concertado por todo el Equipo del País [Colombia] a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia, [...] y, en la medida en que sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos. Los Estados Unidos deben apoyar esto.

(John F. Kennedy Library. National Security Files. Box 319. Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia, 3/1962, «Secret Supplement, Colombian Survey Report»).

La subordinación estratégica de Colombia

A la hora de analizar las causas del conflicto social y armado, así como las variables que lo han prolongado y el impacto sobre la población civil, Estados Unidos no es una mera influencia externa, sino un actor directo del

conflicto, debido a su involucramiento durante gran parte del siglo XX. Sus acciones se inscriben en el marco de una relación de subordinación, entendida como un vínculo de dependencia en donde el interés particular de Colombia se considera representado en los servicios a un tercero (Estados Unidos), que se concibe como dotado de una superioridad política, económica, cultural y moral. Es una relación desigual y asimétrica que asume un carácter estratégico, pues la existencia misma de la República se piensa como indisoluble de la situación de subordinación. Una subordinación estratégica y una autonomía restringida son claves a la hora de entender la perduración del conflicto, ya que Estados Unidos es agente central en la definición de los lineamientos políticos de las clases dominantes en Colombia.

Del tema central, la dimensión internacional del conflicto armado, se derivan un par de aspectos internos de Colombia: la contrainsurgencia y el Terrorismo de Estado. Se analiza el origen y construcción de un «bloque de poder contrainsurgente», a partir, primero, de la represión y persecución a los movimientos sociales y políticos que en la primera mitad del siglo XX pusieron en cuestión el orden establecido (como las luchas populares de la década de 1920 y el gaitanismo en la década de 1940) y, segundo, de la sofisticación doctrinaria de la contrainsurgencia por influencia directa de los Estados Unidos a comienzos de la década de 1960.

En la contrainsurgencia nativa se utilizan mecanismos represivos de índole ideológica, mediática, jurídica, militar, por sectores de las clases dominantes, el bipartidismo, las Fuerzas Armadas y el Estado, para perseguir a los adversarios sociales y políticos, como un procedimiento de vieja data.

En un momento clave de esa contrainsurgencia nativa, a mediados de la década de 1940, se forman los «pájaros» (sicarios paramilitares), se politizan la policía y el Ejército, con la finalidad de perseguir gaitanistas, comunistas y nueve abrileros.

La contrainsurgencia nativa se entronca con la contrainsurgencia moderna que se implementa desde mediados de la década de 1950 y tiene un carácter más doctrinario y elaborado tras la Revolución Cubana.

Esa contrainsurgencia moderna, con un acentuado carácter anticomunista, justifica la persecución sistemática de la protesta social, encubierta con el manto de la Guerra Fría y luego de la Guerra contra las Drogas y la Guerra contra el Terrorismo.

Cuando la contrainsurgencia se convierte en una doctrina oficial de las Fuerzas Armadas y del Estado colombiano se erige en uno de los soportes del Terrorismo de Estado, que se remite a la Masacre de las Bananeras, de 1928, como su antecedente más tristemente célebre. El saldo de dolor de ese terrorismo estatal, durante los últimos 65 años, es similar al generado por las dictaduras del Cono Sur o de América Central y el Caribe en diversos momentos del siglo XX.

Son múltiples los impactos de la intervención de los Estados Unidos en el conflicto colombiano y los efectos de la contrainsurgencia y del terrorismo de Estado, entre los cuales se resaltan el paramilitarismo, los asesinatos de Estado (mal llamados «falsos positivos»), la creación de redes oficiales de espionaje y persecución de adversarios políticos (como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), las fumigaciones aéreas, los bombardeos, las violaciones y tráfico sexual que realizan mercenarios y militares de los Estados Unidos.

Del análisis efectuado se desprende que Estados Unidos ha desempeñado un papel protagónico en la persistencia del conflicto armado en Colombia por su influencia directa en los asuntos de nuestro país (con énfasis en el terreno militar y la apertura de mercados) desde finales de la década de 1930, durante la administración presidencial de Eduardo Santos.

La injerencia de los Estados Unidos asume la forma de «intervención por invitación», en concordancia con el carácter subordinado de las clases dominantes y el Estado colombiano. Y aunque la contrainsurgencia y el Terrorismo de Estado son anteriores a la presencia de los Estados Unidos en la vida política colombiana, adquieren un nuevo sentido, sistemático y permanente, tras la adscripción del país a la órbita anticomunista de Washington después de la Guerra de Corea (1950-1953), que se mantiene hasta el día de hoy.

Conclusiones

A continuación presentamos algunas conclusiones de este informe:

Durante gran parte del siglo XX entre las clases dominantes y los Estados de Colombia y los EEUU se ha generado una alianza estratégica que beneficia mutuamente a las dos partes, pero que perjudica a las mayorías sociales de nuestro país. Los primeros se lucran por los préstamos y las ayudas militares, por lo que han establecido una subordinación y dependencia incondicional. Los segundos porque controlan diversos aspectos de la sociedad y política colombianas, así como los más importantes renglones de la actividad económica, por el predominio de sus empresas e inversiones en renglones estratégicos.

En Colombia existe una contrainsurgencia nativa -que se nutre del anti-comunismo- que es anterior al surgimiento de la doctrina de la contrainsurgencia, pero que se renueva y se mezcla con esta última a raíz de los intereses geopolíticos de EEUU durante la Guerra Fría. La injerencia de EEUU en el conflicto social y armado de nuestro país ha sido constante y directa desde finales de la década de 1940, lo cual se expresa tanto en la ayuda militar al Estado, como en el fomento de las políticas de contrainsurgencia.

Los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de las últimas siete décadas son responsables directos en la perpetuación del conflicto armado en Colombia, en la medida en que han promovido la contrainsurgencia en todas sus manifestaciones, estimulado y entrenado a las Fuerzas Armadas con sus métodos de tortura y eliminación de los que son considerados como «enemigos internos» y bloqueando las vías no militares de solución a las causas estructurales del conflicto social y armado.

La misión del general Yarborough de 1962 es directamente responsable de la consolidación del paramilitarismo en Colombia, puesto que recomendó que fueran organizados grupos de civiles y militares, promovidos por el Estado, con la finalidad explícita de perseguir y matar a aquellos considerados como comunistas.

Estados Unidos ha contribuido a la militarización de la sociedad colombiana por su financiación y apoyo al Estado colombiano y a sus Fuerzas Armadas a nombre de diversas cruzadas, contra el comunismo, el narcotráfico o el terrorismo.

Estados Unidos es corresponsable directo en miles de asesinatos que han cometido las Fuerzas Armadas y los paramilitares, por su patrocinio a brigadas militares comprometidas en ese tipo de crímenes y por su respaldo a grupos privados de asesinos.

El control directo del DAS por parte de Estados Unidos -desde el momento de su fundación, en 1960, hasta su reciente disolución- los hace corresponsables de los numerosos crímenes y delitos que contra la población se cometieron desde ese organismo de seguridad, entre los que se incluyen asesinatos de sindicalistas y dirigentes sociales y el seguimiento y acoso a sectores de la oposición política.

Al promover la llamada «guerra contra las drogas» Estados Unidos está involucrado en forma directa en la destrucción de economías campesinas e indígenas en diversos lugares de Colombia, que son víctimas de fumigaciones, de bombardeos y de la persecución oficial y paraoficial.

La privatización de la guerra que impulsa el Plan Colombia y la nueva contrainsurgencia promueven la utilización de mercenarios en el conflicto interno de nuestro país, que cometen numerosos delitos (violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones), que gozan de plena impunidad, en virtud de los acuerdos entre Colombia y EEUU. Con esto se refuerza la «cultura de la impunidad» que caracteriza a las Fuerzas Armadas de Colombia.

El terrorismo de Estado que se perpetúa en Colombia desde finales de la década de 1940 se alimenta tanto del sostén militar y financiero de los Estados Unidos, como de los intereses de las clases dominantes criollas, para preservar su poder y su riqueza y negarse a realizar elementales reformas económicas y sociales de tipo redistributivo.

Algunas empresas de capital estadounidense -como la Chiquita Brands-, que han financiado y patrocinado a grupos paramilitares, son responsables directos de cientos de crímenes cometidos en diversos lugares de Colombia, pero nunca han sido procesados en nuestro país, donde gozan de plena impunidad.

Recomendaciones

De este informe se desprenden dos clases de recomendaciones, unas sobre los archivos, difusión y acceso a la información y otras de tipo general, presentadas en forma sintética:

Archivos, acceso y difusión de la información:

Para el conocimiento, reconstrucción y búsqueda de la verdad sobre la responsabilidad de Estados Unidos en el conflicto colombiano, así como de sus múltiples derivaciones y nexos con el Estado colombiano, sus Fuerzas Armadas, organismos de seguridad y empresarios privados, es indispensable que se desclasifiquen los documentos atinentes a Colombia que reposan en los archivos estadounidenses.

Esa documentación debería considerarse como patrimonio documental del país y debería ser traída a nuestro territorio, y ser depositada en el Archivo General de la Nación y ser traducida y difundida públicamente.

Los archivos del DAS, FFAA, Ministerio de Defensa y de las entidades de seguridad del Estado deben ser preservados por entidades independientes y sin vínculos con las Fuerzas Armadas y revelada tanto la información relacionada con las actuaciones de los EEUU como con la represión interna.

El Estado colombiano debe abrir portales virtuales de fácil acceso en el que se almacene y se pueda consultar la información documental sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano.

De tipo general:

Para construir una sociedad en paz y democrática es indispensable replantear las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, de tal manera que se recupere la soberanía nacional con el objetivo de manejar en forma autónoma nuestros asuntos y que las políticas internas no se guíen ni por los intereses de Washington ni de ningún poder foráneo, sino que respondan a los intereses de la población colombiana.

El Estado colombiano le debe revelar a la sociedad todos los pactos y acuerdos militares secretos que existen con los Estados Unidos y con cualquier otro Estado (como Israel) y debe comprometerse a que nunca se volverán a establecer acuerdos de esa naturaleza.

En aras de contribuir a la justicia hacia las víctimas, el gobierno de los Estados Unidos debe facilitar que los ciudadanos de ese país involucrados en graves crímenes en contra del pueblo colombiano, en particular asesinatos, desapariciones y casos de violación sexual, respondan ante tribunales independientes y se ponga fin a la impunidad que los protege. Asimismo, que se eliminen los privilegios y protección de que gozan los militares de los Estados Unidos y los mercenarios a su servicio.

Es indispensable que cese la participación de los Estados Unidos en el manejo de las agencias de seguridad, como sucedió con el DAS.

Se deben investigar los casos de violencia sexual ejercida por militares y mercenarios de los Estados Unidos en todo el territorio colombiano y castigar a los culpables.

Las Fuerzas Armadas en Colombia deben abandonar sus concepciones de contrainsurgencia, de anticomunismo y de enemigo interno, volver a sus cuarteles, reducir su tamaño y presupuesto y dedicarse a resguardar las fronteras nacionales. Esto implica una desmilitarización de la sociedad colombiana, que posibilite que nuevas fuerzas sociales y políticas se organicen y se expresen libremente sin el temor a ser víctimas de la persecución y estigmatización desde doctrinas contrainsurgentes y/o de la seguridad nacional.

Debe abandonarse el tratamiento militar y represivo que se ha impuesto en Colombia en las últimas seis décadas y plantearse nuevas formas de abordar complejos problemas de nuestra sociedad, como el atinente a los cultivos de uso ilícito.

Dado el carácter unilateral y arbitrario cómo opera la extradición (que se sepa ningún ciudadano de los Estados Unidos ha sido extraditado a Colombia), resulta indispensable ponerle término a la extradición de colombianos hacia Estados Unidos o cualquier otro país.

El gobierno de los Estados Unidos debe aceptar su responsabilidad, de manera inequívoca, ante las víctimas por su participación directa e indirecta en nuestro conflicto, de la misma manera en que la guerrilla de las FARC-EP ha aceptado su parte de responsabilidad y como también lo debe hacer el Estado.

Las víctimas del paramilitarismo, de los bombardeos, fumigaciones, asesinatos (como los mal llamados «falsos positivos»), así como de las políticas militares, sociales, económicas y comerciales impuestas por Washington que han tenido un impacto nocivo sobre millones de colombianos, necesitan saber la verdad sobre la participación de Estados Unidos en su sufrimiento.

Se precisa de una disculpa pública incondicional e inequívoca por parte del gobierno de Estados Unidos, así como reparación a las víctimas y una garantía de no repetición de esta injerencia perniciosa en el futuro.

Se deben desmontar los mal llamados programas de «asistencia militar», mediante los cuales se produce una injerencia política ilegítima en nuestros asuntos domésticos, así como se ha promovido la idea en las Fuerzas Armadas de que los colombianos, o algunos de ellos, son un «enemigo interno» al que se combate y aniquila. Esto es un aspecto central de la democratización de la sociedad y de la depuración de las Fuerzas Armadas.

Debe haber una audiencia e investigación en profundidad de las actividades de la agencia de cooperación estadounidense USAID, la cual, operando desde una matriz primordialmente contrainsurgente y beligerante, ha

estado implicada desde un primer momento en la asistencia a actividades e instituciones que han promovido masivamente la violación de derechos humanos, tales como el DAS y las acciones cívico-militares. Se trata de desmilitarizar la cooperación de tal manera que no represente un atropello a nuestra soberanía.

Teniendo en cuenta la complicidad directa de los grandes medios de comunicación de Colombia en la legitimación de la intervención de Estados Unidos -y de sus crímenes-, junto con el Terrorismo de Estado y la contra-insurgencia, deben ser responsabilizados como victimarios por ser generadores de la «cultura de la impunidad», de la mentira y la desinformación.

* Renán Vega Cantor es investigador independiente, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Autor de libros sobre la influencia del imperialismo en la vida colombiana y latinoamericana. Fue miembro de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas. Ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, versión 2007-2008, con el libro *Un mundo incierto*. Este es un extracto del artículo original el que puede ser encontrado en www.rebelion.org

El entrenamiento militar estadounidense y su impacto en los derechos humanos desde la perspectiva de Colombia

¿Qué normas necesitamos?

*Por Pablo Ruiz Espinoza**

Colombia es uno de los países de América Latina donde por más de medio siglo se ha vivido un conflicto armado interno y donde se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

De acuerdo al Informe Final, del año 2022, “Hallazgos y Recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia” hubo en este conflicto hasta esa fecha:

- 450.666 muertos
- 121.768 desaparecidos de manera forzada
- 50.770 secuestrados
- 16.238 niños, niñas y adolescentes reclutados por los actores armados
- Alrededor de 8 millones de desplazados

Asimismo, de acuerdo con los registros oficiales y el estudio realizado por la Comisión junto con el ACNUR, para el periodo entre 1982 a 2020, más de un millón de personas tuvieron que salir del país, y buscar protección internacional con diferentes estatus o reconocimiento a diferentes países.

El citado informe estima que hubo nueve millones de víctimas, de las cuales el 90 % son civiles y el 10% son actores armados.

Es importante mencionar que dentro de los hallazgos que aparecen en el Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia se establece que la relación con EEUU ha sido muy importante y que su incidencia fue negativa en el conflicto armado. Los hechos, confirman esa verdad. Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las y los defensores de derechos humanos.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad señala textualmente que:

- “Las relaciones internacionales con Estados Unidos han sido fundamentales en la construcción del modelo de seguridad imperante en Colombia hasta hoy”.
- “Colombia ha aceptado el marco discursivo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1950: primero, la guerra contra el comunismo; segundo, la guerra contra las drogas, y tercero, la guerra contra el terrorismo”.
- “Los modelos contrainsurgente, antidrogas y antiterrorista han resultado funcionales a una mentalidad que se ha dirigido a la guerra, no a la apertura política y democrática ni a las reformas sociales...”.

El informe indica cinco aspectos centrales de esta injerencia:

- “La doctrina contrainsurgente que ha tenido como centro la construcción de la idea del enemigo interno”.
- “La privatización de la seguridad, primero recomendando la creación de grupos paramilitares y, luego, en menor medida, con el uso de compañías militares y de seguridad privada en el marco de la cooperación binacional”.
- “La focalización de recursos para protección de intereses económicos de compañías multinacionales”.
- “Los recursos y prioridades claras para combatir a las guerrillas, pero escasos contra el paramilitarismo”.
- “La materialización de la asistencia militar en formación, armamento, recursos financieros y equipamiento, acompañada de metas y resultados esperados que, en la práctica, llevaron a cometer violaciones a los

derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta asistencia tuvo una escasa fiscalización, tan solo algunas rendiciones de cuentas en el Congreso estadounidense”.

El informe referido, indica que “en este contexto se reestructuró la fuerza pública, sus integrantes recibieron entrenamiento militar en la Escuela de las Américas y en bases militares estadounidenses, se ajustaron los manuales y reglamentos militares y de policía y se desarrolló la inteligencia contrainsurgente. Así mismo, se profundizó la militarización de la Policía”.

En datos concretos, entre 1999 y 2018, los Estados Unidos dio capacitación militar a más de 110.000 efectivos de Colombia en diversos centros de entrenamiento militar. Entre ellos, más de 19.000 militares y policías colombianos han sido entrenados, desde 1946 a 2020, en la Escuela de las Américas (SOA, por sus siglas en inglés). Desde enero del 2001, este centro de entrenamiento en los Estados Unidos pasó a llamarse Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, por sus siglas inglés).

Sin embargo, Estados Unidos y la OTAN dan entrenamiento a muchos países del mundo siendo esto también un factor en la ingeniería de la destrucción y militarización. Entre ellos también dan entrenamiento a Israel. Téngase presente.

¿Qué es la Escuela de las Américas?

Para quienes no conozcan, la Escuela de las Américas es una academia militar del Ejército de los EEUU y fue fundada en 1946 en Panamá. Inicialmente se le conoció como Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los EEUU.

En 1963 fue que adoptó el nombre propiamente tal de Escuela de las Américas (SOA o School of Americas, en inglés) en el gobierno de John Kennedy.

En 1984, por los Tratados Torrijos-Carter, tuvo que abandonar Panamá y se trasladó al Fuerte Benning, en Georgia, EE.UU, donde sigue operando hasta el día de hoy.

Vale recordar que el ex presidente panameño Jorge Illueca describió a la Escuela de las Américas como “la base más grande para la desestabilización en América Latina”.

En 1996 se conocieron públicamente 7 manuales de entrenamiento que eran utilizados en la Escuela de las Américas del Ejército de los EEUU: Manejo de Fuentes; Contrainteligencia; Guerra Revolucionaria e Ideología Comunista; Terrorismo y Guerrilla Urbana; Interrogación; Inteligencia de combate; y Análisis.

El diario The New York Time señaló entonces que “un manual de capacitación publicado por el Pentágono recomendaba técnicas de interrogatorio como la tortura, la ejecución, el chantaje y el arresto de los familiares de los interrogados”.

Muchos de los peores violadores de los derechos humanos de América Latina se han formado en esta academia militar y han seguido practicando y transmitiendo a otras generaciones las lecciones militares aprendidas en los Estados Unidos.

En enero de 2001, por las protestas y la mala reputación de la Escuela de las Américas, esta pasó a llamarse Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en sus siglas inglés).

Ese es su nombre actualmente y siguen dando entrenamiento a tropas de Colombia, de América Latina y el Caribe. Algunos piensan que se cerró pero simplemente fue un cambio de letrero, un cambio de nombre.

En octubre de 2020, SOA Watch en conjunto con FOR Peace Presence y con el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina «Óscar Romero» (SICSAL) presentó ante la Comisión de la Verdad de Colombia, el informe titulado “Desde el Inicio y hasta el Final:

Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano” donde en pocas palabras denunció el papel de EEUU en Colombia. En este informe solicitó a la Comisión pedir “al Estado Colombiano suspender todo el entrenamiento de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y de cualquier otra fuerza de seguridad de Colombia en los Estados Unidos”.

Colombia es, históricamente, el país número uno que hace más envíos de tropas a la Escuela de las Américas, ahora llamada WHINSEC, como también a otros centros de entrenamiento en los Estados Unidos. También, viajan instructores estadounidenses a Colombia como a diversos países del continente para dar entrenamiento militar.

El año 2021 y 2023, se entrenaron otros 697 y 532 militares colombianos, respectivamente, según los últimos registros publicados por la SOA-WHINSEC. Sin embargo, de acuerdo a un informe del Departamento de Estado para los años fiscales 2022 y 2023 el número llegó a un total de 3761 estudiantes colombianos que tomaron cursos de entrenamiento en los diversos centros militares que existen en los EEUU.

Un número importante de generales y militares colombianos involucrados en los casos de “Falsos Positivos”, ejecuciones extrajudiciales, han recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas o WHINSEC.

Los que lideraron el golpe de Estado en Honduras, el 2009, contra el presidente Manuel Zelaya, fueron entrenados en la Escuela de las Américas.

Los militares que participaron en el golpe de Estado, el 2019, contra Evo Morales, en Bolivia, también fueron entrenados por EEUU.

Finalmente, varios de los mercenarios colombianos que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, a la lideresa Berta Cáceres, en Honduras, fueron entrenados en la Escuela de las Américas.

En muchos de nuestros países el papel de las Fuerzas Armadas y la policía sigue siendo represivo y detrás de esto se esconde el negocio de la capacitación y la venta de equipamiento y de armas.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia recomendó, entre otros,:

“Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz, enmarcada en el enfoque de seguridad humana, que se centre en la protección de la vida de las personas y las comunidades sobre la base del respeto del principio de pluralismo democrático y del principio de la dignidad humana”.

“Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, en caso de tratados internacionales, someter los acuerdos de cooperación internacional en materia militar a procedimientos de debate público y transparente en el que participe la ciudadanía y los organismos de control según sus competencias. En particular, se deberán someter a este debate aquellos que brinden inmunidad a agentes extranjeros sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH cometidos en Colombia”.

Estándares y normas

Desde el punto de vista de las obligaciones de nuestros Estados con los Derechos Humanos se debe prohibir el entrenamiento y las relaciones militares con países que no respetan los derechos humanos y en ese sentido Estados Unidos tiene un largo historial de intervenciones militares, patrocinio de golpes de Estado, uso de la tortura, complicidad con regímenes autoritarios y colonialistas, etc. Por lo anterior, se debe prohibir no sólo el entrenamiento sino también los ejercicios militares con los EEUU.

Las Fuerzas Armadas latinoamericanas y del mundo deben ser educadas bajo los pilares de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (las leyes de la guerra) las que establecen límites y obligaciones para las fuerzas armadas en relación con el uso de la fuerza, la protección de civiles, y la responsabilidad que tienen en cada caso.

Las Fuerzas Armadas latinoamericanas y del mundo no deben ser usadas para reprimir las protestas sociales, ni en tareas de seguridad interna ya

que, por su formación, están preparadas para la guerra y su único deber es cuidar la soberanía territorial de sus países.

Los Estados de nuestros países y del mundo deben perseguir judicialmente a todos los miembros de las Fuerzas Armadas o policiales que cometen violaciones a la Ley y a los derechos humanos y evitar seguir amparando y dando impunidad a las Fuerzas de Seguridad que cometen tales actos. En ese sentido, la Justicia Militar no debe investigar estos casos, por la falta de imparcialidad. Debe ser la justicia civil la que investigue y condene a los responsables.

Se deben crear y fortalecer mecanismos de control y de supervisión democrática de las Fuerzas Militares, de la Policía y los organismos de inteligencia para mitigar factores de riesgo y hacer frente a la impunidad

Nuestros Estados deben generar las condiciones económicas, sociales, y políticas para el disfrute de la población de todos y cada uno de los derechos humanos. La seguridad humana debe estar por encima de la seguridad policial.

Nuestros Estados deben poner fin al uso de la violencia y de la fuerza contra la población en caso de protestas sociales y buscar formas no violentas para conseguir superar los conflictos. Es necesario realizar reformas en las Fuerzas Armadas y Policiales y realizar una depuración de elementos que tengan en sus antecedentes violaciones a los derechos humanos.

* Pablo Ruiz Espinoza es egresado de Periodismo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador en Chile del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, organización que trabaja en alianza con SOA Watch, International Peace Bureau (IPB) y con World BEYOND War. Es editor del sitio www.derechoalapaz.org. Este artículo fue presentado el 30 de julio de 2025 en la conferencia “Ingeniería de la Destrucción: Militarización Economía de la Guerra”, organizada por el Instituto de Estudios Internacionales Ibrahim Abu-Lughod de la Universidad de Birzeit, de Palestina, en colaboración con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales, y la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Bases militares de Estados Unidos: neocolonialismo e impunidad

*Por Renán Vega Cantor**

Algunos autores dicen que las bases militares sustituyen el clásico o el viejo poder colonial, los viejos territorios coloniales. Porque, efectivamente, EEUU está desperdigado por todo el mundo, en las bases, hasta el punto que ni los investigadores más exhaustivos saben, en rigor, cuántas bases tiene EEUU, porque esto está cubierto por el secretismo. Pero los investigadores, digamos más serios, más sistemáticos, dicen que esas bases pueden llegar a ser 1.250 bases militares.

EEUU reconoce, oficialmente, 700, pero los investigadores dicen que pueden llegar a ser 1.250 bases militares. ¿Por qué ese desfase en casi 500?, por muchas razones. En primer lugar, porque el asunto de las bases también es cambiante.

A veces, nos hemos acostumbrado a pensar que cuando hablamos de las bases de EEUU, estamos hablando de las bases más visibles, más grandes, más permanentes, donde siempre hay personal militar y que lleva, digamos, décadas.

Como las bases en Japón, por ejemplo, Okinawa, en Japón. Las bases de Guam, las bases de Diego García, en el Pacífico, o la base de Guantánamo, que lleva un siglo, más de un siglo: 120 años, ¿sí? Entonces, suponemos que todas las bases son así: no. Las bases militares también son cambiantes. Y son cambiantes en qué medida: en la medida en que el imperialismo también se adapta a las situaciones. Entonces, en los lugares en donde haya menos resistencia, pues están las bases visibles, las bases de siempre.

Pero, en aquéllos lugares en donde haya alguna oposición, resistencia, denuncia, EEUU establece otro tipo de bases, bases digamos bases más circunstanciales. Por ejemplo, en muchos lugares del mundo hay bases de los EEUU que solamente sirven, les sirven a ellos, que es importante, por supuesto, para cargar de combustible los aviones. Digamos, son bases de tránsito, por ejemplo, eso es muy importante: por la autonomía del vuelo de las naves, por el control, por la información, por muchas circunstancias. Hay muchas bases que funcionan así. Hay otras bases que son de instancia media, es decir de duración media; son muy diversas.

Entonces, esas bases están desperdigadas por todo el mundo. Y un lugar privilegiado donde están expandidas esas bases es por el territorio latinoamericano. Justamente estos eran uno de los mapas que yo les quería mostrar, para ver como en América hay bases militares de los EEUU, incluyendo el propio territorio de los EEUU. Es decir, EEUU tiene bases militares en su propio territorio, y esto parece un chiste, ¿no? EEUU tiene lugares que son prácticamente pueblos, hay bases militares de los EEUU, en que tienen 130 mil habitantes, por ejemplo.

Que son pueblos aislados donde no puede ir nadie de los habitantes de los EEUU, ni mucho menos, y allí preparan a su personal, entrenan, utilizan armas, y de ahí para abajo, del Río Bravo para abajo, las bases están desperdigadas en todo el continente y, principalmente, concentradas en América Central y el Caribe; principalmente, están concentradas ahí desde hace mucho tiempo.

Pero eso se ha acentuado, en los últimos 15-20 años, y está relacionado con la emergencia del gobierno bolivariano de Venezuela. Y entonces es bueno ver en estos mapas cómo se fue rodeando a la Venezuela bolivariana.

Es un cerco geo-estratégico del Caribe, de la Amazonía, de la zona andina, todo el territorio venezolano y eso se ha ido reforzando, y ahí hay que decir que Colombia desempeña un papel fundamental; lamentablemente, fundamental, muy importante para los EEUU, porque en Colombia se ha

dispuesto el establecimiento de bases militares formales e informales, reconocidas y no reconocidas, marítimas y terrestres para completar el cerco contra Venezuela.

Y en ese sentido, entonces, yo tengo que decir lo siguiente: siempre se habla de las siete bases militares de EEUU en Colombia. Tengo que decir que esa información es falsa. Es falsa porque no son siete. Son entre 40 y 50 bases militares. Es decir, la información es falsa, por defecto, no por exceso; por defecto.

Entendiendo “bases” de qué manera: algunos autores incluso acá, lo llaman “cuasi bases”, bases y cuasi bases. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que hay un dominio de espectro completo que es militar, que es mediático, que es cultural, que es informativo, que es comunicacional.

Y que es importante hoy, activar, a partir, por ejemplo, del establecimiento de radares, y el territorio colombiano está lleno de radares. Desde el caribe colombiano hasta Leticia, es decir, atraviesan todo el territorio colombiano desde la zona insular del caribe colombiano hasta la selva amazónica de este país hay radares, y hay radares que rodean toda la frontera con Venezuela, la frontera con Ecuador, la frontera con Panamá.

Entonces estamos hablando de localizaciones geo-estratégicas directamente manejadas por personal de los EEUU. Entonces aquí es bueno plantear una cosa: resulta que cuando se hablaba de las famosas siete bases, que llevaron a que se firmara un acuerdo vergonzoso, el 30 de octubre del 2009, entre Colombia y los EEUU. Resulta que eso fue echado para atrás luego, en términos legales por las cortes colombianas y de ahí en adelante, entonces, aquí en Colombia se dice que no hay bases militares de los EEUU.

Ese es un sofisma, porque Colombia es un país cultor de las formas, y de las formas jurídicas. Entonces, se supone que lo que jurídicamente no existe, en realidad no existe.

Acabamos de ver, ayer la fiscalía declaró que Uribe debería ser exonerado de los cargos por este prolongado juicio que ya lleva 10 años. Esas son las formas jurídicas. No quiere decir que el tipo no sea un delincuente. Eso no quiere decir que el tipo no sea un criminal. Pues lo mismo sucede con las bases, con las bases establecidas.

Formalmente, las cortes las echaron para atrás, pero las bases siguieron funcionando, e incluso con pactos secretos en que los mismos EEUU y el gobierno colombiano dice que no hay que establecer convenios formales que pasen por el parlamento ni mucho menos, sino convenios por debajo de cuerda que permitan que los militares de EEUU y sus mercenarios entren a Colombia, como Pedro por su casa, sin pasaporte, sin ningún tipo de exigencia. Y esa es la situación que nos encontramos.

Pero el otro elemento que yo quiero destacar es que también hay una militarización interna de la sociedad colombiana ligada a la militarización externa. Y aquí yo tenía también otros mapas, sobre algo que se llama “los batallones minero – energéticos e infraestructurales” que hay en Colombia. Y resulta que en esos mapas que es lo que nosotros podemos ver.

Ahora, los mapas son hablados, los voy a hacer hablados. En el territorio colombiano, de norte a sur, hay lo que aquí se llaman “batallones minero – energéticos e infraestructurales” que ocupan, y este es un dato del 2015, está desactualizado, porque aquí es difícil conseguir información actualizada por lo que significa.

En el 2015 se ocupaban 82.000 militares. 82.000 militares: un tercio de las Fuerzas Armadas del ejército colombiano se ocupaban en los batallones minero – energéticos de sur a norte.

Y qué hacen esos batallones minero – energéticos: pues están a la entrada de una refinería, a la entrada de una mina de carbón, a la entrada de una explotación de oro, de cobre, en un punto fundamental de infraestructura vial, en un puente, y en gran parte de los lugares que nos está mostrando ahí mi compañera en el mapa.

En gran parte de esos lugares hay presencia directa o indirecta de los EEUU. Porque son asesores, porque son mercenarios. Por ese tipo, digamos, de hechos reales, porque manejan la información. Entonces, aquí pueden ver, precisamente, el mapa de la presencia militar de los EEUU en territorio colombiano. A este mapa hay que superponer, el mapa de los batallones minero – energéticos; y qué nos daría por resultado: que Colombia es uno de los países más militarizados del mundo, más terriblemente militarizados del mundo.

Recordemos que, en los últimos 20 años, el ejército colombiano es uno de los 5 ejércitos que más ha crecido en el mundo. Y ya por el personal que tiene, porque el total de las Fuerzas Armadas, en este país, sumando ejército, marina, aviación, policía, que es una fuerza militar, servicios secretos, y otros: tenemos 500 mil personas. Es decir, es un ejército que tiene un tamaño casi similar al de Brasil, con la diferencia que Brasil tiene 4-5 veces más población que Colombia.

Es una sociedad terriblemente militarizada. Y por eso, no nos extrañe que en este país se haya cometido lo que hoy se llama “el peor genocidio del siglo XX”, que es lo que se llama, eufemísticamente, como los falsos positivos. Ayer, cuando Uribe fue parcialmente exonerado, publicó un Twitter que decía: “gracias a Dios por este paso positivo”. Se debería decir, en realidad, gracias a Dios por este falso positivo, que son por lo menos 10 mil colombianos asesinados por el ejército y los batallones que organizaron el asesinato, fueron preparados en la Escuela de las Américas.

De tal manera, que tenemos cómo se cierra el círculo de la militarización de una sociedad ya no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, porque desde Colombia se preparan las agresiones contra el resto del territorio, y se acaba de cumplir, el 1º de marzo, un aniversario más, funesto, de la masacre de Sucumbios del 1º de marzo del 2008, cuando fueron masacradas 26 personas por un bombardero manejado por pilotos de los EEUU: que salió desde una base militar, con asesoramiento israelí – estadounidense, en territorio colombiano, cuando fueron masacrados, entre ellos, Raúl Reyes, y 4 estudiantes mexicanos que nunca habían entrado a territorio colombiano.

Entonces, más o menos, esto era lo que yo les quería plantear. No abuso más de ustedes por cuestión de tiempo y agradezco pues, la invitación de Chema y lástima no haber podido presentar todos los mapas.

* Renán Vega Cantor es investigador independiente, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Este es un extracto de su ponencia la que fue presentada el 7 de marzo de 2021 en el Canal de Youtube “TeCs Tertulias en Cuarentena” que conduce Txema Sánchez en el contexto de la Jornada de Conversaciones sobre la OTAN.

Argentina envía nuevamente tropas a entrenamiento a los Estados Unidos

*Por Paola Gallo y Pablo Ruiz**

A lo que ya se conoce sobre la estrecha relación que quiere tener el gobierno del presidente Javier Milei con el gobierno de los Estados Unidos – que se materializa en términos militares en varios sentidos: El pedido de ascenso de categoría en la vinculación con la OTAN, y así pasar de ser aliado extra OTAN a Socio global de la OTAN; el anuncio de la construcción de una “base naval conjunta” con el Comando Sur de los EEUU en la ciudad de Ushuaia; la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU), el 7 de marzo de 2024, entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU y la Inspección General de Puertos S.E de Argentina, que habilita la construcción de una base militar a la vera del río Paraná; el préstamo de 40 millones de dólares otorgado a Argentina por EEUU para gasto militar en abril de 2024 – ahora se suma el retorno de soldados argentinos al entrenamiento militar en Estados Unidos. Es muy probable que bajo el gobierno de Donald Trump la relación militar sea todavía mayor con Argentina.

El 8 de septiembre de 2024, en el Canal de Youtube de la continuadora de la Escuela de las Américas que desde el 2001 fue rebautizada como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), se informó que “este año, el curso celebra el regreso de Argentina con la participación de seis cadetes después de una ausencia de seis años, lo que marca un nuevo capítulo en la sólida asociación entre WHINSEC y Argentina”.

En la descripción del video se agrega que “cadetes, junto con sus compañeros de Ecuador, El Salvador y Honduras, participarán en cuatro semanas de riguroso entrenamiento de liderazgo táctico, mejorando su trabajo en equipo y sus habilidades de comunicación intercultural”.

Recordemos que Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, junto a una delegación del School of the Americas Watch, sostuvo una reunión, el 27 de marzo de 2006, con la ex Ministra de Defensa, Nilda Garré, y le solicitó retirar las tropas argentinas del entrenamiento de la nueva Escuela de las Américas ahora llamada WHINSEC. En esos mismos años, varios países como Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua dejaron de enviar tropas militares a entrenamiento a los Estados Unidos.

La Ministra Garré, entonces, se comprometió a “no mandar gente a la Escuela porque lo que se enseña ahí es absolutamente contrario a la legislación argentina”.

“La Escuela de las Américas ha hecho mucho mal y aún sigue intentando impulsar dentro de las Fuerzas Armadas las hipótesis de la ‘lucha contra el narcotráfico, y lucha contra el terrorismo’. Nosotros, por nuestra legislación interna, decimos que narcotráfico y terrorismo son hipótesis que deben ser combatidas desde las fuerzas de seguridad y no desde las Fuerzas Armadas, para no volver al tema de que las FFAA se involucren en temas de política interior y empiecen a perseguir, entre comillas, a ‘terroristas y narcotraficantes’, desplegados en el territorio y metiéndose con la población civil”, señaló la ex ministra.

Por lo mismo, durante muchos años, Argentina no mandó tropas a entrenamiento a WHINSEC. Sin embargo, estos envíos se retomaron bajo el gobierno de Mauricio Macri y ahora con Javier Milei.

Es un dato muy importante a resaltar: los dictadores argentinos Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Roberto Viola tomaron cursos en la Escuela de las Américas.

No deberíamos olvidar también que en el Informe Sabato, o Nunca Más, de CONADEP, de 1984, en el capítulo 5, “El respaldo doctrinario de la

represión”, se reconoce que un factor importante para la represión fue la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional. El informe cita un artículo publicado en el diario “La Razón”, en 1981, del ex General Camps donde este señala que “en Argentina recibimos primero la influencia francesa y luego la norteamericana, aplicando cada una por separado y luego juntas, tomando conceptos de ambas hasta que llegó un momento en que predominó la norteamericana”.

Así mismo, el capítulo del Informe Sábado, reproduce parte del discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, en 1963, del entonces Secretario de Defensa del Presidente Kennedy, Robert Mac Namara, donde éste afirmó que “probablemente el mayor rendimiento de nuestras inversiones de ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales en nuestras escuelas militares y sus centros de adiestramiento en Estados Unidos y ultramar. Estos estudiantes son seleccionados cuidadosamente por sus países para convertirse en instructores cuando regresen a ellos. Son los líderes del futuro, los hombres que dispondrán de la pericia y la impartirán a sus fuerzas armadas. No es necesario que me detenga a explicar el valor que tiene el disponer en cargos de dirección de hombres con un conocimiento de primera mano de cómo los norteamericanos actúan y piensan. Para nosotros no tiene precio hacernos amigos de estos hombres”.

Sin duda, el entrenamiento militar de tropas latinoamericanas tiene un alto “valor” para los Estados Unidos ya que por esta vía se construyen relaciones de amistad y lealtad con Washington y sus intereses. En las últimas décadas, graduados de la Escuela de las Américas o WHINSEC lideraron intentos o golpes de Estados en Venezuela (2002), Honduras (2009), y Bolivia (2019); o se encuentran implicados en asesinatos como el del presidente de Haití, Jovenel Moïse (2021); el de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras (2016); como en operaciones militares y asesinatos en Colombia.

La Comisión de la Verdad en Colombia, respecto a la ayuda y entrenamiento militar de EEUU y su impacto en el conflicto colombiano señaló textualmente: “Colombia pasó de ocupar en 1960 el puesto 51 en la recepción de ayuda militar por parte de Estados Unidos, al noveno en el mundo

y el tercero en América Latina. Los pilares de este apoyo fueron, primero, la doctrina, cuyo eje era la defensa nacional a partir de combatir al enemigo interno; segundo, el entrenamiento militar tanto en la Escuela de las Américas como en las bases de Estados Unidos; tercero, el ajuste de

manuales y reglamentos; y cuarto, el desarrollo de la inteligencia contra-insurgente...”.

¿A qué dio lugar esa doctrina y entrenamiento militar en la Escuela de las Américas en Colombia? Solo por mencionar un ejemplo, recordamos uno de los casos de genocidio del siglo XXI más atroces, conocido como las ejecuciones extrajudiciales, los Falsos Positivos, en el que se asesinaron a más de 6400 personas. Fue dirigido durante el último gobierno de Uribe Vélez, por militares formados en la Escuela de las Américas. Casualmente, EEUU le prohibió la entrada por su vínculo con este genocidio al general retirado Montoya Uribe quien fue un ejemplar alumno, desde muy joven, en la Escuela de las Américas.

La influencia ideológica y militar de los Estados Unidos, en la medida que se siga incrementando, podría suponer que en un futuro próximo los militares argentinos vuelvan a participar en acciones represivas contra la población argentina contra aquellos que se encuentren movilizados por reivindicaciones sociales.

Actualmente, en el Congreso Argentino se está tratando el proyecto de Ley para reformar la ley de seguridad interior, con el fin de permitir que las fuerzas armadas intervengan en temas de seguridad interior con la vieja excusa de la lucha contra el terrorismo, que lo único que generó en el mundo fue la guerra infinita contra las naciones dueñas de enormes recursos energéticos. Afganistan, Iraq, Libia y Siria, saben muy bien que la lucha contra el terrorismo de EEUU y sus aliados solo implica muerte, destrucción y saqueo. Es importante señalar que los militares argentinos convocados al Congreso recientemente para dar su opinión sobre la reforma a la ley de seguridad interior, han sido categóricos en señalar su inconveniencia.

A todo lo anterior, por otro lado, en noviembre de 2024 funcionarios argentinos participaron de un curso contra la corrupción realizado por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América (FBI) en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de los EEUU ubicada en El Salvador. En ILEA reciben formación policías, fiscales y jueces bajo las enseñanzas e intereses del gobierno estadounidense.

En estos tiempos donde la guerra jurídica conocida como “Lawfare”, que ha implicado la persecución, privaciones de libertad y muerte política de dirigentes, líderes y lideresas sociales, que fueron hacedores de la unidad de la región para una paz revolucionaria, con derecho a tener derechos para nuestros pueblos, ILEA debe estar en la mira. No es casual que los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil; Rafael Correa, Ecuador; o la misma ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner hayan o enfrenten procesos judiciales como forma de persecución y eliminación política.

* Paola Gallo es Co Presidenta del Mopassol (Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos de Argentina) miembro de FADA (Frente Antifascista de Argentina). Pablo Ruiz Espinoza es egresado de Periodismo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador en Chile del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, organización que trabaja en alianza con SOA Watch, International Peace Bureau (IPB) y con World BEYOND War. Es editor del sitio www.derechoalapaz.org

Las referencias de este artículo están disponibles en:
www.derechoalapaz.org

La Guerra Biológica

*Por Pablo Ruiz Espinoza**

En la presentación del año 2010 “Militarización imperialista: máscaras nuevas para proyectos viejos” de la recordada Rina Bertaccini, quien fuera presidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos de Argentina y vicepresidenta del Consejo Mundial por la Paz, daba cuenta y analizaba el documento estratégico de los Estados Unidos “Joint Visión 2020” donde aparece el concepto de “espectro completo”.

El documento indica que el “espectro completo” “es la capacidad de las fuerzas de los EEUU, operando unilateralmente o en combinación con aliados multinacionales o fuerzas inter-agencias, de derrotar a cualquier adversario y controlar cualquier situación a lo largo de todo el espectro de operaciones militares”.

De acuerdo a “Joint Visión 2020” sus operaciones “incluyen el mantenimiento de una postura de disuasión estratégica y acciones en el teatro de operaciones y actividades de presencia. Incluyen el conflicto con empleo de fuerzas estratégicas y armas de destrucción masiva, guerras de teatro principal, conflictos regionales y contingencias de menor escala. También incluyen aquellas situaciones ambiguas que se ubican entre la paz y la guerra, tales como las operaciones para mantener y hacer cumplir la paz, así como operaciones no-combativas de ayuda humanitaria y el apoyo a las autoridades locales”.

Rina Bertaccini escribe que “con toda crudeza nos están advirtiendo qué podemos esperar de las guerras imperialistas del siglo XXI: una acción global desplegada en todos los dominios: el específicamente militar con su

poder letal, pero también en el plano político, económico, ideológico y cultural, sin limitación o condicionamiento jurídico o moral de ninguna clase. No es una simple amenaza, es lo que están haciendo en Libia; es la forma en que ejecutaron a Bin Laden, en Pakistán, violando todas las normas de convivencia internacional. Es lo que denuncia el investigador canadiense Rick Rozoff en relación al uso de aviones sin piloto en ataques bélicos: “libre de riesgo y por encima de la ley; EEUU globalizó la guerra de drones”; lo hace ahora en Somalia y lo había hecho ya en Afganistán, Irak, Pakistán, Yemen y más recientemente en Libia (Rozoff, 2011)”.

Como hemos leído en “Joint Visión 2020” dice textualmente que se prevé, inclusive, el uso en un “conflicto” del “empleo de fuerzas estratégicas y armas de destrucción masiva”.

¿Qué son las Armas de Destrucción Masiva? “Son instrumentos diseñados para matar a un gran cantidad de personas, dirigidas tanto a civiles como a militares. Estas armas no se utilizan generalmente en un objetivo muy específico, sino más bien sobre un área extendida más allá del radio de una milla, con efectos devastadores en las personas, infraestructura y medio ambiente”, señala UNODA (Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme).

Las Armas de Destrucción Masiva se dividen en: Armas nucleares, Químicas, Biológicas, y Radiológicas.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS):

“Las armas biológicas y tóxicas son microorganismos como virus, bacterias u hongos, o sustancias tóxicas producidas por organismos vivos que se producen y liberan deliberadamente para causar enfermedades y muerte en seres humanos, animales o plantas”.

“Agentes biológicos como el ántrax, la toxina botulínica y la peste pueden representar un grave problema de salud pública, causando un gran número de muertes en poco tiempo. Los agentes biológicos capaces de transmisión secundaria pueden provocar epidemias. Un ataque con un agente biológico puede simular un evento natural, lo que puede complicar la evaluación y la

respuesta de salud pública. En caso de guerra y conflicto, los laboratorios de patógenos de alta amenaza pueden ser atacados, lo que podría tener graves consecuencias para la salud pública”.

“Las armas biológicas forman un subconjunto de una clase más amplia de armas, a veces denominadas armas no convencionales o armas de destrucción masiva, que también incluye las armas químicas, nucleares y radiológicas. El uso de agentes biológicos es una grave preocupación, y se cree que el riesgo de emplearlos en un ataque terrorista está aumentando”.

Laboratorios Biológicos en América Latina

En América Latina existe en Perú la base “US Naval Medical Research Unit”, o la Unidad de Investigación Médica Naval de Estados Unidos, también conocida como NAMRU-6, la que cuenta con tres instalaciones, en Lima, Iquitos y Puerto Mandonado.

Su principal sede se encuentra ubicada en EEUU pero también tienen laboratorios en Singapur (Desde 1945), Egipto (1946), Kenia (1969), Tailandia (1958) y Perú (1983). Todos estos laboratorios están subordinados al Centro de Investigación Médica Naval (NMRC) en Silver Spring, Maryland.

El objetivo de esta “Unidad” es teóricamente realizar vigilancia de “una amplia gama de enfermedades infecciosas de importancia para la salud pública o militar, incluido el dengue, la malaria, enfermedades diarreicas e infecciones de transmisión sexual”, pero existe la sospecha también que en sus instalaciones se pudieran producir armas biológicas.

Inaugurada en enero de 1983 en Perú, NAMRU-6 celebró sus 40 años, el 19 de enero de 2023 en el campus de la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Lima, Perú.

En la celebración de los 40 años participaron, entre otros, la Embajadora de EEUU en Perú, Lisa Kenna; el Contralmirante Guido F. Valdés, comandante de las Fuerzas Médicas Navales del Pacífico; el Capitán William

Denniston, comandante del Centro de Investigación Médica Naval; y James Aiken, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EEUU (la 4ta Flota).

De acuerdo a una nota de prensa de la Embajada de EEUU en este país “El NAMRU-6 se estableció como un centro de investigación en 1983 a través de un acuerdo entre las Direcciones de Salud de la Marina de los EEUU y de la Marina de Guerra del Perú, con la participación del Departamento de Estado de los EEUU y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú”.

“El acuerdo estableció un programa de cooperación en investigación médica en el Perú para estudiar enfermedades infecciosas de interés mutuo”. Para Christian Baldeviano, la misión de NAMRU-6 es “desarrollar estrategias protectoras contra las enfermedades infecciosas que afectan a la población militar y a la población general en el Perú y Latino América”.

Las investigaciones de las enfermedades infecciosas se hacen con seres vivos. Mariana Leguía, Directora de Genómica y Descubrimiento de Patógenos de NAMRU-6, señaló en una entrevista que “nosotros recolectamos muestras de gente que viene de toda Latinoamérica y casi el 60% sale negativo en todas las pruebas”.

En una entrevista, publicada en la Revista El Derecho de Vivir en Paz, el ex Congresista de Perú, Richard Arce, dijo que solicitaron información a las autoridades peruanas sobre NAMRU-6 pero “...la información que nos otorgaron era demasiado genérica y se notaba que había mucho desconocimiento. Segundo, y es grave para nuestra soberanía, ves a una base militar, que bajo el paraguas de la labor científica y de estudio de enfermedades tropicales, se está desarrollando en el país sin la transparencia que corresponde”.

Lo cierto, lo objetivo, es que estos laboratorios tienen una finalidad militar que es determinar qué tipos de enfermedades existen en América Latina y “afectan a la población militar” y a la “población general”. No es casual que estas investigaciones se desarrollen en una unidad militar y no del servicio de salud de EEUU.

Con unos y otros se puede actuar de diferentes maneras. Para los militares se puede prever los remedios adecuados ante una posible invasión a un territorio determinado de América Latina que por ejemplo tenga presente el “dengue”. Para la “población general” las investigaciones pueden degenerar en armas bacteriológicas.

Por esto, el Comité Independencia y Soberanía Para América Latina (CISPAL), en su publicación “América Latina es un laboratorio de EEUU para desarrollar armas bacteriológicas”, a dicho que Washington, con el fin de seguir manteniendo su hegemonía, quiere hacer de nuestro continente un “conejillo de indias”.

Por otro lado, en el artículo “La guerra biológica”, Pedro Etcheverry recuerda que en 1981 se declaró en Cuba el Dengue Hemorrágico. El Ministerio de Salud Pública cubano determinó entonces que era una epidemia de dengue del serotipo 02.

En total, murieron 158 pacientes, la mayoría niños. Más de 344 mil personas fueron afectadas por la enfermedad y, de ellas, 24 mil padecieron hemorragias.

El artículo citado indica que: “Especialistas norteamericanos en guerra biológica habían sido los únicos en obtener una variedad de mosquito *Aedes aegypti* sensiblemente asociada a la transmisión del virus 2, según informó el coronel Phillip Russell, en el XIV Congreso Internacional del Océano Pacífico, efectuado en 1979, dos años antes de que se desatara la epidemia en Cuba”.

Etcheverry señala que: “Las investigaciones condujeron a la evidencia de que la epidemia fue introducida deliberadamente en el territorio nacional, por agentes al servicio del Gobierno de Estados Unidos”.

Este es un solo caso, pero hay otros más en la Guerra biológica contra Cuba.

La Irresponsabilidad

A comienzos de junio de 2015, la Agencia EFE, informó que “expertos” del Pentágono “por un error” realizaron el envío de muestras activas de ántrax a 51 laboratorios de 17 Estados en los mismos EEUU, a Australia, Corea del Sur y Canadá, y usando, en algunos casos, el servicio de entrega de FEDEX sin las medidas de precaución adecuadas.

El Subsecretario de Defensa, Box Word, dijo que “por el momento, no se conocen casos de contagio de carbunco entre las personas que pudieron verse expuestas a las muestras”.

Señalamos este caso porque toda la humanidad corre un peligro permanente por las investigaciones científicas que está desarrollando EEUU.

El riesgo principal de las actividades de NAMRU-6, como también de otros laboratorios de EEUU ubicados en el mundo, es que las autoridades locales, la comunidad, no tienen control sobre los estudios “científicos” que se realizan en las unidades militares norteamericanas.

Cada país tiene derecho a su soberanía y a las garantías de la seguridad y la salud de su nación. En definitiva, no podemos permitir que las bases militares y laboratorios de EEUU sigan poniendo en peligro las vidas de los habitantes de América Latina y el Caribe.

Es importante recordar que el 26 de marzo de 1975 entró en vigor la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción. Sin embargo, la misma ONU indica que: “la ausencia de regímenes formales de verificación para controlar su cumplimiento ha limitado su efectividad”.

Honduras: La Base Soto Cano

Se conoce también que NAMRU-6 abrió en el 2018 una sucursal dentro de la Base Aérea Soto Cano, en Honduras, donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) del Ejército de EEUU. Esta es, junto a la base militar de EEUU en Guantánamo, una de las bases militares “clásicas” donde hay tropas estadounidenses, equipamiento, radares, pistas de aterrizaje, y, obviamente, armamento.

“La FTC-Bravo lleva a cabo una variedad de misiones en Centro y Suramérica que van desde apoyar las operaciones del Gobierno de los Estados Unidos para contrarrestar el crimen organizado transnacional, a la asistencia humanitaria, apoyo en desastres naturales y el desarrollo de las capacidades de apoyo”, señala el Comando Sur.

Debemos recordar que por esta base militar y aeropuerto pasó el ex presidente Manuel Zelaya, cuando sufrió un golpe de Estado el 2009, para ser expulsado a Costa Rica. Las tropas de EEUU no hicieron nada entonces para detener este golpe. Ni hacen nada hoy donde – no sólo se acusa al gobierno de estar involucrado en graves violaciones a los derechos humanos– se indica al gobierno de Juan Orlando Hernández de estar involucrado con grupos de narcotraficantes.

Agregar, que se supo, años después, el 2016, que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton dio su apoyo al golpe de Estado en Honduras que derrocó a Manuel Zelaya, presidente elegido democráticamente.

* Pablo Ruiz Espinoza es egresado de Periodismo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador en Chile del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, organización que trabaja en alianza con SOA Watch, International Peace Bureau (IPB) y con World Beyond War. Es editor del sitio www.derechoalapaz.org.

Guerra Biológica:

Base Militar de EEUU en Perú es un peligro

*Por Olga Pinheiro**

La Guerra Biológica es el uso de «organismos vivos» o patógenos (bacteria, virus u otro organismo) adaptados militarmente para causar enfermedades en humanos, animales o plantas con el fin de aniquilar o causar el mayor daño en el enemigo.

Antes del siglo XX, el uso de agentes biológicos tomó tres formas principales: envenenamiento deliberado de comida y agua con material infeccioso y el uso de animales, vivos o muertos, en sistemas de armas.

Ya en el período, durante y después la segunda guerra mundial, las armas biológicas fueron sofisticadas en programas estatales, de grandes potencias, con el respaldo de científicos y laboratorios de poderosas corporaciones.

Innumerables experimentaciones fueron llevadas a cabo con seres humanos. Las más conocidas fueron realizadas en los campos de concentración nazi. Sin embargo, Gran Bretaña y EEUU tienen un largo historial en hacer experimentos químicos y bacteriológicos con personas sin que ellas supieran o dieran su consentimiento para tales pruebas.

Con el fin de la Segunda Guerra, Estados Unidos, incluso, reclutó a científicos nazis, en la Operación denominada Paperclip, también conocida por Overcast, que eran especialistas en las llamadas “armas maravillosas” del Tercer Reich.

Uno de los más destacados era Eric Traub responsable de la sección de armamento biológico de Hitler. Este experto en patógenos virales, desde que llegó a EEUU trabajó para la Marina de este país (Naval Medical Research Institute, en Bethesda) y quedó en sus manos la investigación de las 40 cepas más virulentas del mundo.

Eric Traub también prestó asesoría en Fort Detrick que está ubicado en la ciudad de Frederick, en el estado de Maryland. Hasta 1969 fue el centro del programa de armas biológicas de EEUU, y hasta hoy es el blanco de distintas investigaciones y denuncias de manipulación de agentes infecciosos para fines bélicos.

Fort Detrick ha sido acusado formalmente de la propagación del dengue, en Nicaragua, en el año de 1985, por medio del esparcimiento del mosquito *Aedes Aegypti* (que además de dengue, es el transmisor de la chikungunya, zica y fiebre amarilla).

Años antes, el mismo mosquito *Aedes Aegypti* y otros vectores biológicos fueron utilizados contra Cuba.

En 1975, entró en vigor la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

Aun así, pocos años después, el régimen del apartheid en Sudáfrica lanzó un programa secreto, llamado “Project Coast” que fue dirigido por el Dr. Wouter Basson (o Dr. Muerte), cuyo objetivo era desarrollar agentes biológicos y químicos que matarían o esterilizarían a la población negra y asesinarían enemigos políticos.

Entre los agentes desarrollados estaban los virus Marburg, Ántrax y el Ébola. Se afirma que miles de personas murieron en esos experimentos.

El ex presidente Mandela fue uno de los intentos de asesinato del doctor Wouter Basson, que en 2002, tras una fianza simbólica, fue liberado de cualquier condena y, actualmente, trabaja de cardiólogo en Sudáfrica.

Basson afirma haber tenido contacto con agencias occidentales que proporcionaron “asistencia ideológica” al “Project Coast”, pese la expresión de preocupación de Washington de que el “Doctor Muerte” revelara las conexiones del “Project Coast” y el Pentágono.

Alerta en América Latina

En esta misma década, en que hubo secretas cooperaciones de agencias estadounidenses con el régimen del apartheid, fue instalado un laboratorio de investigación biomédica de la Marina de los EEUU en Perú. Actualmente, conocida como NAMRU-6 (Unidad de Investigación Médica Naval Seis).

Una de sus instalaciones está ubicada, nada menos que en la Amazonía Peruana, en las cercanías del Río Amazonas, en la ciudad de Iquitos, lo que debiera ponernos en alerta delante del grave riesgo de contaminación, difusión y proliferación de agentes infecciosos, aunque formalmente digan que están para identificar e intervenir contra enfermedades tropicales infecciosas.

Tras el largo historial, donde se contrastan discurso y práctica del gobierno estadounidense, queda la preocupación ante la manipulación de patógenos por instituciones militares foráneas y que estuvieron involucradas directamente en la elaboración de armas biológicas en diferentes períodos de la historia.

Todas las bases militares de EEUU, en Latinoamérica, hacen parte de una política de injerencia externa, y NAMRU-6 además de su carácter militar, desarrolla investigaciones bacteriológicas al servicio de un país que desde el principio demostró resistencia en aceptar la convención de la ONU que prohíbe las armas biológicas y que desde muchas décadas interviene con apoyo directo o logístico en la desestabilización de gobiernos democráticos en nuestro continente.

En Indonesia, también había sido instalada una NAMRU-2, pero este laboratorio militar fue cerrado, posteriormente, cuando el gobierno indonesio se dio cuenta de sus controversiales actuaciones. Además de las denuncias de que el conocimiento de las medicinas elaboradas eran destinados a beneficio de transnacionales farmacéuticas que con esas enfermedades infecciosas adquirirían voluptuosas ganancias, como fue con el laboratorio Gilead Science, del entonces Donald Rumsfeld, ex secretario de defensa de Bush, que patentó el fármaco Tamiflu, único utilizado para tratar el virus de la gripe, H1N1.

* Olga Benario de Sousa Pinheiro, es investigadora titulada en licenciatura en ciencias sociales y enfermería en Fortaleza, Brasil. Puede ver en youtube “ABC de la Geopolítica: La Guerra Biológica” en <https://www.youtube.com/@observatoriochile>

Las estaciones de investigación estadounidenses en Perú y otros lugares se preparan para la guerra biológica

Por W.T. Whitney

El gobierno estadounidense comenzó a prepararse para la guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial. Se emplearon armas biológicas durante la Guerra de Corea contra Corea del Norte y China. En 1969, el presidente Nixon puso fin al uso de armas biológicas con fines ofensivos por parte de Estados Unidos. Estados Unidos se unió a otras naciones para aprobar la Convención sobre Armas Biológicas (CAB), que entró en vigor en 1975.

Aun así, agentes estadounidenses introdujeron microorganismos que devastaron la agricultura cubana de forma intermitente entre las décadas de 1970 y 1980. Introdujeron el virus del dengue en 1981, provocando así una epidemia que cobró la vida de 169 cubanos. En 2001, la administración de George W. Bush desautorizó el Protocolo, esencial para fortalecer la Convención sobre Armas Biológicas.

Un informe de 2017 del centro de estudios latinoamericano CEPRIID habla de centros estadounidenses de investigación virológica sospechosos en Ecuador, de soldados brasileños que fallecen a causa de una enfermedad infecciosa desconocida y de “centros de investigación ubicados en países como Brasil, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Haití y Guyana”. El informe señala la existencia en Perú de laboratorios estadounidenses de investigación biológica que operan bajo la fachada del patrocinio de universidades locales.

“Lo que es seguro”, dice el informe, “es que la investigación continúa y se están creando nuevos virus o se están volviendo resistentes a todas las vacunas conocidas”.

En 2015 se mencionó un “laboratorio [en Perú] para el desarrollo de guerra bacteriológica”. Se refería a uno operado por una “Unidad de Investigación Médica Naval” (NAMRU-6). Desde la Segunda Guerra Mundial o poco después, Estados Unidos ha operado NAMRU, del número uno al seis, en Estados Unidos y en Etiopía, Italia, el Sudeste Asiático y Perú. Sus propósitos varían según la ubicación. Tres de ellas han sido descontinuadas.

Oficialmente , NAMRU-6, también conocido como NAMRU Sur, investiga y monitorea diversas enfermedades infecciosas con implicaciones militares y de salud pública en América Central y del Sur. Con presencia en Perú desde 1983, NAMRU-6 ocupa un gran edificio de oficinas y un laboratorio en Lima y un laboratorio más pequeño en Iquitos, a orillas del río Amazonas.

NAMRU-6 es noticia. En un artículo publicado el 13 de junio, la periodista brasileña Tereza Cruvinel señala un gran aumento de casos de dengue en Perú, Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. Cita a “un entomólogo de un país vecino” que describe la inesperada resistencia del mosquito *Aedes aegypti*, vector del virus del dengue, a insecticidas habitualmente eficaces.

Señala la referencia del entomólogo a “un colega investigador” que abandonó el laboratorio estadounidense NAMRU-Sur en Perú debido a “experimentos que se estaban realizando allí con la participación del Pentágono y el ejército peruano”.

Señala que los investigadores están creando nuevas cepas del virus del dengue, «que se propagan más rápidamente entre los mosquitos, con una carga viral muy alta». Cruvinel informa que «médicos y científicos latinoamericanos sospechan que existe manipulación científica del mosquito por parte de fuerzas poderosas que involucran a Estados Unidos y la industria farmacéutica».

En su artículo “ Armas biológicas estadounidenses ”, escrito en respuesta a Cruvinel, el periodista costarricense José Amesty afirma que “el brote [actual] de dengue, que marca un récord de enfermedad y muerte en Nicaragua, Honduras y Perú, está relacionado con experimentos del Pentágono en 2023 destinados a crear una cepa modificada del patógeno mencionado”. Cita como fuente a un “científico de Namru-Sur, Perú, quien, involucrado en experimentos con cepas de dengue, está desilusionado por las implicaciones para la salud de millones de personas”.

Amesty señala que el personal que trabaja en NAMRU-6 en Perú, en su mayoría peruanos, ha tenido que adoptar la nacionalidad estadounidense para poder ser procesados, de ser necesario, bajo la jurisdicción estadounidense y “no ser responsables ante la justicia peruana”.

Amesty supo por Gabriela Paz-Bailey, especialista en dengue de la sucursal puertorriqueña de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, que una nueva cepa del virus del dengue apareció en Perú en 2023. Esta cepa se propaga con mayor rapidez entre los mosquitos, dejándolos con una carga viral elevada. Además, la dosis viral suficiente para causar la infección se ha reducido diez veces.

Presumiblemente, es el propio Amesty quien señala que «un desarrollo similar de un virus en un período tan breve sería imposible sin la intervención humana». Añade que «los norteamericanos lograron un alto grado de resistencia a los insecticidas por parte de los mosquitos, lo que redujo la eficacia de las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales para erradicar los insectos mediante fumigación».

En su artículo, Amesty señala que el laboratorio NAMRU-6 ha dependido durante mucho tiempo de la “ayuda de los insectos” para idear “mecanismos de proliferación del virus” tanto en Perú como en otras partes de la región.

En 2016, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) del Pentágono presentó su plan para movilizar a los “Insectos

Aliados” para proteger los cultivos agrícolas de los desastres. Según se describe, el programa “está preparado para utilizar terapia génica dirigida para proteger las plantas maduras en una sola temporada de crecimiento”.

Los insectos transferirían virus modificados genéticamente a las plantas, donde afectarían el comportamiento de sus genes en crecimiento, por ejemplo, aumentando su tasa de crecimiento en condiciones de sequía, enfermedades o uso de pesticidas.

La llegada del sistema CRISPR en 2012 permitió el desarrollo de este programa con insectos. CRISPR, una herramienta relativamente sencilla y de fácil acceso, permite la modificación selectiva del ADN de organismos vivos.

El proyecto de DARPA generó críticas, comenzando con un informe publicado en la revista Science el 5 de octubre de 2018. El título era “¿Investigación agrícola o un nuevo sistema de armas biológicas?”.

Los autores hicieron referencia a la Convención sobre Armas Biológicas. Colaboraban con el Instituto Max Planck y el Instituto de Derecho Internacional, ambos en Alemania, y con la Universidad de Montpellier en Francia.

Una declaración simultánea del Instituto Max Planck sobre este informe se centró en las posibilidades de doble uso: «Los hallazgos del Programa Insectos Aliados podrían utilizarse con mayor facilidad para la guerra biológica que para el uso agrícola rutinario». La declaración sugería que «DARPA no ha presentado razones convincentes para el uso de insectos como medio incontrolado de dispersión de virus sintéticos en el medio ambiente».

El periodista y activista por la paz Bharat Dogra sostiene que “el programa DARPA corre el riesgo de ser percibido como un programa de investigación de guerra biológica justificado con fines pacíficos declarados... [Esa percepción errónea] puede iniciar una tendencia de investigaciones similares con implicaciones de guerra biológica también en otros países”.

Dogra también observa que los propios mosquitos, los insectos vectores, están siendo modificados genéticamente junto con los virus que transmiten. Escribe: «Según una revisión de 2022 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, desde 2019 se han liberado más de mil millones de mosquitos modificados a nivel mundial, en varios países».

El gobierno estadounidense mantiene instalaciones en todo el mundo relacionadas con la guerra biológica. Fort Detrick, en Maryland, el histórico centro de armas biológicas de Estados Unidos, se extiende a lo largo de cientos de acres y alberga a casi 8000 empleados militares y civiles.

Existe una red de instalaciones similares, operadas por Estados Unidos, en países limítrofes con Rusia Occidental. Su papel en la vigilancia y facilitación de la transmisión de enfermedades infecciosas por insectos ha sido documentado. Existen centros similares en África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.

Sugiero que es muy probable que el gobierno y el ejército de EEUU estén desarrollando capacidades ofensivas para la guerra biológica. La naturaleza del programa DARPA, las actividades de NAMRU-6 en Perú y el historial de Estados Unidos de ignorar la Convención sobre Armas Biológicas en las últimas décadas son consistentes con esta acusación.

También es sugerente la proliferación, dentro y fuera de Estados Unidos, de instalaciones estadounidenses dedicadas al estudio de microorganismos nocivos y nuevas formas de transmisión. Por último, la aparición simultánea de la tecnología CRISPR y la amplia difusión de estas actividades es más que una coincidencia.

* WT Whitney Jr. es un pediatra jubilado y periodista político que vive en Maine, EEUU. Ha sido parte del movimiento estadounidense de la SOAW.

Por el cierre de todas las bases militares extranjeras

*Por Gabriel Aguirre**

En primer lugar quiero comenzar extendiendo unas felicitaciones a los organizadores de este encuentro, y a los colegas conferencistas por permitirnos la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre un tema que cada día que transcurre eleva la preocupación en todos los sectores, movimientos, y fuerzas que siempre hemos defendido las banderas de la Paz.

Nuestro movimiento global Un Mundo más allá de La Guerra, es el resultado del esfuerzo realizado por activistas en todo el mundo, que se han reunido con el objetivo principal de defender el principio de la necesidad de la abolición de la guerra como institución, y no sólo las guerras de hoy en día. Nosotros hemos demostrado la inmoralidad de la guerra, su carácter opresor de las libertades del ser humano, su gran capacidad para derrochar cuantiosos recursos.

Ahora abolir la guerra, significa enfrentar los fenómenos que de ella surgen, y los que le dan significado, por ello nosotros tenemos que hablar aquí del problema de la militarización, no para hacer una semblanza de lo que ella es en sí misma, sino de los peligros a los que nos enfrentamos si no somos capaces de advertir sobre ello y más importante tomar acción.

Las bases militares son las armas del imperialismo, precisamente porque carece de ideas para transformar la realidad, de un mundo cuya etapa y modelo de desarrollo exige de la creación de nuevas herramientas y propuestas para resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad en la actualidad.

Estados Unidos es conocido en el mundo por su historial de guerras, la identificación siempre de un enemigo, y por tanto la necesidad de justificar el fortalecimiento de su infraestructura de guerra, en el que las bases militares tienen un papel fundamental, por esto cualquier esfuerzo de construcción de Paz, debe estar ligado al desmantelamiento y cierre de todas las bases militares extranjeras.

Desde World BEYOND War, hemos realizado durante los últimos años un gran esfuerzo en realizar minuciosas investigaciones sobre la presencia de las bases militares de Estados Unidos en el mundo, algunos datos contenidos en nuestro mapa sobre el militarismo, que observamos con profunda preocupación es que Estados Unidos posee en la actualidad 932 bases al mes de mayo del 2024.

Es importante destacar que este mapa interactivo sobre la presencia de las bases militares estadounidenses en el mundo, ha servido como herramienta muy útil para investigadores, periodistas y activistas, básicamente hablamos de una herramienta on line que permite girar el globo terráqueo, realizar zoom en una base en el lugar del mundo que se encuentre y con ello ver imágenes de la base y la información más relevante sobre la misma.

En la actualización más reciente hemos incorporado nuevas funciones, donde ya no sólo podrás ver el mapa o la lista de las bases militares sino que también puedes tener 4 tipos de vista: Híbrida, sólo el mapa, sólo satelital, o también en una lista sencilla. Pero además es posible ejecutar filtros para buscar por país, por tipo de gobierno: autoritarios, con débiles democracias, colonias de Estados Unidos, colonias inglesas, etc, también es posible identificar la fecha de apertura de la base, el personal (número de tropas que están en esa base), cuánto espacio en acres ocupa de ese territorio, sí es o no una base de la OTAN, que según nuestro mapa en la actualidad existen al menos 56 bases de la OTAN alrededor del mundo.

Por otra parte, esta herramienta permite identificar las bases de aviones no tripulados; de hecho, en los tiempos recientes, hemos visto que gran parte de las operaciones militares ejecutadas en diversos conflictos ha sido

mediante el uso de esta tecnología militar cuyas capacidades destructivas son cada vez más crecientes. A finales del año pasado nuestro movimiento, junto a varias organizaciones, desarrollaron una intensa campaña para impedir la compra de drones armados por parte de Canadá por un monto de 5 mil millones de dólares canadienses.

Hay otras categorías de interés. Por ejemplo, para saber qué componente militar opera en estas bases, si es la armada, fuerzas navales, etc. Un elemento de gran interés para el estudio hoy de las bases militares es precisamente, si las bases son compartidas, si son bases de entrenamiento, o solamente bases con personal de Estados Unidos.

En los últimos años, hemos visto una tendencia orientada a la existencia de bases compartidas, donde las bases militares son reconocidas por el país donde se encuentran, pero pueden realizar operaciones en conjunto con tropas militares extranjeras, estas han servido como fachada, para no tener que realizar consulta a las poblaciones sobre el deseo de tener bases militares extranjeras o no, y en algunos casos hasta de evitar realizar cambios constitucionales que impiden la presencia de tropas militares extranjeras.

Nuestro mapa también nos permite precisar en cuáles bases se tiene conocimiento sobre la existencia de armas nucleares, de acuerdo a la información allí contenida. Actualmente, existen al menos 5 bases militares con armas nucleares: en Italia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Turquía. Es muy probable que existan otras, cuya información no es de dominio público.

Cómo hemos mencionado anteriormente, hay más de 900 bases militares de EEUU en 90 países que por supuesto convierten a esta fuerza imperialista en el principal promotor de guerras en todo el mundo.

La presencia militar de Estados Unidos, crece rápidamente el pasado mes de diciembre se concretó un acuerdo con Suecia que le permite a EEUU hacer uso de 17 de sus bases militares, y seguidamente 15 bases más en Finlandia; por supuesto, esto se traduce en mayores niveles de injerencia en los asuntos internos de ambos países así como en su instrumentalización frente a futuros conflictos militares en el mundo.

Comenzando el año 2024, se ha prorrogado por diez años más la presencia militar de EEUU en la base área de Al Udeid (Qatar), cuya acción continúa abonando un terreno fértil para escalar el conflicto en el medio oriente a niveles inimaginables, a una situación bastante deteriorada como consecuencia de la presencia militar de EEUU en la región, y el auspicio y apoyo a la entidad sionista de Israel, quien hoy es el principal responsable de la muerte de más de 30.000 palestinos en la franja de Gaza, y que desde WBW hemos acompañado la condena mundial, así como el respaldo a la invocación de la convención contra el genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

En lo que va del año 2024, se han abierto 5 nuevas bases en Somalia, cuya situación es enormemente preocupante por lo que esto significa en una región políticamente inestable como es el continente africano, a consecuencia de siglos de dominación colonialista e imperialista. A este plan global de ampliación de nuevas bases militares, debemos sumar el interés de la creación de una base militar de Estados Unidos en tierra del fuego en Argentina, mediante interés expreso del actual gobierno de Argentina, y el Comando Sur de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo que se crean nuevas bases militares, la OTAN amplía su presencia en diversos lugares del mundo, recientemente se han adherido dos nuevos países a esta alianza militar imperialista, Finlandia (2023) y Suecia (2024), el secretario general de la OTAN declaró: “Es un día histórico. Hace apenas unos años habría sido impensable”, lo cual deja ver que nuestro deber es redoblar esfuerzos para evitar que nuevas naciones continúen adhiriéndose a la OTAN.

Este escenario en América Latina, no es muy diferente, desde el año 2017 Colombia es socio global de la OTAN, el año pasado se inauguró un centro de excelencia en el país, que sirve para el entrenamientos de las fuerzas armadas locales, bajo el argumento del combate a los grupos al margen de la ley.

Colombia por su importancia en la región es un país donde Estados Unidos ha concentrado todo su aparato militar, en asistencia técnica, preparación, comercio de armas, entre otras iniciativas. Cada dos años se realiza en Colombia una feria de armas denominada Expodefensa, un espacio en el cuál los principales vendedores de armas en el mundo, vienen a exponer su arsenal militar. Desde el movimiento social y algunas fuerzas populares hemos pedido que sea cancelada la realización de estas ferias.

También no queremos dejar de mencionar el esfuerzo que en esta dimensión han realizado organizaciones en Colombia como la colectiva Olga Castillo, un espacio y un referente organizativo de personas que han decidido levantar la bandera de aquellos que han sido víctimas de las bases militares, cómo fue el caso de la hija de Olga una joven de tan sólo 12 años que fue violada por los militares estadounidenses que hacían presencia en la base militar de Melgar en Tolima, muy cerca de Bogotá.

Por su parte la estrategia de ampliación de la presencia militar de Estados Unidos en el continente, se mantiene en pleno desarrollo, el año pasado fue aprobado por el Congreso del Perú el ingreso de las tropas militares estadounidenses en su territorio, quienes debían permanecer según el acuerdo hasta diciembre del 2023, hecho que como era de esperarse aún se mantienen las tropas en el territorio peruano. Desde WBW junto a otras organizaciones impulsamos una petición para exigir el retiro de las tropas estadounidenses del Perú.

De igual forma en el Ecuador el Estado de Excepción, junto al Acuerdo militar firmado por el expresidente Lazo por 7 años con Estados Unidos y refrendado por Daniel Noboa, ha permitido el ingreso de tropas militares extranjeras al país, junto al FBI, y más recientemente, hace un par de semanas, ha propuesto una reforma constitucional para eliminar los artículos establecidos en la máxima legislación del país que prohíben el establecimiento de bases militares extranjeras, luego de que durante el gobierno de Rafael Correa, en el año 2009 se cerrará la base de Manta. Sin embargo, hoy la isla de Galápagos está siendo utilizada como una base por tropas militares estadounidenses.

Por su parte, la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, de aprobar una nueva intervención militar extranjera en Haití, ha representado la clara intención de mantener el control político, económico y militar sobre esta nación caribeña. Por nuestra parte, hemos también, junto Alianza Negra para la Paz y otras organizaciones en el continente, realizado una petición al congreso de Estados Unidos para que cese su intención de enviar tropas a Haití y apoyar logísticamente a otros países que han pretendido encabezar esta nueva intervención como Kenia. Rechazamos cualquier interés de crear una nueva MINUSTAH o cualquier otra estrategia de militarización del país.

Así mismo hace un mes el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos, anunció su interés de enviar a los refugiados haitianos a Guantánamo, una decisión que demuestra el desprecio por nuestros hermanos haitianos y la burla al pretender utilizar un territorio que ocupan ilegalmente.

En este mismo sentido, debemos mencionar la estrategia de militarización de las fronteras, bajo la excusa del control de las migraciones de manera irregular, se ha estado ampliando el número de efectivos militares en las diferentes fronteras en el continente.

Sin embargo no todo es malo, así como el imperialismo avanza en su estrategia de dominación global a través de sus bases militares, militarismo, la OTAN, las sanciones y los bloqueos, los pueblos también se organizan en distintos lugares del mundo.

Es así como muchos activistas y defensores de la Paz, están poniendo todos sus esfuerzos para evitar la destrucción de sus tierras con la construcción de nuevas bases, esto lo realizan a través de campañas para movilizar y generar conciencia sobre lo que está ocurriendo. No podemos dejar de mencionar la campaña “Salvemos Sinjajevina”, la cuál es una iniciativa de la sociedad civil desde el año 2020, para revocar la decisión del gobierno de Montenegro de establecer un campo de entrenamiento militar, para el uso de la OTAN y las fuerzas militares estadounidenses.

Este año hemos realizado importantes acciones para denunciar la militarización, las bases militares extranjeras y la OTAN, durante los días 6 y 7 de Julio, en Washington organizamos una movilización frente a la Casa Blanca para decir fuera a la OTAN, y el pasado mes de septiembre, realizamos una conferencia sobre las bases militares en lugares del mundo de manera simultánea.

Otros ejemplos exitosos, en tiempos recientes, fue el Campamento de la Dignidad y la Paz, en la Isla de Providencia de Colombia, en el año 2020, durante el gobierno de Duque, donde se impidió la creación de una base militar que sirviera a los intereses de Estados Unidos en esta región. Estos son ejemplos inspiradores de cómo es posible con la organización, el entusiasmo, y la disposición a resistir de manera no violenta para lograr los objetivos propuestos.

No quisiéramos dejar de mencionar otra importante experiencia en América Latina la que ha sido convocada por varias organizaciones, y liderada por la Alianza Negra para la Paz, que es el impulso de la Campaña América Latina Una Zona de Paz, como un referente importante, en el marco de la proclama de la CELAC realizada en La Habana en el año 2014.

Estamos convencidos que este Encuentro de Nuestra América es un paso en la dirección correcta y que va a contribuir de manera decidida para organizar una fuerza global para trabajar por el cierre de todas las bases militares

¡Pongamos fin a todas las guerras!

¡Viva la Paz!

¡Viva la Humanidad!

- * Gabriel Aguirre es Coordinador para América Latina de World BEYOND War. Esta ponencia fue presentada en el Encuentro de Nuestra América: Militarización V/S Paz. Encuentro realizado el 22 y 23 de Octubre del 2024 en la ciudad de Medellín en Colombia.

Imperios militares: una guía visual de bases extranjeras (Explora todas las bases militares extranjeras del mundo)
www.worldbeyondwar.org/military-empires

Militarización global y dominio estratégico en América Latina: una mirada crítica a las nuevas formas del control geopolítico

*Por Alfonso Insuasty Rodríguez y Andrés Escobar Vásquez**

Resumen:

El presente artículo examina el preocupante aumento del gasto militar a escala global y sus repercusiones geoestratégicas, con especial atención al contexto latinoamericano. Se plantea que asistimos a una fase avanzada y multiforme de militarización, caracterizada por la articulación de fuerzas armadas regulares, empresas militares privadas, estrategias de contrainsurgencia y sofisticados mecanismos de control social. Este proceso se desarrolla en un marco de creciente autoritarismo y tendencias de fascistización política, respondiendo a intereses corporativos y a la reconfiguración del poder geopolítico liderado por Estados Unidos en su disputa estratégica con China. En América Latina, esta dinámica se manifiesta como una forma de contención, represión y recolonización territorial, afectando directamente los procesos democráticos, los derechos humanos y las posibilidades de autodeterminación de los pueblos de la región.

Palabras clave: América Latina, Militarización, Despojo, Soberanía, Guerras Híbridas, Control social, Seguridad regional

Auge del gasto militar: un mundo en armas

En 2024 el gasto militar mundial alcanzó los 2718 mil millones de dólares, marcando el mayor aumento interanual desde el fin de la Guerra Fría, con un crecimiento del 9,4 % respecto a 2023. Según el SIPRI, esta cifra representa el décimo año consecutivo de incremento sostenido en los presupuestos militares a nivel global. El 60 % del gasto fue realizado por solo cinco países: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India (SIPRI, 2025). La carga militar global —proporción del PIB destinada al gasto militar— aumentó al 2,5 %, desplazando recursos que antes se dirigían a áreas sociales estratégicas como salud, educación o desarrollo sostenible.

Este proceso se inscribe en un clima de creciente tensión geopolítica, con epicentros en Europa (guerra en Ucrania), Medio Oriente (conflicto entre Israel, Palestina y el Líbano) y Asia-Pacífico (rivalidades entre China, Taiwán, Japón e India), el Genocidio contra el pueblo palestino, conflictos crecientes en África, el giro estratégico hacia la tensión militar en la región de Asia pacífico, entre otros.

La carrera armamentista no es simplemente una respuesta a conflictos localizados, sino un reordenamiento global del poder, donde las potencias tradicionales y emergentes refuerzan sus capacidades ofensivas y defensivas en un escenario en que occidente, con EEUU a la cabeza, buscan detener la emergencia de un nuevo orden multilateral en un contexto de decadencia occidental.

Estados Unidos, con un gasto de 997 mil millones de dólares en 2024 (el 37 % del total mundial), continúa liderando el complejo militar-industrial global. Más allá del fortalecimiento de su arsenal nuclear, ha impulsado una red de alianzas militares (como la OTAN) y bases estratégicas en todo el planeta. La modernización de sus capacidades militares también busca asegurar su posición frente al avance económico-comercial de China, que en 2024 alcanzó los 314 mil millones de dólares de gasto militar, su cifra más alta en tres décadas.

Visual Capitalist (2025) reveló un informe que visibiliza el porcentaje del PIB que algunos países destinan para el rubro de Defensa, ahora bien, a pesar de que algunos países destinan un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en defensa — como Israel (8,8 %), Argelia (8,0 %) o Arabia Saudí (7,3 %) —, estos niveles de inversión no se traducen necesariamente en los mayores montos absolutos. Esto se debe a que el tamaño de sus economías es significativamente menor en comparación con potencias globales. Por ejemplo, Rusia, con un gasto militar del 7,1 % de su PIB, alcanza aproximadamente los 149.000 millones de dólares. En contraste, China, con una inversión proporcionalmente menor (1,7 % del PIB), destina alrededor de 314.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, es Estados Unidos quien lidera ampliamente el gasto militar mundial: con un 3,4 % de su PIB, se estima que su presupuesto en defensa supera los 997.000 millones de dólares. Esta asimetría evidencia no solo la concentración de poder militar global, sino también la capacidad de ciertos Estados para incidir política, económica y estratégicamente en los conflictos internacionales desde una lógica de acumulación armamentista que profundiza la militarización del orden mundial (Alcolea, 2025).

Otro insumo relevante para comprender la dinámica global de la militarización lo constituye el informe Mapping Militarism 2025, elaborado por la organización World BEYOND War, el cual ofrece una radiografía interactiva de las guerras, el comercio de armas y la expansión de bases militares en el mundo. Este informe revela que en 2024 se desarrollaron al menos 16 guerras activas, con seis de ellas causando más de 10.000 muertes anuales, involucrando a 45 países, en conflictos como los de Myanmar, Ucrania, Sudán, Palestina y Siria. Un dato particularmente alarmante es que, mientras la mayoría de las guerras tienen lugar en el Sur Global, la producción y exportación de armas se concentra en el Norte Global, siendo Estados Unidos responsable de casi la mitad de todas las exportaciones militares del planeta, seguido por países de Europa occidental.

Asimismo, la presencia de cientos de bases militares estadounidenses en territorios extranjeros —incluyendo América Latina— evidencia una estrategia sostenida de proyección hegemónica, donde el gasto militar anual de EE. UU. supera el billón de dólares.

Un tema relevante que no resuena, pero es central es el desarrollo en este contexto de militarización global, es la incorporación de armas autónomas letales —conocidas comúnmente como “robots asesinos”— los drones, por ejemplo (Stauffer, 2025).

Estos sistemas, que operan sin intervención humana directa gracias a tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA), plantean serios dilemas éticos, jurídicos y de derechos humanos. Uno de los aspectos más críticos es la reproducción y ampliación de los sesgos algorítmicos ya identificados en aplicaciones como el reconocimiento facial, que afectan de manera desproporcionada a personas afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad. (Bode, 2024)

En contextos de guerra o represión, especialmente en países del Sur Global, el despliegue de estas tecnologías podría profundizar las desigualdades estructurales, perpetuar el racismo algorítmico y consolidar nuevas formas de colonialismo militar- tecnológico.

Por ello, la urgencia de una regulación internacional preventiva que prohíba el desarrollo y uso de estas armas, así como la necesidad de que los Estados comprometan esfuerzos multilaterales concretos para evitar su implementación en sus propios territorios. Esta problemática también requiere abrir líneas de investigación crítica desde las universidades y fortalecer la vigilancia ciudadana y social sobre el uso de tecnologías de guerra.

Estos elementos someramente descritos, suman al contundente retroceso de compromisos internacionales como la Convención sobre Municiones en Racimo y al uso instrumental de la “ayuda militar” como forma de injerencia, revelan un escenario global profundamente militarizado, con impactos directos sobre las soberanías nacionales, los derechos humanos y los procesos de paz. (Swanson, 2025)

A ello se suma la violación sistemática de los principios del derecho internacional y de los derechos humanos frente al genocidio en curso contra el pueblo palestino, que, pese a su gravedad y visibilidad, no encuentra aún una respuesta efectiva de la comunidad internacional ni una vía real hacia una solución justa y duradera dejando en evidencia la inoperatividad de los Estados, la llamada comunidad internacional en garantizar derechos y menos de los mecanismos internacionales de protección (González, 2024). El panorama es complejo y por ende, retador.

América Latina bajo presión: militarización, mercenarismo y control territorial

En América Latina, el avance de la militarización adopta formas más sutiles, complejas y peligrosas. No se trata de un simple aumento del gasto, como en el caso de México (39 % en 2024), sino de la consolidación de un modelo de gestión del territorio basado en la lógica de guerra permanente. Este modelo combina varias dimensiones:

Militarización formal del aparato estatal, con ejércitos nacionales cada vez más involucrados en tareas de seguridad interior, control migratorio, y represión social;

Proliferación de contratistas privados o “mercenarios”, que actúan bajo figuras legales ambiguas, pero que en realidad representan una re-ingeniería internacional del paramilitarismo, útil para operaciones de bajo perfil, control social e incluso sabotaje político (Barrios , 2024);

Auge de empresas de seguridad privada (Mella, 2025), utilizadas por corporaciones extractivas para resguardar minas, monocultivos y proyectos de infraestructura en territorios disputados con comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas.

Políticas carcelarias punitivas, criminalistas, orientadas al castigo y no a la prevención o resocialización, lo cual refuerza un imaginario social de

control y miedo, compatible con el discurso militarista y autoritario, convertir a países como la Guyana por parte de Francia (Peña, 2025) y El Salvador por parte de EEUU (BBC, 2025) en centros carcelarios internacionales violatorios de los derechos humanos, es una muestra de un giro hacia posturas que destruyen el estado moderno e incluso el sentido mismo de la existencia de los Estados.

Concentración mediática y construcción de narrativas de “guerra contra el crimen internacional”, que justifican la militarización permanente de la vida cotidiana y actitudes extremas e incluso fascistas de exclusión y/o aniquilación de lo que consideran es el foco de la inseguridad, los migrantes. (Dauré, 2024)

Guerra por el control de infraestructura estratégica. Geopolítica de los puertos y la militarización silenciosa en América Latina

La disputa global por el control marítimo ha reconfigurado las dinámicas geopolíticas de Estados Unidos contra China, situando a los puertos y rutas comerciales en el centro de una nueva guerra estratégica. América Latina, con su ubicación privilegiada, se ha convertido en un territorio clave dentro de esta confrontación. Mientras China avanza a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), consolidando alianzas económicas y logísticas (Punto de Vista, 2023), EE.UU. ha intensificado una política de presión diplomática y militar para frenar su expansión, buscando instalar bases y recuperar el control de puertos estratégicos (RT, 2025).

Este enfrentamiento implica no solo intereses comerciales, sino también una militarización progresiva de territorios bajo el pretexto de cooperación en seguridad, lo que amenaza la soberanía de los países latinoamericanos.

La resistencia social —como la mostrada por el pueblo fueguino de Argentina— evidencia una creciente conciencia frente a estos intentos de

intervención (Eiseigui, 2025). En este contexto, la militarización adopta nuevas formas, menos visibles pero igualmente peligrosas: ocupación logística, influencia en infraestructura crítica y diplomacia coercitiva, reeditando patrones de la Guerra Fría con actores y rutas renovadas.

Crece así, una abierta disputa geoestratégica de Estados Unidos contra China, centrada en el control de puertos e infraestructuras clave en América Latina y otras regiones del mundo. Estados Unidos busca reforzar su presencia en puertos estratégicos como los de Guatemala, Panamá y Ushuaia (Argentina), bajo el discurso de modernización, seguridad o ayuda humanitaria. Sin embargo, estas acciones se enmarcan en una lógica de contención del avance comercial y político de China en la región, especialmente ante megaproyectos como el puerto de Chancay en Perú, parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por Pekín desde 2013.

El control de puertos por parte de EE.UU. no es exclusivo de América Latina, también se extiende a Grecia y otras regiones estratégicas, donde se presiona para reducir la participación china en terminales prioritarias para conectar continentes. Las acciones norteamericanas a la cabeza de occidente, se complementan con iniciativas como la Asociación para la Infraestructura Global (G7, 2022) y el Corredor Económico India– Europa (G20, 2023), que buscan contrarrestar la influencia china en comercio, energía y conectividad, medida que se anuncian pero que no avanzan al ritmo que ya lo hace la iniciativa China.

Esta ofensiva estadounidense se caracteriza por medidas radicales, chantaje diplomático y uso de fuerza indirecta, lo que refleja no solo una competencia económica, sino una creciente militarización de las relaciones internacionales y del control logístico regional incluyendo por supuesto a América Latina, con implicaciones sobre la soberanía de los países y su posicionamiento global.

Estrategias de dominación y recolonización

Uno de los aspectos más alarmantes de este proceso de militarización regional en curso es la presencia creciente de bases militares estadounidenses en países estratégicos, especialmente alrededor de la cuenca amazónica y la franja pacífica. La Amazonía es entendida como una región clave por su biodiversidad, recursos hídricos, minerales críticos y potencial energético.

El Pentágono ha identificado estas áreas como prioritarias, no sólo por su riqueza, sino por su valor geoestratégico en la disputa global con China (Richardson, 2023).

En este marco, Estados Unidos y países aliados despliegan una lógica contrainsurgente regional, donde se promueven o aprovechan contextos de crisis para intervenir indirectamente en contener comunidades organizadas en defensa de sus territorios y derechos.

Al tiempo, exacerban, provocan, inducen situaciones de “no-Estado” —por ejemplo, a través del fortalecimiento de redes de criminalidad transnacional, narcotráfico, flujo de armas o migración desbordada— fenómenos que sirven como justificación para ampliar la presencia militar, reforzar el control, aumentar la deuda externa y condicionar las políticas nacionales (Ruiz, 2025).

Esta estrategia actúa como un mecanismo de recolonización encubierta, disfrazada de cooperación o lucha contra el crimen organizado.

Ejemplos recientes incluyen la exacerbada crisis en Haití, la intervención en Perú (con el debilitamiento de su democracia y la militarización del orden interno), la desestabilización en Ecuador, la presión permanente sobre Bolivia, y el control casi total en países como Argentina y Chile, el constante ataque y criminalización del pueblo Mapuche, regiones del sur donde las agendas de seguridad, extractivismo y disciplina social se han impuesto con fuerza.

Todo esto en un contexto de creciente fragilidad democrática y de manipulación electoral, con apoyo mediático y financiero de actores externos.

Fascismo del siglo XXI y cultura de guerra

A este cuadro se le suma y no como algo añadido, sino de suyo propio, el ascenso de nuevas formas de autoritarismo, exclusión y extremismo que bien pueden ser denominadas fascismo del siglo XXI. Esta ideología no se expresa necesariamente con uniformes o discursos abiertamente totalitarios, sino a través de una cultura del odio, la vigilancia permanente, la despolitización de las masas, la criminalización de la protesta y la destrucción de todo lo común (Villa Gómez & Insuasty Rodríguez, 2024).

La “diplomacia de la agresión y la sumisión”, intensificada bajo el segundo mandato de Donald Trump, refuerza esta tendencia, promoviendo relaciones de subordinación-forzada mediante chantajes económicos, sanciones unilaterales, sabotajes diplomáticos y presión sobre organismos multilaterales. El dominio se ejerce no sólo con armas, sino con mercados, deuda, narrativa y tecnología.

El aumento del gasto militar a nivel global no es una respuesta neutra a amenazas externas, sino un reflejo de una reconfiguración del poder mundial, donde la guerra —real o simbólica— se convierte en el eje articulador de las relaciones internacionales. En América Latina, esta militarización adopta formas múltiples, articuladas por intereses corporativos, geoestratégicos y políticos, en un contexto de regresión democrática y de fragilidad institucional.

La región se encuentra atrapada entre la presión militar de las potencias occidentales, la expansión del control territorial por parte de empresas transnacionales, y la criminalización creciente de sus pueblos. Lo que está en juego no es sólo la soberanía, sino el futuro mismo de las democracias latinoamericanas, la existencia misma de los pueblos, su capacidad de autodeterminación y la posibilidad de construir sociedades justas, pacíficas y en armonía con la madre tierra, la Paz rebelde, transformadora, participativa, está en acecho.

Ruptura del Estado Social de Derecho y del Contrato Social Moderno: síntomas de una crisis civilizatoria

La arquitectura política del Estado moderno, erigida sobre los principios del contrato social y consolidada en su forma más garantista como Estado social de derecho, está hoy profundamente erosionada. Esta figura, que supuestamente encarna la promesa de igualdad, justicia y bienestar para todos los ciudadanos, ha sido desbordada por una dinámica global marcada por el militarismo, la exclusión, la mercantilización extrema de la vida y la destrucción acelerada del planeta. La exacerbación del gasto militar —en lugar de una inversión social significativa— configura un viraje autoritario y securitario que revela una traición estructural al pacto fundacional del Estado moderno. En vez de garantizar derechos, se garantiza la represión; en lugar de distribuir riqueza, se concentra el poder armado en beneficio de una élite transnacional.

La tragedia humanitaria que representa el genocidio contemporáneo —visibilizado y documentado, pero sin freno ni sanción efectiva— evidencia la impotencia de los organismos internacionales y la relativización de los principios universales de los derechos humanos. Esta inoperancia no es solo técnica o institucional, sino estructural: responde a una correlación de fuerzas que ha subordinado el derecho internacional a los intereses geopolíticos de las potencias y corporaciones dominantes.

Lo mismo ocurre con la catástrofe climática, cuyo agravamiento es un síntoma de la ruptura del equilibrio ecosistémico que sustentaba el contrato civilizatorio moderno. En lugar de actuar colectivamente, los Estados optan por soluciones tecnocráticas y por mantener intocados los privilegios del capital fósil y extractivista.

La situación de las personas migrantes, quienes enfrentan un trato sistemático de exclusión, criminalización y despojo de derechos, es otro indicador del colapso ético del modelo estatal vigente. Las fronteras no solo separan territorios; hoy constituyen verdaderos dispositivos de control biopolítico que deshumanizan y jerarquizan la movilidad.

Esto contrasta brutalmente con la libertad absoluta del capital financiero, que fluye sin restricciones hacia paraísos fiscales, mientras las poblaciones empobrecidas enfrentan muros, balas y detención. En este contexto, el tráfico masivo de armas provenientes, en su mayoría, de Estados Unidos, aviva conflictos, criminaliza barrios populares y fortalece redes ilegales que suplantán al Estado en zonas donde éste ha dejado de operar para garantizar derechos.

A todo ello se suma la profundización de la pobreza, la desigualdad extrema y la negación sistemática del acceso a bienes simbólicos fundamentales como la educación, la cultura, el arte y la creación. Estas dimensiones no son simples ornamentos de la vida social, sino pilares esenciales de la autonomía, la ciudadanía crítica y la construcción del sentido colectivo. Su negación perpetúa una forma de miseria que es no solo material sino también existencial, desarticulando los lazos comunitarios y anulando la posibilidad de imaginar otros futuros. Así, la crisis del Estado social de derecho y del contrato social no es solo una crisis institucional, sino también civilizatoria: exige repensar radicalmente los fundamentos de la organización política, económica y cultural de nuestras sociedades.

Memoria histórica y continuidades de la militarización en América Latina

La militarización en América Latina no es un fenómeno reciente, sino una expresión de procesos históricos profundamente arraigados en las estructuras políticas, económicas y sociales de la región. Desde mediados del siglo XX, los países latinoamericanos fueron objeto de múltiples formas de intervención directa e indirecta, especialmente durante la Guerra Fría, bajo el argumento del antagonismo ideológico promovido por Estados Unidos. Esta estrategia geopolítica transformó a América Latina en un laboratorio de contrainsurgencia, donde se implementaron doctrinas como la del “enemigo interno”, que redefinieron el rol de las fuerzas armadas y de seguridad, otorgándoles funciones represivas contra sus propias poblaciones.

Instituciones como la Escuela de las Américas jugaron un papel clave en este proceso, capacitando a miles de oficiales militares en técnicas de guerra psicológica, inteligencia y contrainsurgencia. El resultado fue la institucionalización de prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos: desapariciones forzadas, torturas, masacres y persecuciones políticas se convirtieron en parte del repertorio represivo de los Estados. Casos emblemáticos como los de Argentina, Chile, Colombia y Guatemala muestran cómo estas doctrinas produjeron un trauma colectivo de profundas consecuencias, aún no completamente reparado (FOR, SICSAL, SOA WATCH, 2020).

Uno de los ejemplos contemporáneos más paradigmáticos de la continuidad de estas estrategias es el Plan Colombia. Aunque presentado como una política para combatir el narcotráfico, este plan consolidó la militarización de las instituciones estatales, incentivó la proliferación de grupos paramilitares y subordinó la política nacional a intereses geoestratégicos y corporativos extranjeros, especialmente en sectores como la agroindustria, la minería y la infraestructura extractiva (Zibechi, 2023). Este modelo, replicado en otros países bajo distintas denominaciones, ha tenido como consecuencia el debilitamiento de la autonomía política y social, la profundización de las desigualdades estructurales y la normalización de la violencia como herramienta de gobernanza. Hoy, por ejemplo, el llamado Plan Ecuador sigue la misma lógica. Parece que no aprendemos de nuestra propia historia.

Frente a estas realidades, las Comisiones de la Verdad han desempeñado un rol crucial en la documentación de las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto en contextos dictatoriales como democráticos (Colorado Marín & Villa Gómez, 2020). La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina, por ejemplo, evidenció cómo la política estatal de seguridad fue utilizada para justificar crímenes de lesa humanidad. Estos procesos de memoria histórica, si bien limitados en muchos casos, representan esfuerzos fundamentales para cimentar garantías de no repetición y avanzar hacia modelos de justicia transicional con enfoque restaurativo.

A modo de Conclusión: Hacia una seguridad regional con soberanía y justicia

El panorama global de militarización revela profundas asimetrías tanto en términos de capacidades armamentistas como de impacto geopolítico. La concentración del gasto militar en potencias como Estados Unidos y creciente en Rusia, China, India, sumado al acelerado desarrollo de tecnologías bélicas como las armas autónomas letales, introduce nuevos desafíos éticos, políticos y jurídicos que intensifican la lógica de control y despojo, especialmente sobre territorios del sur global.

Este escenario no solo profundiza las desigualdades históricas y reproduce formas coloniales de dominación, sino que también evidencia la urgencia de una regulación internacional efectiva y preventiva sobre el uso de inteligencia artificial en contextos bélicos. La presencia de sesgos algorítmicos, que ya han demostrado impactos negativos en poblaciones racializadas y vulnerables en ámbitos como la salud o la educación, agrava aún más el riesgo de violaciones a los derechos humanos en los conflictos armados.

Frente a este contexto, es imperativo que los Estados, la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales promuevan modelos de seguridad que prioricen la soberanía, la dignidad humana y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, abriendo paso a un diálogo regional y global sobre el desarme, la justicia y la construcción de paz duradera.

Ahora bien, a la luz de una larga historia de intervenciones, golpes militares y violencia institucionalizada, América Latina enfrenta hoy el reto impostergable de construir un modelo de seguridad que rompa con las lógicas heredadas del pasado y responda a las necesidades reales de sus pueblos. Esta transformación implica, en primer lugar, una profunda reestructuración de las fuerzas armadas, orientada a eliminar doctrinas obsoletas como la del “enemigo interno” y a formar instituciones bajo principios de derechos humanos, justicia social y respeto por la democracia.

En segundo lugar, resulta indispensable avanzar hacia una mayor autonomía y cooperación regional. Organismos como la CELAC y UNASUR, aunque debilitados en los últimos años, pueden constituirse en espacios estratégicos para diseñar políticas de seguridad concertadas, basadas en la resolución pacífica de conflictos y en el respeto a la soberanía de los Estados. A ello se suma la necesidad de fomentar la participación activa de la sociedad civil, movimientos sociales, comunidades étnicas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el diseño e implementación de estrategias de seguridad. Su voz es fundamental para construir enfoques integrales que prioricen la paz, la equidad y la inclusión.

Por último, la promoción de la educación crítica y la memoria histórica se convierte en un pilar para la transformación cultural de los imaginarios de seguridad. Incluir en los sistemas educativos el análisis de las intervenciones extranjeras, sus consecuencias y las luchas sociales que se han desarrollado en respuesta, es clave para fortalecer la conciencia ciudadana y promover procesos emancipadores.

La militarización, lejos de ser un fenómeno aislado o exclusivamente técnico, representa una forma específica de gobernar, controlar y disciplinar a los pueblos. América Latina debe asumir el desafío de construir un modelo de seguridad basado en la soberanía popular, los derechos humanos y la paz con justicia social. Esto exige, por un lado, resistir la expansión del complejo militar-industrial transnacional; y por otro, recuperar las capacidades políticas, culturales y organizativas de los pueblos para decidir sobre su destino.

La universidad, los gobiernos democráticos, los movimientos sociales y los pueblos tienen el deber histórico de imaginar y construir alternativas al paradigma militarista. Solo así será posible avanzar hacia un horizonte de autodeterminación, dignidad y vida plena en nuestros territorios.

Alfonso Insuasty Rodríguez es docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, parte de la Red Interuniversitaria por la paz REDIPAZ Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2880-1371>
Contacto: alfonso.insuasty@gmail.com

- * Andrés Escobar Vásquez es Coordinador de la Maestría en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (ITM). Parte de la Red InterUniversitaria por la Paz REDIPAZ. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0830-9363>
Contacto. andresescobarv@itm.edu.co

Se han omitido notas y fuentes de este artículo el que está disponible de manera íntegra e www.derechoalapaz.com/documentos/

Tesis sobre la militarización social en América Latina y el Caribe

*Por David Barrios Rodríguez**

En la actualidad en distintos países de América Latina y el Caribe sectores organizados de la población, defensoras y defensores del territorio, integrantes del medio universitario, esfuerzos de comunicación independientes-populares-autónomos hablan de manera constante de la profundización de la militarización. Esto ocurre sin distinciones respecto al signo político que se atribuye a los respectivos gobiernos en donde se denuncia tales procesos y hace parte del recorrido sociopolítico de las distintas geografías de la región. Como será señalado más adelante, esto obedece a que se trata de un proceso general, que se manifiesta en diversas escalas y a partir de distintas modalidades, tanto en el área en que vivimos como a nivel planetario.

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, además de las expresiones tradicionalmente reconocidas (participación de militares en la esfera civil, ampliación de atribuciones o incremento de los presupuestos asignados por los Estados), la militarización comporta rasgos específicos que no han recibido la atención necesaria y que plantean desafíos por las implicaciones que tienen en el perfeccionamiento de los mecanismos de disciplinamiento y control social.

El presente análisis parte de un panorama general sobre las modificaciones en los procesos de militarización. A continuación se establecen elementos para identificar el avance específico que tiene en algunos países de la región y finalmente se sintetiza la discusión a partir del planteamiento de

12 tesis sobre la materia. En conjunto, se propone una contribución para resignificar los sentidos en torno a la problemática y con ello establecer diagnósticos más completos que resulten útiles para personas y colectividades cuyas vidas se encuentran bajo el cerco de las distintas vertientes de la militarización.

I

Como punto de partida, es necesario subrayar que los procesos de militarización que estamos atestiguando y padeciendo no ocurren de manera aislada, sino que se dan en el marco de la concatenación perniciosa de las diferentes dimensiones de una crisis de carácter civilizatorio. Los efectos devastadores del proyecto político, económico, cultural y social del neoliberalismo, se combinan con los de los cada vez más frecuentes desastres naturales, conformando lo que se ha caracterizado como una “convergencia catastrófica”, aquella en la que cada uno de sus componentes profundiza y se expresa en los otros. Esto se presentaría con mayor virulencia en el “Trópico del 3 caos”, es decir, la franja del planeta entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio, en los que poblaciones históricamente relacionadas con la agricultura y la pesca (casi 3 mil millones de personas) se ven enfrentadas a los efectos del cambio climático, lo que coloca en el panorama el incremento de distintas expresiones de conflictividad social, lo que incluye fenómenos de violencia armada y guerras.

El proceso general había sido identificado desde comienzos del siglo XXI como un cambio en el eje ordenador de la sociedad, desde la producción y el mercado hacia instancias abiertamente disciplinadoras como las militares. Aun así, es necesario actualizar y seguir estableciendo las 5 relaciones que esa modificación comporta respecto a la dimensión ambiental de la crisis antes señalada, así como sus impactos en ámbitos como la configuración de formas emergentes de institucionalidad, territorialidades, subjetividades, estéticas, formas de reproducción social y la vida cotidiana en general.

También en el nivel más general de la cuestión, se trata de problemáticas sobre las que ya desde hace años se reflexiona desde la cúpula militar de Estados Unidos, quienes también prevén que la combinación simultánea de desastres naturales, migración, afectación de cadenas de suministro regionales y globales, disputa entre las grandes potencias, colapso de países considerados aliados (de Estados Unidos) o los efectos del cambio climático, rebasen las capacidades del Departamento de Defensa conduciendo con ello a que se “desate el infierno” .

En un ámbito estrechamente relacionado con ello, los discursos que buscan posponer o paliar la debacle ecológica en curso, hacen uso de estrategias militares verdes para “resguardar” ecosistemas, especies animales o para el desarrollo de proyectos que se presentan como “amables” con el medio ambiente. Esto redundará en procesos de desterritorialización e implementación de campañas contrainsurgentes con el objeto de reprimir poblaciones y sus resistencias, a través de técnicas de coerción “duras” y tecnologías de pacificación “suaves” .

Estas escalas del análisis deben ser consideradas, porque en lo sucesivo albergarán y modelarán las tendencias generales de los procesos de militarización que, teniendo ya formas de expresión identificables, se expandirán y harán crecientemente complejas en los tiempos por venir.

Habiendo señalado esto y descendiendo en el nivel de análisis, es preciso llevar a cabo un cuestionamiento sobre las formas de comprensión dominantes respecto al militarismo y la militarización, como fueron entendidas a lo largo del siglo XX, pero que siguen teniendo reverberaciones en el presente. Esto está relacionado con una modificación sustancial en las formas de guerra dominantes, que ya no corresponden con el canon que colocaba en el centro la actuación de los Estados (conflictos bélicos interestatales) y los ejércitos profesionales identificados con ellos. Lo que se agregó a dicha ecuación y tendió a generalizarse, fue la confrontación entre fuerzas con adscripción estatal (en las que deben ser incluidas las policías militarizadas) y distintos tipos de actores armados quienes también tienen pugnas

entre sí. Estas fuerzas incluyen desde ejércitos privados, Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP), brazos armados de la economía criminal, pandillas y grupos pequeños más próximos al sicariato, expresiones de paramilitarismo contrainsurgente, así como organizaciones político-militares que se reconocen en la estela de los movimientos revolucionarios de izquierda.

A ello habría que agregar que en la actualidad no nos encontramos frente a una disyuntiva entre una forma de guerra o la otra, sino que ambas esferas (las de la guerra tradicional y la irregular) tienden a imbricarse. Por ejemplo, en lo que se ha denominado guerras encubiertas o subsidiarias (proxy wars), en las que en terrenos sensibles o donde no se puede intervenir de manera abierta, los Estados recurren a actores armados como los antes señalados para cumplir sus objetivos.

Otra expresión que ha estado relacionada con esta modificación es la guerra híbrida, que en el debate militar en que fue acuñada (2002-2013) tenía como énfasis la convergencia operacional de ejércitos nacionales con actores no estatales, así como la combinación de modalidades para hacer la guerra. Esto cambió con posterioridad a la anexión de Crimea por Rusia, ya que a partir de entonces fueron privilegiados ciberataques, tareas de espionaje, propaganda e información, campañas de desestabilización para deponer gobiernos (en la lógica de las llamadas Revoluciones de Colores) así como con el uso de herramientas no militares para promover extraterritorialmente los intereses de los Estados que las emplean (guerra económica, presión diplomática, formas de penetración cultural, entre otras).

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, se trata de una región que se caracteriza desde hace más de un siglo por la casi ausencia de conflictos bélicos interestatales, pero en la que ha sido recurrente la invocación de enemigos internos para que los Estados emprendan campañas bélicas y represivas contra sus poblaciones. Además de ello, por lo que representa para Estados Unidos en términos geoestratégicos, ha sido un escenario de ensayo para la implementación de distintas modalidades de guerra irregular, en las que se incluye la guerra contrainsurgente y contra las drogas. Esto

ha posibilitado la intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la potencia de Norteamérica, incluso antes de que este tipo de aproximaciones se generalizaron con posterioridad al lanzamiento de las campañas bélicas en Oriente Próximo en los albores del siglo XXI.

El caso paradigmático es Colombia, entre otras cosas por la colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que permitió que el país fuese un sitio de experimentación de las formas de guerra irregular, en especial a partir de la implementación del Plan Colombia. De esta manera, el país andino, anticipó lo que con el paso de los años se implementaría en otros contextos, no sólo del área, sino del mundo entero.

A la par de ello, en un proceso no homogéneo pero que se puede rastrear durante un poco más de 3 décadas, hemos asistido a la aparición/sofisticación de actores armados no estatales que controlan poblaciones y territorios. Es por lo que, para poder hablar sobre la militarización actual en América Latina y el Caribe de manera adecuada, resulta indispensable aludir al papel que juegan los grupos armados que no pertenecen de manera formal a la estatalidad. Aquello que habiendo sido denominado de diversas formas (paramilitarismo, escuadrones de la muerte, formas de privatización de la seguridad y la violencia, facciones de tráfico o brazos armados de los cárteles del narcotráfico), puede ser albergado de manera más apropiada en aquello que prefiero denominar como formas de violencia armada organizada. Estas expresiones que provienen de distintas experiencias y énfasis previos (políticos, económicos, delictivos) de manera progresiva han incrementado su volumen, portafolio de actividades y también hacen parte de manera constante de las lógicas represivas y de disciplinamiento social. La naturaleza misma de las actividades en las que participan estos grupos puede volver difusa su intervención en determinados espacios, pero lo que no puede hacerse es ignorar el peso que ahora tienen en nuestras sociedades.

Sobre este aspecto es necesario destacar dos elementos que deberían ser considerados para una mejor aproximación al fenómeno. En primer lugar, que no se trata de un cambio repentino, sino de un proceso en que se han generalizado formas de violencia armada organizada y, en segundo, que en

algunos países del área estos grupos han afianzado un control que, abarcando varias dimensiones (económica, social, espacial) prefiguran la instauración de órdenes sociales paralelos a través de los cuales el capitalismo contemporáneo encuentra formas de reproducción que traspasan las fronteras constituidas de manera previa y que se esparcen en diversos ámbitos

Es debido a ello que la identificación exclusiva del militarismo y la militarización con las instituciones castrenses de los Estados no nos permite en la actualidad dar cuenta de manera adecuada del proceso que se vive en distintos contextos y territorios del área. Resultan así limitados los enfoques que definen la militarización como la disposición de los Estados en recurrir a los cuerpos militares para la resolución de disputas en torno al orden público o salvaguardar las condiciones mínimas de seguridad ante una amenaza del orden establecido. Tampoco remite ya de manera unívoca ni determinante al “proceso de adopción de modelos, conceptos, doctrinas, procedimientos y personal militar en actividades de naturaleza civil, entre ellas la seguridad pública”. También resulta inerte restringir su valoración respecto al gasto en armamento, el porcentaje o cantidad de personal de los Estados dedicado a labores militares o el incremento y sofisticación de la infraestructura y avituallamiento de las instituciones castrenses

II

Antes de introducir algunas líneas generales para la comprensión del proceso de militarización reciente en la región, resulta apropiado aludir de manera específica al estado actual de la problemática en algunos países del área que destacan por la magnitud y características que comportan.

En el espectro que se reconoce más reaccionario se encuentra el gobierno de Jair Messias Bolsonaro, aquel que incluso poco después de haber iniciado en el cargo ya había sido caracterizado como la “vanguardia apocalíptica” por las implicaciones socioambientales de sus políticas. Los incendios en la Amazonia, en buena medida inducidos, fueron sólo el anticipo de lo

que implicaría un gobierno que ha superado cualquier estimación previa. Brasil afronta una crisis sin parangón, tanto por el acumulado de políticas locuaces pero que se enmarcan en principios clasistas, racistas, sexistas y misóginos; como por el manejo gubernamental de la Pandemia por SARS-COV-2, afrontada de una manera a todas luces negligente. En relación con la militarización, sobre Brasil se ha insistido en la incorporación de integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas al gabinete del presidente, mismos que han llegado a controlar la Vicepresidencia, 10 de 22 ministerios del país (entre ellos ciencia y tecnología, energía, salud, educación, entre otros) y más de 6 mil cargos comisionados ocupados en la administración pública directos e indirectos; siendo Bolsonaro mismo ex capitán del ejército. Además de ello, en una tendencia que se puede rastrear desde los 16 gobiernos del PT, el enfoque militar del combate al tráfico de estupefacientes ilegales y de ciertos fenómenos de violencia urbana, han abonado para que Brasil tenga en años consecutivos las mayores cifras de asesinatos en la región.

Fue durante las gestiones de Lula da Silva y Dilma Rousseff que se postuló al país para la realización de un ciclo de megaeventos (2007-2016) que permitió la militarización de las sedes deportivas, en las que destacó Río de Janeiro con la implantación de las Unidades de Policía Pacificadora en distintas favelas de la ciudad.

En lo que respecta a los grupos de tráfico y las milicias brasileñas, mantienen gran control territorial en determinados espacios de las principales ciudades, en los que establecen relaciones despóticas con sus habitantes. En Río de Janeiro, datos de 2018 planteaban que las milicias por sí solas estaban presentes en 37 barrios y 165 favelas de la Región Metropolitana de la ciudad, controlando áreas habitadas por 2 millones de personas, lo que se traduce en una sexta parte de la población de la región. Al agregar una perspectiva territorial, se ha establecido que tienen un área de influencia de 342 km² lo que constituye una cuarta parte de la capital del estado .

En distintas favelas de la ciudad a ello habría que agregar el control por parte de las facciones de tráfico como el Comando Vermelho, Amigos dos

Amigos y Terceiro Comando Puro, quienes establecen disputas con los otros actores armados. También habría que considerar el papel de las Unidades de Policía Pacificadora y la Policía Militar de Río de Janeiro quienes establecen formas arbitrarias de control y disciplinamiento de la población en las áreas habitadas por los sectores populares.

Respecto a México, se ha denunciado que el proceso de militarización está relacionado con la ampliación e institucionalización de funciones de las Fuerzas Armadas en el ámbito civil. Este proceso se da en el marco del triunfo electoral de una iniciativa que se autoidentifica como antineoliberal y que tuvo un respaldo social inédito al obtener la jefatura del gobierno federal con 30 millones de votos. Además de ello arrasó con sus contrincentes, logrando victorias en distintos estados del país y asegurando en ese momento un margen de maniobra importante en el Congreso, para llevar adelante su agenda de gobierno. Esto permitió entre otras cosas, sacar adelante reformas que durante su primer año de gobierno autorizaron la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (durante 5 años) a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado el carácter inconstitucional de estas atribuciones a través del análisis y ulterior invalidación de la Ley de Seguridad Interior de la administración de Enrique Peña Nieto .

Otro ámbito en el que se le ha dotado de gran protagonismo a las Fuerzas Armadas es el de su participación en obra pública. Destaca la asignación de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). A ello se agrega la construcción de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar también encomendadas al Ejército, al igual que la edificación de cuarteles para la Guardia Nacional. Respecto al polémico proyecto denominado “Tren Maya” al Ejército le fue asignada la construcción de los tramos que van desde Playa del Carmen al Aeropuerto Internacional de Cancún; otro más que proyecta unir Tulum con Bacalar y Chetumal; así como el de Bacalar con Escárcega. En fechas recientes también se asignó al Ejército la construcción del aeropuerto de Tulum.

Respecto a la creación de la Guardia Nacional se trata de la reedición de formas de policía militarizada (Policía Federal, Gendarmería Nacional, ambas desaparecidas por corruptas e ineficaces) con atribuciones federales que están destinadas a múltiples funciones, entre ellas la contención de la migración proveniente de Centroamérica y el combate a las estructuras de la economía criminal. De manera reciente, también fue avalada la incorporación de los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación que definirá las prioridades y estrategias en el ámbito de la investigación (el equivalente mexicano del Minciencias colombiano, CONICET argentino o CNPq brasileiro).

A mediados de agosto de 2021 se anunció una iniciativa de reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de la creación de un Estado Mayor Conjunto integrado por miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con lo que se le incorpora legalmente como fuerza armada. Además de ello destaca la “limpieza de imagen” de las Fuerzas Armadas que históricamente, pero con mayor énfasis en los últimos años han cometido diversas violaciones a los derechos humanos de la población. Ejemplo de ello fue que en un hecho inédito, el gobierno mexicano realizó múltiples gestiones diplomáticas que permitieron la liberación y regreso a México del General Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y acusado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

En México las organizaciones de la economía criminal han pasado por un proceso de transformación notable. De acuerdo a distintos análisis, desde el lanzamiento de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, de 4 grandes organizaciones identificables, ahora se cuentan más de 200 facciones de distintos tamaños, aunque hay análisis que hablan incluso de 463 grupos a lo largo y ancho del país. Además de ello, algunos de los grandes grupos que aún existen (Cartel 23 Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Cartel del Golfo, Los Zetas, etc.) han logrado desarrollar sus estructuras armadas, que resultan cada vez más sofisticadas y con mayor capacidad logística

y poder de fuego, lo que quedó de manifiesto en el episodio en que en la ciudad de Culiacán, el Cartel de Sinaloa logró cercar al Ejército mexicano y liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.

En cuanto a Colombia, es de sobra conocido que ha contado con uno de los procesos de guerra más duraderos en la historia reciente, aunque de manera simultánea la élite del país Sudamericano (que incluye a los medios de comunicación masiva) promueva la idea de que se trata de un país donde la democracia procedimental funciona y en que no han resultado habituales los golpes de estado como en otras regiones de América Latina y el Caribe. Sin embargo sólo en el siglo pasado, el Ejército intervino más de 20 veces en la política interna del país, al mismo tiempo que el Estado de sitio ha sido invocado de manera recurrente. Sólo durante el Frente Nacional se estima que quince de los veinte años que duró la alternancia entre los partidos Liberal y Conservador, fueron regidos por el Estado de sitio .

Si miramos el asunto desde una perspectiva más amplia, se trata de un país que desde su independencia hasta 2016, cuando se firman los acuerdos de paz en la Habana, ha estado más de tres cuartas partes del tiempo en guerra, lo que hace que se le defina como un conflicto armado prolongado. Esa densidad del proceso ha provocado que Colombia cuente con una de las 25 sociedades más militarizadas de la región y del mundo entero, lo cual no está relacionado de manera exclusiva con las funciones, tamaño o presencia de las Fuerzas Armadas en el espacio público o el carácter bélico de su policía o el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), sino también con la difusión de contenidos que hacen apología de esas instituciones.

A partir de abril de 2021, el levantamiento social en Colombia ha sido enfrentado con un repertorio represivo que, habiendo sido puesto en práctica en otros momentos contra las distintas luchas sectoriales de Colombia, se ha adaptado y perfeccionado en este momento. Destaca la incorporación de mecanismos de intervención de la señal inalámbrica de internet o de los cortes al suministro de energía eléctrica como represalia contra zonas de las ciudades en las que se han llevado a cabo las movilizaciones. Como ha

pasado en Chile durante los últimos años, la actuación del ESMAD replica las técnicas de pavor consistentes en disparar de manera directa a la cabeza de las y los manifestantes, lo que ha redundado en traumas oculares graves y la pérdida parcial o total de la vista. De manera clara también exhibe el tratamiento bélico que el Estado colombiano emplea contra las expresiones de descontento social.

Además de ello, con el correr de las semanas ha quedado claro que la estrategia mediática y específicamente represiva del Estado colombiano se complementa con la actuación de grupos de civiles armados que han participado en ataques a los puntos de encuentro de la movilización. También se han realizado denuncias sobre desaparición forzada, torturas, vejaciones y utilización de fosas comunes clandestinas como parte de las técnicas empleadas contra las y los manifestantes. Como resultado del informe final de la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (compuesta por más de 40 delegadas y delegados de 12 países) se estableció que el accionar represivo del gobierno fue similar a la estrategia militar que utiliza para combatir a actores armados, esto es, que se utilizaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del “enemigo interno” e incluyó once estrategias de tratamiento de guerra contra la protesta en el país andino.

En los tres casos, también destaca la creación o invocación de marcos jurídicos que amparan el uso de las Fuerzas Armadas. En Brasil se han usado reglamentaciones como la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), o el decreto presidencial que avaló una intervención federal en Río en 2019. En México a la autorización del empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad como fue referido antes, se agrega la reciente propuesta que busca incorporar a la Guardia Nacional a la estructura del Ejército mexicano. En Colombia, tan sólo a 3 días del inicio de las movilizaciones, y con un saldo para el momento de 9 asesinatos a mano de la fuerza pública, Duque invocó el Artículo 130 de la ley 1801 para declarar la “Asistencia Militar” por parte de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas.

En las dos décadas del presente siglo procesos de este tipo se han verificado en casi toda la región, aunque destacan por la magnitud y complejidad adquirida los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Brasil, Colombia y México. Sobre esto último me parece importante subrayar que el tratamiento estatal-gubernamental hacia la problemática ha sido calcado de manera repetitiva y que incluso, ninguno de los países que atravesaron por el llamado ciclo progresista propusieron alternativas para enfrentar la problemática, tendiendo a reproducir el repertorio de políticas públicas de corte coactivo.

Un curso similar se puede observar en países caribeños como Jamaica y Haití, en los que se ha dado tanto la militarización de las policías, el recurso de las Fuerzas Armadas para su uso en el espacio público y donde las estructuras de la economía criminal también controlan porciones del territorio.

En otras regiones del continente en las que la herida del pasado dictatorial hace poco viable el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, se mantiene el uso indiscriminado de policías militarizadas (Carabineros en Chile), o bien, se innova en este mismo sentido como ocurrió con la conformación de la Gendarmería Nacional en Argentina .

III

A continuación se realizará una aproximación sobre el estado actual de la militarización social en América Latina y el Caribe a partir de 12 tesis que intentan dar cuenta de la complejidad de la problemática. Esto es resultado, tanto de una extensa revisión bibliográfica, como de las posibilidades de interactuar con diversos procesos organizativos preocupados por este tipo de fenómenos en distintos contextos del continente. Son también estas colectividades y personas las que de manera permanente enfrentan en su cotidianidad los efectos de la militarización, quienes ponen el cuerpo y al mismo tiempo producen saberes muy necesarios y que apuntan a la defensa de la vida.

En relación a ello, deseo mencionar y agradecer a los distintos espacios con los que he realizado intercambios durante los últimos 11 años. En Colombia al Grupo para la Investigación Social Kavilando, a la Corporación para la Educación e Investigación Popular (CEDINS); a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y al Congreso de los Pueblos. En Río de Janeiro a las y los facilitadores del Curso Histórias Vivas – O histórico de resistência das favelas do Rio de Janeiro en el Museu da Maré, así como al Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro. En San Pedro Sula al Proyecto Paso a Paso en Rivera Hernández y también en Honduras al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). En Asunción al Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Paraguay). Al Frente de Resistencia Urbana (FRU) que aglutina distintas experiencias de lucha por vivienda y vida digna en ciudades latinoamericanas; al Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW). En México a las organizaciones y personas que integraron la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia de Estado (COMECOM), así como al Seminario Análisis y ya. De manera especial a mis compañeras y compañeros del Movimiento contra la Militarización de Ciudad Juárez.

Tesis sobre la militarización social en América Latina y el Caribe

- 1) La militarización actual constituye un proceso general, relacionado con la refuncionalización del Estado resultado de la implementación del neoliberalismo, la alteración en las formas dominantes de la guerra o la emergencia/generalización de formas de violencia armada organizada, lo que tiene como correlato que excede sus expresiones institucionales-estatales.
- 2) Se vincula con la resignificación de nociones en torno a la seguridad y las amenazas, lo que puede ser definido como procesos de securitización. De esta manera, en la actualidad se incluyen como objetos de

preocupación militar los procesos migratorios, o las expresiones de descontento popular.

- 3) La definición de seguridad de la que provienen los procesos de militarización contemporáneos está anclada en una concepción masculinizante y patriarcal, que al mismo tiempo que ofrece protección a sus poblaciones consideradas vulnerables y dependientes, implica una amenaza constante para las poblaciones controladas por otros actores armados. Además de ello, supone la difusión de lógicas jerárquicas y autoritarias.
- 4) Implica no sólo (y no principalmente) aspectos institucionales (funciones, presupuesto), sino también culturales y subjetivos. Esto incluye elementos estéticos, lingüísticos/lexicológicos así como imaginarios que incorporan metáforas bélicas respecto a diversos ámbitos de la vida social.
- 5) En términos espaciales sus expresiones son predominantemente urbanas, porque predominantemente urbana es la región en que vivimos y porque el teatro de operaciones bélico doctrinario y operativo ha transitado a este tipo de escenarios. De ello da cuenta el despliegue del urbanismo militar y la adaptación doctrinaria a entornos urbanos. Además de ello, destaca la generalización de disputas y proyección de relaciones de poder en el espacio que derivan en procesos de Des-Re-Territorialización .
- 6) En buena parte de América Latina y el Caribe la militarización corre por cuenta de actores armados estatales, así como de una diversidad de formas de violencia armada organizada, lo que incluye disputas securitarias (definición de amenazas, tratamiento bélico de asuntos que no eran considerados como tales, legitimación de formas de control, entre otras).
- 7) Como parte del proceso de reordenamiento económico que se apun-tala a través de estas formas de violencia armada organizada, hemos asistido a la instauración/generalización de distintas actividades con

las cuáles estos grupos se financian. En su proceso de diversificación, además de estimulantes ilegales, han incursionado en el tráfico de armas, migrantes y personas con objetivos de explotación laboral y sexual, biodiversidad, extracción y robo de combustibles fósiles, minería ilegal y; de manera muy importante por las implicaciones en la configuración de disputas por territorios, el cobro por protección-extorsiones que con distintas denominaciones tienen lugar en varios países y ciudades de la región. A ello hay que agregar que estas organizaciones también han implementado monopolios sobre productos y servicios diversos (comercio informal, piratería, televisión por cable, bombonas de gas, entre otros). Replicando uno de los principales mecanismos de la economía formal, el “gota a gota” o pagadario, una forma de usura dirigida a los sectores populares, caracterizada por altos intereses y donde la violencia directa funciona como mecanismo para asegurar el pago de los préstamos, se ha extendido por al menos 8 países de la región.

- 8) En términos materiales, esto supone la implementación y naturalización paulatina de toques de queda informales y autoimpuestos; el rediseño de cartografías urbanas en distintas escalas que apuntan hacia la conformación de fronteras invisibles ; o la normalización social del asesinato constante y sistemático de la población joven de sectores populares. Además de ello implica la instauración de bandos armados, principios de enemistad, formas de reclutamiento entre la población. En los lugares donde esta lógica ya resulta dominante, las distintas fuerzas, pero principalmente las del Estado tienden a comportarse como fuerzas de ocupación, o inclusive de conquista.
- 9) En determinadas escalas de los territorios, establecen órdenes de autoridad paralelos al de los Estados, en el marco de los cuales imponen regulaciones sobre las formas de convivencia, comportamiento, e inclusive sancionan conductas a través de penas y castigos
- 10) Los procesos de militarización contemporáneos han incorporado componentes contrainsurgentes en la medida en que se considera

esencial actuar sobre las poblaciones. En términos doctrinarios, esto comporta una resignificación que abarca tanto lo abiertamente militar, como los proyectos de desarrollo, la promesa de servicios de salud, educación y el ideal modernizador.

- 11 En la cotidianidad la militarización conduce a que la vida de las poblaciones se encuentre entre cercos y que se difundan e introyecten socialmente sentidos bélicos, por ejemplo, a partir de la generalización de tareas de inteligencia propiciadas por las actividades de las estructuras de la economía criminal .
- 12) Los procesos de militarización desdoblados entre lo estatal y las expresiones de violencia armada organizada están en sintonía con la extensión de las fronteras de apropiación de la naturaleza y de explotación de la población para la acumulación. Vistos en conjunto nos permiten avizorar los contornos del capitalismo del siglo XXI, dejando entrever la redefinición/refundación de institucionalidades, modos de vida y formas de reproducción social.

* David Barrios Rodríguez, Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, del Instituto de Investigaciones Económicas, docente de la Facultad de Filosofía y Letras y del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, todo ello en la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico davidbarrios@filos.unam.mx

Se han omitido notas y fuentes de este artículo el que está disponible de manera íntegra en www.derechoalapaz.com/documentos/

Mercenarios y contratistas civiles: el negocio sucio de las guerras

*Por Félix Madariaga**

¿Quién se hace cargo de ellos cuando termina la guerra y vuelven a sus países de origen? El ejemplo de Colombia, es un camino que deberían comenzar a pensar los distintos países que proveen de esta mano de obra para la guerra. Crear leyes para una problemática de hoy y del futuro.

Colombia es un ejemplo que nos gustaría que siguieran muchas naciones que son exportadores de combatientes, país en el que desde hace algunos años se está buscando una solución para el grave problema de los mercenarios y las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP).

El año pasado, el presidente Gustavo Petro presentó una ley para impedir el reclutamiento de mercenarios en su país. El proyecto tiene como objetivo principal evitar el reclutamiento y la participación de ciudadanos colombianos en actividades mercenarias: tipificando el delito de mercenarismo, prohibiendo el entrenamiento paramilitar para fines mercenarios, apuntando a la cooperación internacional y dando protección a los veteranos.

Colombia ha sido por años uno de los principales proveedores de mercenarios, lo que se debe fundamentalmente a la alta capacitación militar, falta de oportunidades económicas y una importante demanda global.

Más de 4000 ex militares colombianos han sido contratados para servir en conflictos internacionales, principalmente en Oriente Medio y África, lo que demuestra también cómo el capital humano entrenado con recursos estatales se está usando para producir utilidades privadas.

Es evidente que el mercado de los mercenarios y contratistas privados, como les gusta hacerse llamar, crea problemas tanto internos como externos. La participación de ellos en conflictos ajenos puede dañar la imagen y la reputación internacional de un país, además de ser una forma involuntaria de exportación de violencia y criminalidad.

El mercenarismo debe prohibirse y se deben establecer mecanismos internacionales efectivos que controlen, persigan y castiguen a las empresas militares y de seguridad privada que reclutan personas e intervienen de manera poco transparente a lo largo de todo el planeta.

Aplaudimos el esfuerzo de Colombia, y esperamos que inspire a otros países como Chile, donde algunos diputados nos comentaron en off the record que no hay iniciativas ni proyectos en ese sentido. Esto nos preocupa, y nos preocupa de verdad, porque vemos cómo la inseguridad se hace parte de nuestra sociedad, y curiosamente hace un año fuimos testigos, a través de los informativos de TV, del actuar de un grupo de choque paramilitar, con armamento sofisticado, chalecos antibalas y uniformes, secuestrando a un ex militar venezolano desde un edificio de Santiago, para posteriormente asesinarlo y hacerlo desaparecer. No cualquiera tiene la capacidad de realizar una operación militar de esa envergadura. El secuestro del coronel venezolano fue estudiado y planificado con mucha antelación y podríamos pensar que los que actuaron, podrían entrar perfectamente en el perfil de mercenarios ahora convertidos en delincuentes.

El compromiso con la paz y la legalidad no puede encenderse y apagarse a conveniencia

A pesar de la falta de regulación y de los problemas éticos y políticos que comporta, el mercado de las empresas militares y de seguridad privada continúa creciendo viento en popa, con grandes beneficios económicos para las compañías, que obtienen mucha de su mano de obra desde África y Latinoamérica, mano de obra, mejor dicho, carne de cañón. Sí, porque en

general, las posiciones especializadas son cubiertas por expertos de los ejércitos oficiales, y al frente de batalla, van, más o menos preparados los pseudo-soldados, que por unos cuantos dólares arriesgan sus vidas en conflictos lejanos, muy lejanos.

Según el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad (DCAF), se calcula que actualmente existen más de 450 compañías militares privadas que operan en más de 50 países, empleando a 5 millones de personas en África, 2,5 millones en América Latina y el Caribe y a 2 millones en Europa, aunque es difícil estimar un número exacto ya que existen muchos operadores que actúan en zonas grises o negras del mercado. Económicamente, el valor de este negocio asciende conservadoramente a unos 244.000 millones de dólares.

Los cuatro países que encabezan esta “industria”, con aproximadamente el 70% del mercado son Estados Unidos, Reino Unido, China y Sudáfrica, lógicamente en Estados Unidos se concentran las mayores EMSP siendo también un importante cliente de ellas.

¿Y dónde está el problema?

La participación de este tipo de empresas en conflictos armados no es nueva ni novedosa, aunque por muchos años haya pasado desapercibida a la opinión pública. Las guerras de Irak y Afganistán fueron el punto de inflexión para su crecimiento acelerado. Miles de soldados privados fueron contratados por Estados Unidos para “apoyar” sus operaciones militares.

El problema está en lo que se ha denominado “privatización” de la guerra, las EMSP están asumiendo cada vez más roles y funciones en los conflictos en desmedro de la soberanía de los Estados y su monopolio sobre el uso de la fuerza, con contratistas, que en demasiadas ocasiones han demostrado falta de ética y respeto hacia los derechos humanos.

Dentro de las actividades oficialmente declaradas por estas compañías se encuentran, por ejemplo, apoyo logístico, mantenimiento del armamento y los sistemas de defensa, inteligencia, desminado y limpieza de Elementos Explosivos Sin Detonar (UXO's), asesorías y consultorías en áreas tan diversas como reconstrucción, estabilización, reorganización de fuerzas armadas y policiales, entrenamiento en capacidades específicas y quizás las más polémicas, la seguridad para la protección de instalaciones y personas y la participación en combates.

Y quiénes son los contratistas que llevan a cabo estas funciones, en general, las EMSP utilizan una fuerza de trabajo flexible que seleccionan de acuerdo a sus habilidades. Muchos son ex militares, en ocasiones de grupos especiales, con experiencia en temas de seguridad, amantes de las armas y la disciplina militar.

Como ejemplo, según un artículo publicado por Izquierda Revolucionaria durante la guerra de Irak había 122 ex militares chilenos “que sirvieron a las órdenes de Pinochet, los reclutaron a través de un anuncio aparecido en el periódico chileno El Mercurio (12/10/03) en el que se invitaba a ex-militares, preferentemente con experiencia en instrucción de comandos y dominio del inglés, para prestar sus servicios de seguridad en el exterior cobrando 18.000 dólares por seis meses de trabajo, al anuncio respondieron 400 infantes de marina y antiguos “boinas negras” (fuerzas especiales del ejército chileno). Estos mercenarios fueron contratados por una de las principales empresas del sector, Blackwater Security, filial de Halliburton (vinculada al vicepresidente estadounidense Cheney)”.

Mucho más allá de lo legal

No son tantos los casos conocidos públicamente – pero son suficientes para preocuparnos – en que estas empresas y sus contratistas civiles, han estado envueltos en escándalos y excesos, con altos costos de vidas en las más diversas latitudes del planeta, violando el derecho internacional humanitario.

El 16 de septiembre de 2007, personal de la empresa estadounidense Blackwater Worldwide (actualmente Academi) utilizó armas de fuego mientras escoltaba un convoy en Bagdad, lo que terminó con la muerte de 17 civiles y 24 heridos iraquíes. Las investigaciones concluyeron que abrieron fuego injustificadamente contra civiles desarmados, sin embargo, a pesar de que 5 contratistas fueron procesados, en 2009 todo quedó en nada.

En noviembre de 2024, un jurado federal ordenó a la empresa CACI Premier Technology pagar 42 millones de dólares por daños y perjuicios a tres hombres iraquíes que fueron torturados en la cárcel de Abu Ghraib. Sentencia que llegó después de 16 años.

En su informe de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, se señalaba que “Para el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, resulta evidente que el reclutamiento, el adiestramiento, la financiación y la utilización de mercenarios y agentes afines sigue siendo un problema sistémico creciente que atraviesa regiones, países concretos y múltiples conflictos armados. El Grupo de Trabajo ha advertido en repetidas ocasiones que la utilización de mercenarios y agentes afines prolonga los conflictos armados, socava los procesos de paz, desestabiliza las regiones y, lo que es más preocupante, acarrea y agrava la comisión de violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población civil. El grado de utilización de esos agentes y las atrocidades que cometen en todo el mundo han llegado a cotas nunca antes vistas”.

En ese marco no parece imposible que miembros de estas organizaciones puedan estar interviniendo en cualquier lugar del mundo para su propio beneficio o de un tercero sin ningún tipo de control. ¿Quién podría asegurar que no han intervenido en operaciones de gran envergadura, que podrían incluso desestabilizar un gobierno, como el secuestro de Ronald Ojeda en nuestro País?

Grandes problemas, pequeñas soluciones

La problemática ligada a este mercado de guerra alternativo tiene muchas facetas, sólo señalamos dos: la falta de mecanismos de control y regulación de sus actividades; la segunda, el capital humano ocupado ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿Quién se hace cargo de ellos y sus acciones durante y finalizados sus contratos?

El Documento de Montreux (finalizado en 2008, apoyado actualmente por 59 Estados y 3 Organizaciones Internacionales), busca proporcionar un plan para que los gobiernos regulen efectivamente las EMSP, destaca las responsabilidades de los Estados y reafirma las obligaciones existentes en virtud del derecho internacional y en particular, el derecho internacional humanitario (DIH) aunque no es un tratado legalmente vinculante.

Aunque han surgido a lo largo de los años varias iniciativas que intentan regular este mercado, todas con muy buenas intenciones, en la práctica tienen poca eficiencia. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, creado por la ONU en 2005, tiene jurisdicción para monitorear las actividades de las EMSP para asegurarse de que respeten los derechos humanos, pero no tiene autoridad para imponer a los Estados sus recomendaciones.

En 2012, el Departamento de Seguridad y Vigilancia de la ONU emitió el Sistema de Gestión de Seguridad para acompañar a las directrices sobre el uso de los servicios de seguridad; en 2017 el Parlamento Europeo aprobó un informe que insta a regular las EMSP y recomienda únicamente la contratación de EMSP establecidas en la UE para evitar paraísos contractuales.

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en una suerte de imán para los combatientes extranjeros de numerosos países. En el caso de Ucrania, algunos de los mercenarios provienen incluso de varios países latinoamericanos como Argentina, México, Ecuador y mayoritariamente Colombia. De hecho, el Presidente Volodymyr Zelensky dijo, a principios del año

pasado, que unas 20.000 personas, de 52 países del mundo, llegarían a luchar a Ucrania.

A mediados del 2022, después de que Kiev formará su Legión Internacional de Defensa, ya se habían unido 20.000 “voluntarios”, según el gobierno ucraniano, número que se ha reducido a un estimado de 2.000 a 3.000 personas, lo que a juicio de los expertos es un número muy menor para hacer una diferencia en la guerra. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones que en el territorio ucraniano se registran contratistas de más de 80 países, esto pese a que las leyes de una gran cantidad de Estados prohíben la actividad mercenaria.

¿Qué sucederá con esos combatientes cuando termine la guerra o sus contratos? La respuesta no es fácil, muchos de ellos ofrecen sus servicios por las expectativas de buenos sueldos y otros beneficios. Sin embargo, la realidad choca con las expectativas. En el caso de Ucrania, después de viajar miles de kilómetros, muchos han quedado varados a la espera de ser reclutados y combatir en el frente; algunos se encuentran desaparecidos y muchos ven desvanecerse los sueños de poder radicarse en Europa finalizado el conflicto.

Los ex militares de Pinochet

¿Y cuál es la realidad chilena? Para hacernos una idea, veamos sólo 1 caso. En octubre de 2003, el diario La Tercera publicaba un aviso de la empresa Red Táctica, con sede en Washington DC, en el que se buscaban ex oficiales “preferentemente de fuerzas especiales, con salud compatible y con dominio del inglés”. La empresa explicó más tarde que la búsqueda era para tareas de consultoría portuaria. Sin embargo, el presidente de Blackwater, Gary Jackson, decía otra cosa en el diario británico The Guardian: “Vamos hasta el fin del mundo en busca de profesionales y los comandos chilenos son muy profesionales y se ajustan al sistema de Blackwater”.

El sistema de Blackwater es simple: contratan soldados retirados en el tercer mundo, los entrenan muchas veces en sus mismos países – a veces incluso con ayuda de las fuerzas armadas locales– y los colocan como agentes de seguridad privada en lugares de alto riesgo, como embajadas o bases militares extranjeras en Irak.

En Chile, este esquema de reclutamiento se descubrió por primera vez en 2003, cuando un centenar de oficiales retirados fueron reclutados para hacer tareas de vigilancia en Irak y Afganistán. Según denuncias que la Justicia Militar investigó, fueron entrenados en el país con armamento liviano que habrían entregado militares en actividad. El reclutamiento de mercenarios volvió a aparecer en los titulares a fines de 2005, cuando 105 militares retirados chilenos fueron expulsados de Honduras, donde entrenaban junto a otros latinoamericanos antes de viajar a Medio Oriente. Los ex oficiales fueron repatriados a Santiago.

Según las cifras que se manejaban durante la invasión a Irak, unos 1000 ex soldados chilenos habrían trabajado como seguridad privada. Para el ex senador Alejandro Navarro, uno de los primeros en hacer pública la existencia de “mercenarios chilenos”, el número era mucho mayor.

En un artículo de 2007 de Página12 señalaba que “Nuestros informes sostienen que alrededor de 2.200 han viajado a Irak y han vuelto a Chile desde la invasión”. Sus fuentes eran “familiares de los ex militares contratados e incluso los mismos mercenarios, que de vuelta en Chile se quejan de malos tratos y de no haber recibido los sueldos prometidos”.

Tanto los informes de Navarro como los de la ONU se centraron en la empresa Red Táctica y en la figura de su presidente, José Miguel Pizarro, un ex teniente de artillería del ejército chileno que en 1995 decidió dejar la institución y mudarse a Estados Unidos. Allí no cambió mucho sus hábitos. Ingresó en el cuerpo de infantería de la Marina y más tarde volvió a colgar el uniforme para convertirse en un consultor. En su currículum también se destacan sus apariciones esporádicas como analista en la cadena CNN, que lo presenta como un “experto en conflictos bélicos”. Su encargado de rela-

ciones comerciales en Santiago, Herman Brady, es el hijo de un ex ministro de Defensa de la dictadura de Augusto Pinochet.

Pizarro fue declarado culpable de infringir la Ley de Vigilantes Privados en 2011 por la Corte Suprema de Chile. Pero seguramente la historia no ha terminado allí.

* Félix Madariaga Leiva, es periodista titulado en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (Arcis). Es editor y fundador del www.elindoamericano.cl. Tiene un Diplomado en Comunicación y Derechos Humanos impartido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, año 2023, y un Curso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y sus mecanismos desde un enfoque en materia de memoria, verdad y justicia realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), año 2024. Es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y de la Corporación de 3 y 4 Álamos.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte - OTAN

*Por Hervi Lara Bravo**

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) surgió en 1949 tras la firma del Tratado de Washington. Sus primeros integrantes fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal y Reino Unido. Fijó su sede en París y luego en Bruselas en medio de la intensificación de la Guerra Fría. Su objetivo inicial fue descrito como la protección de los países de Europa occidental de la amenaza de la URSS y así contrarrestar la expansión del comunismo tras la Segunda Guerra Mundial. La OTAN fue concebida como una fuerza disuasoria, a la que fueron sumándose nuevos países, traducándose en una alianza entre Europa y EEUU en torno a consultas y cooperación en la defensa y seguridad.

En tal sentido se han realizado conjuntamente operaciones multinacionales de gestión de crisis. Como consecuencia, en los hechos, la OTAN ha provocado la militarización y la nuclearización de Europa, tras la devastación del Viejo Continente, en la Segunda Guerra Mundial, donde los daños fueron sufridos en la agricultura, la industria, las comunicaciones y la muerte de entre 50 y 55 millones de personas.

Para impedir una nueva agresión de parte de Alemania, en febrero de 1945, se reunieron, en Yalta, Roosevelt, Stalin y Churchill. Allí establecieron los medios para poner fin a la guerra y las condiciones de sometimiento de Alemania, dividiéndola en áreas de influencia y de ocupación. Así se instauró un nuevo mapa internacional delimitado en dos áreas de influencia

política: la de EEUU y la URSS. Fue ésta la definición del futuro geoestratégico del mundo.

Estados Unidos no sufrió pérdidas por la guerra. Al contrario: el conflicto le permitió la modernización de la industria, transformándose en primera potencia mundial, especialmente en el ámbito militar al tener posesión de la bomba atómica. Por tanto, EEUU se propuso reconstruir Europa para rehacer allí su mercado y, además, neutralizar el poder de la URSS.

El 5 de enero de 1947, el general Marshall hizo pública la petición de ayuda para la reconstrucción de Europa. Pero omitió el objetivo oculto: el crecimiento económico de EEUU para convertir al país en primera potencia mundial frente al fantasma del comunismo.

Simultáneamente, Harry Truman difundió los problemas fronterizos de Turquía y la URSS, la guerra civil entre las guerrillas comunistas y la monarquía conservadora en Grecia, además del auge de los partidos comunistas de Francia e Italia.

Fue así como el 17 de marzo de 1947 se planteó la “Doctrina Truman”: “Regímenes totalitarios impuestos, directa o indirectamente, a pueblos libres a través de agresiones socavan los fundamentos de la paz internacional y, además, la seguridad de EEUU”. (...) Por tanto, EEUU debe “ayudar a los pueblos libres que resisten las tentativas y las presiones por parte de minorías armadas o presiones externas”.

De esta manera se estableció la base de la Guerra Fría dado que, ya en marzo de 1946, Winston Churchill había anunciado la división de Europa mediante un “telón de acero”. No obstante, la URSS había sido la vencedora de la guerra al frenar a las tropas alemanas; el ejército soviético reconquistó Europa del Este y Europa Central, siendo el primer ejército en llegar a Berlín; la URSS sufrió las mayores pérdidas de la guerra (26 millones de muertos).

El 17 de marzo de 1948 se estableció el Tratado de Bruselas. Fue un tratado de cooperación política, económica, social y de ayuda ante posibles agresiones militares (sin mencionarse al eventual enemigo).

Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Luxemburgo pidieron la ayuda ofrecida por Truman, quien accedió “en defensa de la democracia”.

En abril se creó la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que canalizó 17.000 millones de dólares para la reconstrucción de Europa. Paralelamente, EEUU impuso el Pacto de Río a los Estados de América Latina; el Pacto de Bagdad al Cercano Oriente; y el SEATO al Sudeste Asiático.

El 19 de mayo de 1948, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de EEUU declaró la imposibilidad de mantener una política de paz a través de la ONU debido al obstruccionismo de la URSS al usar el veto en el Consejo de Seguridad. En consecuencia, estableció “la determinación de EEUU de ejercer el derecho de legítima defensa individual y colectiva en caso de que se efectúe un ataque que afecte la seguridad nacional”. Luego, en julio de 1948, Truman inició negociaciones con Canadá y con el Pacto de Bruselas, lo que culminó el 4 de abril de 1949, en Washington, con la firma del Tratado del Atlántico Norte.

En el mismo año de 1949, la URSS explotó su primera bomba nuclear, lo que dio inicio a la carrera armamentista. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte (con apoyo de la URSS y de China) atacó a Corea del Sur (apoyada por EEUU). Más tarde, la ONU estableció el paralelo 38 como frontera entre las dos Coreas.

En este marco, entre 1950 y 1951, el Pacto Atlántico creó un órgano para la defensa occidental como organización militar permanente: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a cargo de la defensa militar de Europa.

El 19 de diciembre de 1950, el general D. Eisenhower fue nombrado comandante supremo, diseñando la militarización de Europa con bases estratégicamente repartidas y con 300 mil soldados, cuya mayor parte fueron instalados en Alemania Federal. Esta organización militar significaba una descalificación de la ONU, considerada incapaz de resguardar la paz.

En 1955, Alemania ingresó a la OTAN, lo que provocó la reacción de la URSS con la creación de un bloque militar comunista: el Pacto de Varsovia (14-5-55), compuesto por la URSS, Polonia, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, Albania, Bulgaria y República Democrática Alemana. Así se abrió una etapa de paz sobre el principio de disuasión nuclear y la carrera de armamentos.

La OTAN se ha planteado con carácter subsidiario en relación a la ONU. Su función se ha extendido a todos los grandes problemas de la política internacional (económicos, sociales y culturales). Su existencia se ha “basado en los principios de democracia, libertad individual y el imperio del Derecho”. Esto se ha interpretado en proporcionar seguridad a los sistemas sociales basados en el capitalismo y con la primacía de EEUU, lo que en la realidad ha significado la pérdida de la soberanía de los países integrantes de la entidad. El fin de la URSS podría haber constituido la desaparición de la causa fundamental de la OTAN. No obstante, ésta ha continuado como la innegable expresión de ser el “brazo armado” del capitalismo occidental.

Es así como su concepto estratégico define a Rusia como “la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados, para la paz y la seguridad en la zona euroatlántica”. (...) “La asociación estratégica entre Rusia y China y sus intentos de socavar las reglas en las que se basa el orden internacional van en contra de nuestros valores e intereses”. En este sentido, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció que la OTAN “se fortalecería en todas las direcciones, en todos los dominios: tierra, aire y mar”. En el 2022, la OTAN tenía 40 mil soldados en preparación.

En 2023, el número se elevó a 300 mil. Más de la mitad del gasto militar mundial corresponde a la OTAN, de lo que el 67% de inversiones es en armas nucleares. EEUU, Francia y Reino Unido reúne 6 mil armas nucleares. Entre Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía hay más de 150 bombas de gravedad termonuclear. Sólo en el siglo XXI, las intervenciones militares de la OTAN (encabezadas por EEUU) han dejado más de 350 mil civiles muertos y 38 millones de desplazados. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las acciones de OTAN han causado 4 millones 500 mil

mueren en forma violenta como consecuencia de las guerras. “Las personas que viven en zonas de guerras han sido asesinadas en sus hogares, en los mercados y en las carreteras. Han muerto a causa de bombas, balas, fuego, artefactos explosivos improvisados y drones”.

También “mueren en los puestos de control, cuando son sacados de la carretera por vehículos militares, cuando pisan minas o bombas de racimo, cuando recogen leña o cuidan sus campos, y cuando son secuestrados y ejecutados con fines de venganza o intimidación”. (...) “Son asesinados por USA, por sus aliados y por los insurgentes y sectarios en las guerras civiles engendradas por las invasiones”. (...) “La guerra también puede llevar a la muerte semanas o meses después de la batalla, infraestructuras maltrechas y las malas condiciones derivadas de las guerras tanto como directamente de su violencia”).

La OTAN se autodefine en “defensa de la libertad de los pueblos contra gobiernos autoritarios”. Pero donde ha intervenido en supuesta defensa de la paz, ha dejado miles de muertos y profundas crisis sociales. Y sus intervenciones han sido ostensiblemente en cuidar los intereses de las potencias imperialistas. “La OTAN ni rinde cuentas ni repara daños en casos de operaciones como las realizadas en Libia. Nadie ha hecho ninguna investigación, mucho menos independiente, sobre cuánto sufrimiento han costado esas intervenciones”. (2) Afganistán: 46.319 civiles asesinados. Irak: 185.000 asesinados que no eran combatientes. Siria: 95.000 civiles asesinados. Pakistán: 24.099 civiles asesinados. Libia: “Decenas de civiles murieron en ataques aéreos de OTAN contra viviendas particulares de zonas residenciales y rurales”. OTAN admitió haber matado a civiles a raíz de una “falla técnica”, “en una campaña militar aérea y marítima de siete meses, con 9.700 misiones de combate y destruyeron 5.900 objetivos militares, según OTAN”.

En 1999, se produjo la disputa entre Serbia y rebeldes albaneses que reclamaban autonomía en la región. OTAN intervino en favor de los albaneses, no para que se independizaran, sino para instalar un gobierno pro USA y UE y así poner límites a Rusia en su antigua zona de influencia. Con 600

aviones de 13 países bombardearon Kosovo, Serbia y Montenegro, dejando 1.500 civiles asesinados y una crisis ambiental producto de bombas de racimo. En 2008, Kosovo pasó a estar bajo la dependencia de la ONU y de los países de la OTAN, siendo convertida en base militar para controlar la zona de los Balcanes y el resto de Europa del Este. En 2001 se produjo el atentado a las Torres Gemelas. Bush inició la “guerra contra el terrorismo”. Las tropas de EEUU y de la OTAN invadieron y ocuparon Afganistán bajo la excusa de que allí se refugiaba Bin Laden, jefe de la organización que provocó el atentado. Pero más bien se trataba de su ubicación geopolítica al permitir controlar a Rusia y a China. Las empresas de los países de la OTAN se repartieron las reservas de petróleo del lugar. La guerra duró décadas. Terminó con la huida de los ejércitos de la OTAN luego que el país quedará en manos del gobierno talibán. Mientras, la población y los gobiernos de los países de la OTAN aumentaron las políticas xenófobas y la discriminación contra los migrantes musulmanes y sus descendientes.

En 2003, EEUU y la OTAN invadieron Irak bajo el argumento de que Saddam Hussein tendría armas de destrucción masiva, lo que nunca fue comprobado. En 2008, en Georgia, la OTAN colaboró con los locales contra los rusos.

En 2011, en Libia, la OTAN pretendió recuperar la ofensiva en la región aprovechando el proceso revolucionario abierto en Medio Oriente y el Norte de África, conocido como “Primavera Árabe”. La OTAN participó activamente y financió a grupos rebeldes con armas y entrenamiento militar. Gadafi fue asesinado por una turba de opositores (11-10-2011). Se abrió una lucha intestina que dividió el poder en dos gobiernos.

La OTAN se excusó mediante la “ayuda humanitaria”, pero hizo negocios y aumentó el control territorial a través de un nuevo gobierno favorable a sus intereses. Libia juega un rol clave geopolítico por las reservas de gas y petróleo y su ubicación estratégica en el control de refugiados que huyen del hambre y de los conflictos del África Subsahariana. Francia e Inglaterra dirigieron operaciones militares y sus grandes empresarios han sido quie-

nes más se han beneficiado con los negocios del petróleo. OTAN provocó un genocidio, además de que millones de personas debieron desplazarse por el hambre. Libia continúa en guerra civil.

Entre 2002 y 2005, la OTAN en complicidad con la CIA desplegaron en Europa una red de cárceles secretas para interrogar a sospechosos de terrorismo, en base a un acuerdo de USA con la Alianza Atlántica en 2001. Los servicios secretos de USA realizaron vuelos clandestinos, detenciones ilegales y torturas. Polonia y Rumania albergaron cárceles con el consentimiento de sus gobiernos.

La OTAN ha negado la existencia de acuerdos secretos y de documentos oficiales alegando haber cumplido una “decisión interna”. El único país europeo que ha admitido implicación en las cárceles secretas ha sido Bosnia Herzegovina. Aviones de la CIA usaron aeropuertos de Canarias y de Baleares para hacer escala. España, Alemania, Chipre y Turquía fueron plataformas de vuelo. Irlanda, Reino Unido, Grecia e Italia fueron usadas como escalas. Aeropuertos de Suecia, Macedonia y Bosnia fueron “puntos de embarque puntual”. El informe del senador suizo Dick Marty (8-6-2007) presentó centros secretos de detención en territorio británico y en Tailandia. Se calculan 1.245 vuelos ilegales entre 2001 y 2005 y 21 ciudadanos europeos sospechosos de terrorismo encarcelados.

La CIA tuvo 30 detenidos en condiciones muy reservadas. 70 detenidos fueron enviados a Afganistán, Marruecos y Egipto. 100 “detenidos fantasmas” fueron secuestrados en territorio europeo. Desde 2001, EEUU ha empleado a 17 buques como prisiones flotantes. En esta operación, la CIA utilizó la técnica del “submarino” y otras cinco “técnicas de interrogatorio mejoradas” contra los detenidos en cárceles secretas. El 6 de septiembre de 2006, Bush admitió la existencia de detenciones en cárceles de la CIA, como “medida para mejorar la seguridad de su país y la de sus aliados”. A los detenidos ilegalmente, EEUU los llamó “combatientes ilegales” sometidos a un proceso de “rendición extraordinaria”. Muchos de los detenidos fueron transferidos a Guantánamo.

Guantánamo es una base militar de EEUU en territorio de Cuba, convertida en una de las cárceles que fueron creadas en todo el mundo en la “guerra contra el terrorismo”. Llegó a albergar a 700 reos, en su mayoría musulmanes. Hasta el 2022, en América Latina la OTAN y EEUU habían establecido 12 bases militares en Panamá; 12 en Puerto Rico; 9 en Colombia; 8 en Perú; 2 en Honduras; 2 en Paraguay. Se suman instalaciones militares en Aruba, Costa Rica, El Salvador, Guantánamo y Perú. Hay instalaciones marítimas en las Islas Malvinas, territorio británico. Las bases en las islas Ascensión, Santa Elena y Tristán de Acuña “resguardan” el Atlántico desde el norte hasta la zona antártica.

Al sur de Malvinas operan submarinos nucleares. En esta región, Francia e Inglaterra organizan regularmente maniobras militares conjuntas. En 2018, Colombia se convirtió en “socio global de la OTAN” en los ámbitos de ciberseguridad, seguridad humana, seguridad marítima, la lucha contra el terrorismo y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas colombianas a través de cursos de desminado, contrainsurgencia y antinarcóticos.

Es así como Biden ha declarado a Colombia como “aliado importante de la OTAN”, sumándose a esta misma condición de Argentina (desde 1998) y Brasil (desde 2019). En octubre de 2021, la generala Laura Richardson asumió el mando del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, con un manifiesto incremento de los niveles de agresividad injerencista en el “patio trasero”.

El reiterado interés de Richardson se debe a la cercanía de la Antártica; el Amazonas como principal reserva de oxígeno y biodiversidad del planeta; y la Triple Frontera, que posee el acuífero guaraní, el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Richardson ha reinstalado la guerra fría en la región, ahora contra Rusia y China. A China la ha denominado “actor estatal maligno”, puesto que 21 de los 31 países de la región han adherido a la iniciativa china de la Ruta y se ha incrementado la inversión de China en infraestructuras críticas, como puertos de aguas profundas, la investigación espacial y las telecomunicaciones con redes 5 G y la empresa Huawei. En esta situa-

ción, EEUU se está presentando como “protector” de la región, enfatizando la unidad entre todos contra la delincuencia organizada dedicada a la trata de personas, el contrabando de drogas, la tala no reglamentada y la minería ilegal, “porque es una región rica en recursos y tierras raras, con el llamado Triángulo del Litio que posee el 60% de las reservas mundiales (Argentina, Bolivia y Chile) un metal muy necesario para la tecnología”.

A este proceso, EEUU lo denomina “estrategia de disuasión integrada” y se traduce en el interés por el petróleo de Guayana y de Venezuela, el cobre y el oro, el oxígeno y el 31% del agua dulce de la tierra en el Amazonas. Por tanto, la misión del Comando Sur es mantener a América Latina alejada de China, ya que hoy es el principal socio comercial de varios países de la región. “Todas las capacidades tanto civiles como militares, de gobiernos, empresas, sociedad civil y academia de EEUU y de todos sus aliados” deben agruparse bajo la conducción del Pentágono y de la OTAN, que es manejada por EEUU.

La expansión de la OTAN hacia el este de Europa, entre otros aspectos, ha significado la instalación de un nuevo cuartel en Polonia; tropas terrestres a Rumania; en la Cumbre de OTAN en Madrid (2022) participaron por primera vez Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Otras muestras son el Tratado AUKUS entre Australia, Reino Unido y USA; el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral entre Australia, India, Japón y USA; la Alianza de Inteligencia de los 5 Ojos, entre EEUU, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Esta expansión ha desembocado en la guerra de Ucrania aún en curso que, para la población ucraniana ha significado un masivo éxodo; el riesgo de cantidades de municiones sin detonar; la degradación medioambiental; problemas de salud mental; la destrucción de viviendas y de sistemas de alcantarillados y otras infraestructuras vitales para la salud pública. Lo más grave es el riesgo de uso de armas nucleares.

Todo esto, provocado por la OTAN, finalizará con negocios multimillonarios, el aumento de los poderes militares y las penurias y tragedias para millones de personas.

El 4 de abril de 2024 la OTAN conmemoró en Bruselas sus 75 años de existencia y de “crisis existencial”, dado que el mando lo maneja EEUU. Europa aparece como subordinada. Pero la OTAN siempre ha sabido adaptarse y ha sobrevivido. Ahora ha diseñado un plan para mantener a largo plazo su respaldo a Ucrania, tarea que hasta ahora han asumido sus miembros en forma separada. Se ha planteado el incremento del presupuesto 2024 y exigencias de mayor gasto en defensa nacional. Se ha enfatizado la unidad transatlántica: “Juntos somos más fuertes y estamos más seguros. Europa necesita a EEUU para su seguridad. EEUU también precisa de Europa porque aporta “una vasta red de inteligencia y una influencia diplomática única, que amplifica el poderío estadounidense”. En su discurso oficial, Stoltenberg, máximo ejecutivo de OTAN, ha impulsado la creación de un fondo de 100.000 millones de dólares para garantizar el apoyo a Ucrania. Además, se han unido a OTAN dos países tradicionalmente pacíficos y, al parecer, claves por su ubicación geoestratégica: Suecia y Finlandia.

Por todo lo antes descrito, pareciera que la ética no tiene cabida en el mundo sometido al poder económico y al que la OTAN abre caminos. La ética es la defensa de todo lo que hay de humano en cualquier sistema. Este debe adecuarse a las necesidades de la persona humana y no la persona sacrificarse en aras del sistema. La OTAN va tras el dinero para las grandes multinacionales. El dinero es el mayor enemigo de un mundo digno, justo y solidario que postula el Evangelio de Jesús. Dios y quienes se consideran sus discípulos no puede reinar en el mundo sin reclamar paz, que es fruto de la justicia, para quienes son excluidos de una vida digna. En el capitalismo, el dinero que proporciona poder se ha convertido en dueño de las personas y se ha transformado en un dios. Las armas son el medio para idolatrizar el capital. La sed insaciable de poder y la acumulación de riqueza se muestra como el sentido último de la vida. Se valora a las personas en tanto más poder económico posean.

Desde la ética cristiana, el dinero es un medio para crear condiciones de vida digna para todos y para mantener vivo el planeta. La persona no está hecha para un sistema económico que exige aniquilar a otros. El capitalismo

cuenta con los que buscan la seguridad y felicidad del dinero que da poder a través de la guerra, ignorando la miseria y el dolor de otros que quieren hacer un mundo más justo. “Cuando tantos pueblos tienen hambre, cuando tantos hogares sufren la miseria, cuando tantos hombres viven sumergidos en la ignorancia, cuando aún quedan por construir tantas escuelas, hospitales, viviendas dignas de este nombre, todo derroche público o privado, todo gasto de ostentación nacional o personal, Toda carrera de armamentos se convierte en un escándalo intolerable, que nos vemos obligados a denunciarlo. Quieran los responsables oírnos antes de que sea demasiado tarde”.

El poder no es sólo mando y acatamiento. Mayor inconsistencia ética posee el poder armado, porque inhibe; no expande la vida; oculta el desorden de la verdad atropellada, de los derechos conculcados, de los espíritus amedrentados o sugestionados. La injusticia (y la guerra es esencialmente injusta) atenta contra la dignidad, que es la más profunda referencia a la calidad humana que tiene la persona. OTAN es expresión de la dictadura del dinero, concentrado en los grandes consorcios económicos multinacionales que manejan el mundo unilateralmente y consideran a las personas como cosas. En cambio, lo fundamental del cristianismo es la defensa del débil. El derecho nació para ello. “Jesús vive defendiendo a los pobres, bendice a los niños e impone sus manos sobre los enfermos. Son gestos que expresan su deseo de envolver a los indefensos con la fuerza protectora del Espíritu de Dios. Ese Espíritu conduce a Jesús a solidarizarse con los últimos, nunca con los intereses de los primeros. Los poderosos están creando una barrera cada vez mayor entre ellos y los débiles: son el gran obstáculo que impide una convivencia más justa y digna en el mundo. La riqueza de los poderosos no es signo de la bendición de Dios, pues está creciendo a costa del sufrimiento y de la muerte de los más débiles”.

La OTAN es diametralmente opuesta al mensaje del Evangelio y a toda racionalidad. La convivencia humana no puede lograrse en el miedo impuesto por la violencia, las armas, las guerras. La vida del planeta sólo es posible cuando se afirma en un ordenamiento jurídico. Y éste se basa en valores. Los valores presuponen una ética que tiene como efecto un

acuerdo de comportamientos y acciones fundados en la convicción de que todos poseemos valores y una dignidad inalienables. Esto se traduce en la fraternidad y solidaridad humanas: todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Esto puede alcanzarse con todos los seres humanos sin exclusiones. La guerra, el militarismo, el armamentismo, la destrucción del planeta y de la vida en general son falsos y nocivos. De esto se infiere que hay una estrecha conexión entre ética, derechos humanos y paz en el mundo.

Las ideologías fascistas afirman que “la vida es guerra, la paz es la muerte. El neoliberalismo incluye en esta guerra todo enfrentamiento mercantil. El mercado mismo aparece como ámbito de guerra. Eso significa que en relación a los resultados de la lucha de mercados, no hay derechos humanos. Hay sólo un derecho humano, que es el derecho a vivir en economías de mercado. Y este derecho es el derecho de vivir la guerra, sea guerra de mercados o no”.

La OTAN es la manifestación más patente de la idolatría del dinero obtenido mediante la guerra, el robo y la explotación de pueblos y del mundo entero, bajo la apariencia de defensa de la libertad y de la democracia. No se debe sacrificar la vida y la dignidad de los indefensos ante ningún poder político, financiero, económico o militar. En estos momentos, usando a organismos como la OTAN, el sistema financiero sacrifica más vidas y causa más sufrimientos, hambre y destrucción humana que cualquier otro poder. Es indispensable contraponer que el mundo debe ser apreciado y no explotado; que la persona humana es un fin y no un medio; que el saber es más importante que la riqueza; que la justicia expresada como la igualdad de todos es la base de todos los valores.

Para el humanismo, especialmente para el humanismo cristiano, en medio de una cultura necrófila impuesta por el poder económico y su “brazo armado” como lo es la OTAN, es prioritario desarrollar “una cultura mundial sustentada por una ética universal que rija las relaciones de las naciones entre sí y con la creación”. Se trata de valores éticos comunes que

trasciendan las creencias religiosas y los intereses nacionales, los cuales podrían comprenderse sobre la base de sustentación de los derechos humanos: crear una cultura de no violencia activa, atacando las causas y los síntomas de la violencia y de la guerra. Los derechos humanos deben pasar de una fase reactiva, en la que se defienden los derechos de las personas cuyos derechos son vulnerados, a una fase de iniciativa y proyección. Esto permitiría la creación de una cultura de derechos humanos que permita administrar el poder de manera constructiva y responsable.

La ética cristiana ha nacido de la espiritualidad de Jesús, para quien lo primero y lo más importante es que todos gocen de una vida digna y justa: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Noticia, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos”. (Lc. 4, 18-19). El centro de la espiritualidad cristiana es unir a Dios y su proyecto de transformar el mundo, lo que significa buscar el Reino de Dios y su justicia, promoviendo una vida liberada, sana, dichosa. Es la antítesis de lo que representa la OTAN, que se autodefine como poderosa, duradera y exitosa.

* Hervi Lara Bravo, ha sido profesor de Ética y Filosofía, ex Presidente de Amnistía Internacional, sección chilena. También participó en la Comisión Ética Contra la Tortura. Actualmente, participa del Comité Oscar Romero (SICAL-Chile) y del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile. Es conductor del programa de actualidad y derechos humanos “Que el Pueblo Viva”.

El pueblo quiere paz y progreso, no guerra y derroche

*Por Vijay Prashad**

Mientras el secretario de la OTAN insta a adoptar una “mentalidad de guerra”, queda claro que esta alianza agresiva amenaza a la paz global.

Los días 24 y 25 de junio del 2025, los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desfilarán por las calles de La Haya para su cumbre anual, la primera desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. y la primera bajo el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El 13 de marzo, Rutte visitó a Trump en el Despacho Oval, donde elogió al presidente estadounidense en varios frentes, incluida la guerra en Ucrania. Terminó la reunión diciéndole a Trump que esperaba recibirlo en La Haya, su “ciudad natal”, y que estaba ansioso por “trabajar juntos para garantizar que [la cumbre de la OTAN] sea un éxito rotundo, proyectando el poder estadounidense en el escenario mundial”.

La OTAN tiene 32 miembros plenos, 30 de Europa y dos de América del Norte. Estados Unidos es sólo uno entre ellos, pero, como dejó claro Rutte en su declaración, es el que define la organización y la convierte en un vehículo de proyección del poder estadounidense. No debe haber duda sobre esto. Por esa misma razón, la idea de que Estados Unidos pueda retirarse de la OTAN, como Trump amenazó hacer si Europa no aumentaba su gasto militar, carece de sentido. Estados Unidos es la OTAN.

En junio, desde el Instituto Tricontinental de Investigación Social y en colaboración con el colectivo Basta de Guerra Fría y nuestras organizaciones aliadas en Europa del Foro Zetkin de Investigación Social, publicamos el dossier La OTAN: La organización más peligrosa de la Tierra.

El título es audaz, pero no hiperbólico. Refleja los hechos que tenemos ante nosotros. Desde la caída de la Unión Soviética, la OTAN ha librado algunas de las guerras más letales del planeta y ahora nos amenaza con la impensable posibilidad de un conflicto nuclear. El dossier presenta abundante evidencia de ello. Aquí, simplemente señalamos dos de los actos más flagrantes de la alianza en las últimas décadas:

Fue la OTAN la que desmembró Yugoslavia en 1999.

Fue la OTAN la que destruyó el Estado libio en 2011.

Es un error ver a la OTAN como un actor autónomo. Como expresó con elocuencia Rutte, la OTAN es un instrumento para “proyectar el poder estadounidense en el escenario mundial”.

Desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha usado la alianza atlántica para incorporar a Europa del Este como un conjunto de países subordinados a sus intereses. Cuando la Unión Europea se expandió hacia el Este y trató de construir instituciones europeas autónomas, la OTAN se encargó de asegurar que Estados Unidos fuera el motor de cualquier expansión europea.

Se podría entender que muchos hayan olvidado la advertencia, que no provino del actual presidente ruso, Vladímir Putin, sino de su predecesor, decididamente proestadounidense, Borís Yeltsin, quien advirtió durante el bombardeo de la OTAN a los serbobosnios en 1995: “esto es la primera señal de lo que podría ocurrir cuando la OTAN llegue hasta las fronteras de la Federación Rusa. [...] El juego de la guerra podría estallar en toda Europa”.

En 1990, la Unión Soviética accedió con reticencia a la reunificación de Alemania y su entrada en la alianza atlántica, bajo la promesa de que ésta no

se expandiría hacia el Este (además, EEUU usó ese movimiento para “mantener a los alemanes a raya” anclándolos en las estructuras de la OTAN). Pero no hubo acuerdo que permitiera a Estados Unidos usar a la alianza atlántica para proyectar su poder hasta las fronteras rusas.

Tampoco hubo ningún mandato para que la OTAN interviniera en escenarios lejanos como el mar de China Meridional, para confrontar a la República Popular China bajo el pretexto de la libertad de navegación y la estabilidad regional.

La OTAN, en contra del interés propio de sus Estados miembros europeos, ha sido arrastrada a confrontaciones con Rusia y China que responden por completo al deseo de Estados Unidos de encadenar a sus “rivales cercanos”. Estas confrontaciones no tienen nada que ver con la seguridad europea: ni Rusia ni China han amenazado a Europa. Rusia ha reiterado en varias ocasiones que su guerra en Ucrania se debe exclusivamente a amenazas en sus fronteras, y China ha enfatizado que es una potencia defensiva sin intenciones agresivas hacia Europa.

Antes que Donald Trump asumiera el cargo en diciembre de 2024, su equipo de transición informó a las autoridades europeas que el presidente electo pediría a los Estados miembros de la OTAN que aumentaran su gasto militar al 5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), cambiando el objetivo del 2% establecido previamente. La mayoría de los países no podrían cumplir con este aumento drástico sin recortes profundos en su gasto social (a finales de 2024, Polonia era el único Estado miembro que gastaba más del 4 % de su PIB en su ejército, exactamente 4.12 %, mientras que Estados Unidos oficialmente destina el 3.38 %).

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, afirmó que, aunque esta exigencia del 5 % no vendría con una fecha límite, “Estados Unidos espera que cada aliado presente planes concretos, presupuestos, cronogramas [y] resultados para alcanzar el objetivo del 5 % y cerrar las brechas de capacidades”.

Desde la fundación de la OTAN en 1949, incluso durante la Guerra Fría, no existía un criterio firme sobre el gasto militar de los Estados miembros (como el porcentaje del PIB). El Acuerdo de Lisboa de 1952 sobre niveles de fuerza de la OTAN, que fijaba objetivos para el número de tropas convencionales y de reserva, simplemente no pudo cumplirse debido a las penurias de la Europa de posguerra.

En los años setenta, los países miembros de la OTAN debían responder un Defence Planning Questionnaire [Cuestionario de Planificación de la Defensa] para evaluar sus esfuerzos de gasto militar, pero no se establecieron metas.

Durante la presidencia de Ronald Reagan (1981–1989), cuando Estados Unidos destinaba cerca del 6 % de su PIB a defensa, se reabrió el debate sobre los niveles de fuerza y el gasto en defensa, y se pidió a los países europeos que aumentaran su parte hasta el 4 % del PIB.

A principios de los años noventa, con el colapso de la Unión Soviética, Washington temía que los Estados miembros de la OTAN recortaran sus presupuestos militares. En la cumbre de la OTAN en Praga de 2002, los líderes de la alianza adoptaron el Prague Capabilities Commitment [Compromiso de Capacidades de Praga], que reiteraba la necesidad de modernizar las fuerzas en el contexto de la “guerra contra el terrorismo”, pero no establecía una meta formal de gasto.

No fue sino hasta la cumbre de Riga en 2006 cuando la OTAN respaldó oficialmente el objetivo del 2 %, que surgió el primer criterio formal de gasto militar entre los Estados miembros. Aunque la presión aumentó en la cumbre de Gales de 2014 para alcanzar esta meta hasta entonces incumplida, todavía no había un verdadero entusiasmo por ello.

Trump presionó con fuerza durante su primer mandato, sugiriendo que Estados Unidos saldría de la OTAN si Europa no aumentaba su gasto militar. Luego, cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, la meta del 2 % empezó a verse, como dijo entonces el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, “no como un techo, sino como un mínimo, un piso”. De cara a

la cumbre de este año en La Haya, el actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que los miembros de la alianza deben “adoptar una mentalidad de tiempos de guerra y acelerar nuestra producción y gasto en defensa”.

Diversos institutos europeos y plataformas de movimientos sociales ya han comenzado a publicar documentos en preparación para la próxima cumbre de la OTAN. Uno de ellos es el informe anual de los Institutos Alemanes de Investigación para la Paz y los Conflictos (Bonn International Centre for Conflict Studies [Centro Internacional de Bonn para Estudios sobre Conflictos], Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik [Instituto de Investigación para la Paz y Política de Seguridad], Institut für Entwicklung und Frieden [Instituto para el Desarrollo y la Paz], y el Leibniz Institut für Friedens-und Konfliktforschung [Instituto Leibniz para la Investigación sobre Paz y Conflictos]), que sostiene que Europa debe prepararse para una OTAN post estadounidense aumentando su propio gasto militar y avanzar hacia formas no letales de diplomacia, como el control de armas y las medidas para la construcción de paz.

Este es un enfoque ante la crisis de la OTAN, pero presenta dos fallas clave. En primer lugar, malinterpreta el rol de Europa dentro de la OTAN al tratarla como una socia igualitaria, cuando en realidad la alianza es un instrumento para subordinar Europa a los objetivos estratégicos de Estados Unidos. En segundo lugar, incluso si los Estados miembros europeos aumentaran su gasto militar al 5 % del PIB, simplemente no tienen la capacidad para llevar a la práctica toda la propuesta.

La Strategic Defence Review 2025 [Revisión Estratégica de Defensa] del gobierno británico es, en la práctica, una receta para la bancarrota. Reino Unido simplemente no cuenta con los recursos para construir una nueva “armada híbrida” con “alas aéreas híbridas”, ofrecer vivienda a la clase trabajadora o renovar su sistema de salud pública.

Es fácil escribir sobre un enfoque de “toda la sociedad”, pero difícil encontrar el dinero para construir una sociedad agobiada por tantas penurias.

En cambio, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte y la Campaña por el Desarme Nuclear presentan una propuesta perfectamente razonable por la “seguridad humana y la seguridad común”, tal como la formulan en su Alternative Defence Review [Revisión alternativa de la defensa]. Sostienen que esto puede lograrse mediante:

La priorización de la diplomacia, la cooperación global y la prevención de conflictos.

- La inversión en salud, educación, resiliencia climática, cuidado social y la creación de empleos bien remunerados, seguros, sindicalizados y socialmente útiles.
- Una reducción significativa del gasto militar.
- El cese inmediato de exportaciones de armas a países implicados en conflictos activos o violaciones de derechos humanos (incluidos Israel y los Estados del Golfo).
- La planificación y ejecución de una transición justa para las y los trabajadores y comunidades que dependen del sector defensa.

Estas son metas sensatas y alcanzables en un mundo donde la mayoría de los pueblos quiere paz y progreso, no guerra y derroche.

* Vijay Prashad es director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Este artículo fue enviado y publicado en el Boletín 24 de 2025 en www.thetricontinental.org

Stella Calloni: “EEUU quiere el control total de nuestros recursos naturales”

*Por Pablo Ruiz Espinoza**

Mientras los grandes medios de comunicación concentran su atención en lo que sucede en Oriente Medio o en Europa nuestro continente, nuestra América Latina, sigue en la mira. En la última década, los Estados Unidos avanzan cada día, mediante diversos dispositivos de dominación, para tener el pleno control de nuestros países y sus recursos.

Compartimos la siguiente entrevista con la destacada periodista argentina Stella Calloni, corresponsal del periódico La Jornada de México, y autora del libro de investigación “Operación Cóndor, Pacto Criminal”.

– Recientemente, se conoció una declaración denunciando una serie de medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei que entre otras ha vuelto a enviar militares a entrenarse a la nueva Escuela de las Américas. Esto es un claro retroceso...

En la Argentina, en un momento dado, se suspendió totalmente el envío de militares. De hecho, de policías también y de esto casi nadie hablaba. Esto había sido un logro importantísimo. A mí me parece terrible que empecemos, como si nada hubiera pasado, a través de los tiempos, y volvamos a este terrible proceso de enviar militares que nosotros sabemos, porque lo hemos experimentado, a través de la historia de nuestros países, lo que ha significado esta preparación de militares, también de policías, para atentar contra nuestros pueblos.

Digo que en todas las dictaduras militares, no quiere decir que todos los militares que pasaron por el Comando Sur, diríamos los militares que impusieron, que los utilizaron, para imponer dictaduras en el Cono Sur.

Hay que hacer un pequeño desvío, porque te voy a decir, cuando ya estaba la CELAC, en el 2011, y cuando estaba la unidad, sabés que era muy importante haber empezado a establecer la propuesta del presidente Hugo Chávez Frías de reunirse todos los ejércitos de la región para enfrentar, precisamente, esta situación, para evitar que volviera toda esta situación anterior.

– Sin embargo, en la izquierda algunos no ven esto con mucha preocupación ya que el imperialismo, en estos tiempos, está de otra forma conspirando contra nuestros pueblos ¿Sigue siendo peligroso enviar tropas a entrenarse a los Estados Unidos?

Yo opino que por supuesto, que es muy peligroso, debido a que hay una situación ahora donde precisamente Estados Unidos está actuando muy fuertemente para recolonizar nuestra región, porque este es un proceso de recolonización regional. ¿Qué quiero decir con esto? que no le basta con tener presidentes amigos, o más o menos, sino que ellos necesitan tener el control de todos los recursos naturales, y lo están diciendo con una claridad que no deja dudas y que no puede ser ignorada para algunos presidentes de la región. Lo están diciendo con una claridad que estamos bajo la Doctrina Monroe de 1823.

A esto hemos vuelto, hemos vuelto al siglo XIX, en algunos lugares lo han logrado, en otros no han podido, pero es muy grave que se vuelva a enviar tropas al Comando Sur. Aquí, bajo el gobierno del presidente Macri, la Ministra de Seguridad, que está actualmente ejerciendo ese mismo cargo, Patricia Bullrich, por indicaciones de Estados Unidos, había creado un Centro Regional de Inteligencia en Tierra del Fuego, donde ahora también hay una base que la está manejando EEUU.

Así que te digo que es muy peligroso y que creo que nosotros debíamos plantearlo como uno de los temas cotidianos de protesta. No podemos seguir en la misma situación, porque ha habido un cambio en el mundo, un cambio en la situación entre EE.UU. y América Latina, que no lo podemos ignorar.

Estamos bajo una guerra contrainsurgente, con otras características, y Argentina entró dentro de este modelo de guerra contrainsurgente, de estos golpes bajos, que yo prefiero llamarlos guerra de baja intensidad o golpes bajos, porque es lo que está sucediendo, que prácticamente se ha regalado una buena parte de la Patagonia, y, lamentablemente, en Chile también los EE.UU. ubicaron una base militar para entrenamientos para las fuerzas de paz que nosotros sabemos.

Cualquiera que estudie el tema del militarismo en América Latina, de la influencia de EEUU en América Latina, sabe perfectamente por qué y para qué lo están haciendo. Por ejemplo, en el sur acá, en la Antártida el gobierno de Milei dio autorización para que se instalen unas bases militares de EE.UU. para el control del medio ambiente. Nosotros sabemos también que hay un ofrecimiento para ayudar, en momentos muy difíciles, por ejemplo en los incendios, desbordes de los ríos, etc. Escondido detrás de esa ayuda para controlar el medio ambiente, etc., viene lo mismo: viene la disposición de bases militares disfrazadas de bases humanitarias, bases defensoras del medio ambiente, lo que sea, pero son bases militares.

No se puede confiar en los EE.UU. y menos en el momento que te dicen que están aplicando la Doctrina Monroe. Te lo dicen los presidentes, lo dijo bien clarito el actual presidente de EE.UU. Así que esta es la situación que tenemos. Nos trasladamos de alguna manera al siglo XIX. La Patagonia, por ejemplo, se puede considerar casi perdida, si no actuamos ahora, en este mismo momento, y salvamos lo que podamos salvar.

– Vivimos tiempos complejos y en primer orden para EEUU está la conquista de los recursos naturales y lo hará o por la fuerza o mediante otras

estrategias de control y dominación. Más aún, América Latina es estratégica para la sobrevivencia de EEUU en caso de una guerra nuclear que no podemos descartar...

Exactamente. Vos fijate, por ejemplo, para el tema de recursos naturales, tienen una información total de lo que hay en el sur de Argentina, en el sur de Chile, tienen el panorama completo, de toda la cantidad de riquezas que hay en el sur, además el tema de la Antártida, el tema de los glaciares, y, claro, quieren que queden bajo su control dada la situación mundial que estamos viviendo. Estamos en un periodo de recolonización y EE.UU. quiere controlar todos los recursos naturales de nuestros países.

Otros de los que están aquí actuando, sobre todo en Argentina, es Israel. Yo te diré que en Argentina está gobernando Israel, porque el presidente festeja el Hanukkah, el presidente está totalmente unido con Netanyahu, con Netanyahu en estos momentos terribles.

Entonces, nosotros estamos enfrentando algo muy peligroso en estos tiempos y te imaginás cómo vendrán preparados los que asisten ahora al Comando Sur. Nosotros sabemos del salvajismo, en este momento político, del imperio, porque hay que atreverse a seguir diciendo esta palabra, que es la realidad, en un momento político del imperio donde vuelve a avanzar para asegurarse toda América del Sur y el Caribe bajo su control, frente al hecho que nosotros tenemos recursos naturales extraordinarios.

Fijate no más en Venezuela, la reserva más grande de petróleo, y también acá en el sur, están explorando, por ejemplo, algo que yo no sé si conocen en Chile, que una empresa israelí se asoció con otra de Gran Bretaña para la extracción de petróleo en los alrededores de las Malvinas; así que, en este momento, el Atlántico Sur, para nosotros, está casi perdido.

No sabemos cómo vamos a poder recuperar todo esto; el daño que se ha hecho en sólo un año del gobierno de Milei aquí, de entrega de partes del territorio argentino; además de todo esto, necesitan una limpieza étnica, quieren terminar con todas las comunidades indígenas, eso está sucediendo.

Nosotros lo vemos en Chile con los Mapuche, pero aquí, es terrible la situación. En este momento preciso que estamos hablando nosotros, aquí están haciendo allanamientos cotidianos, violentos, contra las comunidades mapuche, por pedido de las grandes empresas que están en el sur, donde ya tienes a Benetton, a las de Gran Bretaña, ya tienen todo eso, todo eso manejado por empresas extranjeras.

– Este 23 de febrero pasado se realizó nuevamente el Día Mundial contra las Bases Militares Extranjeras. En América Latina hay avances y retrocesos en esta lucha por cerrar las bases...

Vos fijate que en Ecuador que había resurgido durante todo el gobierno de Rafael Correa, y no nos van a decir que porque Correa era de izquierda, lo cierto es que fue un Ecuador que crecía, que tenía autonomía, donde lo primero que se hizo fue terminar con la base militar de EE.UU. de Manta, que se habían establecido, y ahora qué pasa: les entregaron los Galápagos. Esto tendría que estar siendo denunciado en todo el mundo porque es un patrimonio de la humanidad, por la cantidad de especies, de animales, que era una especie de paraíso en la tierra, Galápagos, y no la pueden, no pueden ocuparla con una base militar de EE.UU., pero lo van a hacer.

Entonces, para que nos demos cuenta: qué países, donde están establecidas estas bases de los EE.UU. La mayor cantidad de bases están establecidas en Perú, en Colombia. Cómo actúan estas bases: a veces no ves. Ves una base de Colombia, pero adentro, adentro, está el mando de EE.UU. En Europa, está toda ocupada por bases militares de EE.UU. en una situación colonial.

También tenemos la base militar de EE.UU. en Guantánamo que es de alguna manera, tomando las distancias, y que en nuestros países Israel quiere convertir un poco; en cualquier momento, nos podríamos transformar (si no paramos esta situación) se puede transformar América Latina, y en particular Argentina, en la “Palestina” de América Latina.

– Lo más grave es que nuevamente la base militar de EEUU en Guantánamo es usada como cárcel ya que están enviando inmigrantes detenidos a este lugar

Trump con lo de Guantánamo creó una situación, porque vos fijate que nosotros no sabemos específicamente, y los gobiernos de América Latina tienen que pedir que les den las listas de nombres de sus ciudadanos que son trasladados como delincuentes, encadenados como si fueran terroristas, y enviados a Guantánamo. Y no podemos olvidar que en este lugar se conformó un laboratorio de tortura.

Ahí aprendieron una cantidad de soldados norteamericanos, aprendieron nuevos métodos de tortura. A este lugar están mandando latinoamericanos, que ellos les dicen “delincuentes”.

A todo esto estamos amenazados, toda América Latina, por el Secretario de Estado, Marcos Rubio, que nombró a Cuba como un país patrocinador de terroristas, porque eso es lo que el lobby cubano de EE.UU. les ordena.

Nosotros sabemos que son ellos los que han amparado a los terroristas, que están aplicando el terrorismo en Cuba, desde mucho tiempo atrás, como lo están practicando y que también lo practica Israel sobre el pueblo Palestino desde hace más de 70 años. Sabemos que quieren acabar con Cuba pero no lo lograran.

Estamos viviendo en este mundo donde te dicen “hay una lucha antiterrorista”, pero los principales terroristas son los EE.UU., uno de los peores, pero es el que menos aparece y no se nombra, además de Israel, que también está absolutamente en lo mismo.

Desde el 7 de octubre hasta hoy, en Palestina, lo estamos viendo por televisión, estamos viendo un genocidio. Todo un esquema de crueldad que tienen y donde los niños fueron un blanco; porque había la doctrina israelí, que lo habían pedido unos estudiantes ultranacionalistas, decían que había que acabar con los niños, con las mujeres embarazadas, porque esos niños iban a ser terroristas. No, esos niños iban a crecer y defender Palestina como la han estado defendiendo heroicamente.

Creo en el heroísmo del pueblo palestino, en el heroísmo del pueblo cubano, porque hay que estar allí para saber lo que les ha costado el bloqueo, lo que ha costado este bloque criminal, que es un crimen, es un sitio de guerra.

Entonces, las víctimas que genera un bloqueo, las víctimas que está originando, por ejemplo, acá Milei, que no gobierna él sino que gobierna Israel y EE.UU. Son los gobernantes que tenemos nosotros, esa es la verdad, que nadie te quiere decir, porque hay una cobardía enorme para enfrentar al sionismo, digo, para enfrentar a Israel.

– Siguiendo con el tema de bases militares hay una en especial que es la base militar NAMRU-6 en Perú que hace supuestamente investigación para prevenir enfermedades infecciosas y que podrían ser usada, sus investigaciones, para una guerra biológica...

Hay mucha información que intoxica al mundo, se están sucediendo cosas que se escapan de la mirada. Entonces nosotros tenemos que saber todo esto. Rusia denunció en Naciones Unidas toda una lista de laboratorios biológicos que había en Ucrania y que era una de las cosas en la que estaba involucrado el hijo de Biden y esto lo silenciaron, porque era un golpe a los demócratas, porque era un golpe muy fuerte, porque son 30 laboratorios de armas biológicas.

– Muchas personas no entienden o no saben lo que está pasando en el mundo. Los poderes dominantes tienen las armas que son los medios de comunicación...

Exactamente, este terrorismo mediático controla el 98% de la desinformación que circula por el mundo. Entonces nosotros tenemos que pensar en otro tipo de alternativa para luchar contra esta arma, la más importante que tienen en este momento los EE.UU., Israel, y Gran Bretaña. Es el arma más importante, porque con esa arma han paralizado a la población de Europa. Europa, la civilizada Europa, participando de cuántos crímenes de guerra, y después cerrándoles la puerta a los migrantes que huyen porque les han destruido todo su hábitat.

Es muy importante explicar de qué se trata esto, esclarecer para la población, que se esclarezca entre los intelectuales, en el periodismo, porque el pueblo está muy, muy atacado; en los pueblos nuestros están bajo un terrorismo mediático, y así lo debemos considerar: en la mentira y en el silencio absoluto.

Nunca se ha hablado de que Libia ha sido uno de los países más destruidos que hubo. Y nunca se ha hablado del genocidio que se produjo con las invasiones coloniales, ilegales, a Afganistán, a Irak, a Libia, a Siria, a Yemen. Tenemos una cantidad muy grande de elementos que reunir, para hacer un panorama mundial, lo más serio que podamos, lo mejor que podamos, para explicarle a la gente.

– En general, las personas repiten una y otra vez lo que escuchan o ven en la televisión, la radio, los medios hegemónicos...

No saben nada, nada, y caminan como zombis, viven como zombis, repiten como zombis todos. Acá no sólo lo repiten, lo replican diariamente, y eso es lo que estamos teniendo, más la siembra de ignorancia. Porque con el hambre, los despidos, todo lo que pasa, cada vez la gente, han ido destruyendo la cultura, las culturas nacionales. ¿Vos te das cuenta que en países como Venezuela la cultura aflora por todas partes? Que el canal Telesur tiene sesiones culturales donde vas viendo las culturas de todos los pueblos, que lo que sostiene a Cuba es la cultura.

– Este año se cumplirán 50 años de la Operación Colombo en Chile y si bien se han investigado estos casos y EE.UU. ha desclasificado algunos documentos todavía no se conoce el paradero de muchos compañeros y compañeras, no hay plena justicia...

La Operación Colombo fue la anticipación evidente de lo que iba a ser la Operación Cóndor. La Operación Colombo que denunciaron tan bien los organismos de derechos humanos en Chile y de los 119. Si bien, hay documentos desclasificados, por ahí te mandan datos, pero están encubriendo a los verdaderos culpables de ellos, de EE.UU., todos los que fueron de la CIA, todo lo que han buscado encubrir.

El grupo, por ejemplo, de terroristas cubano-americanos que estuvieron con Pinochet, todos aquéllos que participaron activamente en lo que fue el asesinato de Letelier, además de todos los que participaron de las dictaduras militares de la región

Vos fijate que dada la situación tan compleja y caótica en el mundo, que nosotros, los derechos humanos se han abandonado bastante. Aquí hay una persecución directa contra los organismos de derechos humanos. Pero se han olvidado bastante, y el tema de los desclasificados de Colombo ha quedado sumergido por allá, lejos.

Yo creo que algunas cosas se pueden hacer: siempre podés hacer algo con un desclasificado, siempre podés dar algunos pasos. Aunque todo lo que está borrado en los documentos te deja aislado, deja aislados a los responsables. En los documentos desclasificados sale lo que ellos quieren que salga. Lo que ellos conceden que salga, pero no lo que nosotros necesitamos para hacer la investigación necesaria.

– A pesar de que se han desclasificados muchos documentos hay mucha información que seguramente no conocemos. En ese sentido pienso que EE.UU. es cómplice de toda la impunidad que hay con tantos casos...

No sólo es cómplice. La impunidad es para salvar lo que ellos quieren salvar y al dejarte algunos nombres, con todos esos borroneos negros que tienen todos los documentos, encubren. Es decir, te dan algo, pero no todo definitivamente y no reconocen. Yo no te digo su complicidad; su autoría. Su autoría, porque fueron realmente los que prepararon a los militares, y volvemos al mismo tema: están preparando a los militares y los policías. Vos sabés que en la escuela de policías en El Salvador, (la ILEA, la Academia Internacional para el Cumplimiento de La Ley de EEUU) ese pequeño Comando Sur que existe en El Salvador, es policial y judicial.

Aquí entra otro tema grave: quieren infiltrar todas las estructuras judiciales de toda América Latina, las estructuras electorales de toda América Latina, y hacerse dueños de todos los medios de comunicación masivos del

mundo. La Corte Suprema de Justicia aquí, es un partido judicial. Es un partido político judicial de la derecha.

– Seguimos y vemos como algo positivo que EE.UU. y Rusia puedan llegar a un acuerdo y parar la guerra en Ucrania. Pero hacia América Latina el discurso ha sido violento contra Canadá, México, Panamá...

Es un momento muy peligroso porque EEUU está perdiendo presencia a nivel internacional. Lo que estamos viendo, y vamos a ver cosas asombrosas, por la forma como se expresó Trump cuando asumió el gobierno y la forma como se está conduciendo. Yo creo que tenemos que saber que nosotros somos el último recurso que está a la mano y lo quieren asegurar como su territorio, su patio trasero. Piensan, inclusive, una América Latina bajo su control total.

Es muy interesante también el tema en qué momento está negociando Trump con Putin. Primero, que le conviene, quiere negociar también con Rusia sabiendo ya de los acuerdos extraordinarios, sabiendo de la presencia de los BRICS, además que se están enfrentando a una potencia como China, que va ganando en todas las situaciones. Entonces, van a tratar de debilitar la relación de Rusia con China, lo que no va a poder ser, porque esto ya está muy establecido...

Yo te voy a decir algo que estamos dejando en silencio: lo que está sucediendo en Haití: la matanza, las masacres en Haití de mercenarios que se introdujeron desde República Dominicana, es brutal. Y en este momento, nadie la nombra, nadie la nombra.

* Pablo Ruiz Espinoza es parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Carta:

No + Gasto Militar en América Latina ni en el Mundo

Sres. Presidentes de América Latina, El Caribe y de América del norte
Sres. Organizaciones de las Naciones Unidas

Las organizaciones y personas firmantes apoyamos los Días Acción Global contra el Gasto Militar que impulsa la Oficina Internacional por la Paz (IPB) y diversas organizaciones hermanas en todo el mundo. Por lo anterior, queremos señalar lo siguiente:

1.- Manifestamos nuestro rechazo al continuo gasto militar que realizan nuestros gobiernos y que va en desmedro de toda nuestra población y de la necesidad que se dispongan de más recursos económicos para enfrentar la pobreza y satisfacer nuestros derechos a un trabajo digno, a una atención de salud oportuna, a una educación de calidad, como al acceso a una vivienda, entre tantos otros derechos que no pueden ser satisfechos a nuestros pueblos por nuestros Estados.

2 – De acuerdo a información del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) el gasto militar del periodo 2024 representó un “Aumento sin precedentes del gasto militar mundial impulsado por Europa y Oriente Medio” y “alcanzó los 2.718 mil millones de dólares en 2024, lo que representa un incremento del 9,4 % en términos reales respecto a 2023, el aumento anual más pronunciado desde, al menos, el final de la Guerra Fría”.

De acuerdo al informe de SIPRI, en nuestro continente, en América Central el gasto militar alcanzó los 19.800 millones, siendo México el país que más gastó con 16.700 millones de dólares en el área de “defensa”.

En Suramérica, el gasto militar ascendió a 53.600 millones de dólares sien-

do Brasil el país con el mayor gasto con 20.947 millones de dólares; seguido por Colombia, con 15.096; por Chile, con 5105; por Argentina, con 4.177; por Ecuador, con 2.698; y por Perú con 2.565.

En América del norte, Estados Unidos fue el país que el mayor gasto militar en la región y en todo el mundo, llegando a 997.309 millones de dólares; y Canadá, con 29.346 millones de dólares.

3. – En contraste al gasto militar, la pobreza se mantiene en muchos de nuestros países. De acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2024, “todavía hay 172 millones de personas en situación de pobreza en la región y 66 millones no cuentan con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos”. La situación es crítica en muchos países donde se ven afectados también niñas y niños. Recordamos el graffiti muy sentido: “Presupuestos militares, para escuelas y hospitales”

4 – Manifestamos nuestra preocupación y rechazo a la escalada armamentistas que vemos actualmente en toda Europa; rechazamos el envío de armas de EEUU y de otros países de la OTAN a Israel, las que siguen siendo utilizadas para asesinar a la población palestina; rechazamos las amenazas y nuevamente intervención militar de EEUU en Panamá; llamamos a redoblar los esfuerzos para que mediante negociaciones de paz se pueda poner fin a la guerra contra Palestina, entre Ucrania y Rusia, en Yemen, en Sudán, entre otros tantos conflictos que siguen en curso.

5 – Exhortamos a nuestros países de la región y del mundo a frenar el gasto militar y trabajar en una agenda de desarme y de paz fortaleciendo las relaciones de amistad, de confianza, en la construcción de una seguridad común, donde se garantice el respeto a la autodeterminación de cada nación del mundo, y se ponga fin a las amenazas y la guerra. “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

6 – Llamamos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a liderar con más propiedad y redoblar los esfuerzos para la construcción de un mundo

más seguro, por el desarme, por la prohibición de ensayos nucleares, como para lograr que las potencias reduzcan y eliminen sus armas nucleares. Es urgente trabajar para que todas y todos vivamos en un mundo donde impere la paz y la amistad entre todos los pueblos.

Firman: Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile; Alianza Global CONVIDA20; Asociación de Investigadores para la Paz de España; Asociación voz del pueblo, Costa Rica; Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica; Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs, España; Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS, Chile; Centro Óscar Arnulfo Romero, Cuba; Centro Ecoceanos Chile; Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia de Colombia; Collectif DDHH au Chili (France); Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización – Alianza CONVIDA-20; Comisión FUNA, Chile; Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, Brasil; Comitê Internacional Paz Justiça e Dignidade aos Povos – Capítulo Brasil; Comité Óscar Romero de Valladolid, España; Comité Óscar Romero, Buenos Aires, Argentina; Comité Óscar Romero, Jujuy, Argentina; Comité Óscar Romero, Montecarlo, Argentina; Comité Óscar Romero, SICSAL-Chile; Comunidad Ecueménica Martin Luther King, Chile; Confederación Nacional Sindical Campesina del Agro y Pueblos Originarios Ranquil, Chile; Consultores internacionales de Paz, conflictos y desarrollo, Bolivia; Coordinadora Latinoamericana de solidaridad en Bélgica; Corporación 3y4 Álamos, Chile; Escuela Permanente PRAIS, Chile; Global Campaign on Military Spending – GCOMS, Internacional; Iglesias por la Paz, México; International Peace Bureau (IPB), Germany; Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España; Jubileu Sul Brasil; Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Colombia; Mesa Ecueménica por la Paz, Colombia; Mundo sin guerras y sin violencia, Chile; Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, Chile; Plantón 43 Ciudad de México; Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), Haití; Raíces de Resistencia, Chile; SERPAJ Paraguay; SICSAL, Óscar Arnulfo Restrepo, Colombia; Sobrevivientes de Tejas Verdes, Chile; World BEYOND War; siguen las firmas...

Comunicado final de la Reunión Regional de Las Américas del Consejo Mundial de la Paz

Los días 16 y 17 de junio del 2025, sesionó en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía, la Reunión Regional para las Américas y el Caribe del Consejo Mundial de la Paz donde se contó con la participación de representantes e invitados de las organizaciones de la región.

Contamos con la presencia de autoridades y representantes de organizaciones políticas de Brasil y del gobierno del estado de Bahía.

El encuentro estuvo presidido por Victor F Gaute López, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en calidad de Coordinador Regional para Las Américas y el Caribe, por el Secretario Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz, Iraklis Tsavdaridis, por José Reinaldo Carvalho, presidente nacional de Cebrapaz y por Socorro Gomes, dirigente nacional de Cebrapaz, en su condición de anfitriones.

El tema central del encuentro ha sido las acciones estratégicas para enfrentar el complejo escenario regional, fundamentalmente la defensa de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Además, a partir del informe regional y los reportes de cada organización se fue analizando el escenario contemporáneo americano: la profunda crisis multidimensional que viven nuestros pueblos con el incremento de las brechas socioeconómicas, la contraofensiva de las oligarquías y la derecha, el auge de la represión y las tendencias neofascistas, así como la proyección agresiva de la actual administración estadounidense hacia nuestros pueblos y su expansión militarista imperial, junto a la OTAN en el área.

Ante esta situación también se analizaron las principales amenazas que enfrentamos y que requieren del inmediato accionar por parte de los miembros de nuestra organización.

Para ello hemos arribado a los siguientes acuerdos que fueron aprobados de manera unánime:

1. Denunciar las políticas agresivas e injerencistas del actual Gobierno de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN, que persiguen el objetivo de dominar el mundo con ayuda de la extensa red de más de 800 bases, instalaciones y enclaves militares existentes, así como el peligro que representa la incorporación de nuevos miembros a esa organización belicista.
2. Continuar exigiendo la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo en contra de la voluntad del pueblo y Estado cubanos, así como continuar denunciado la permanencia de su centro de detención en el cual se cometen sistemáticamente violaciones contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
3. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien reafirmó la doctrina imperial Monroe con sus pretensiones coloniales sobre territorios soberanos como lo son Groenlandia, Panamá o el renombramiento del Golfo de México. Así mismo denunciaremos su xenofobia y fascista política migratoria que ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos y la dignidad de los migrantes.
4. Continuar realizando acciones masivas el 21 de septiembre Día Internacional de la Paz, coordinadas con otras organizaciones amantes de la paz del área.
5. Promover la unidad en defensa de una paz digna, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos con otras organizaciones de paz del área.
6. Consideramos crítico para lograr una paz sostenible, promover la preservación y relación armónica con el Medio Ambiente. Ello supone la transformación de los patrones de consumo y producción que fomenta el actual modelo socioeconómico capitalista.

7. Concretar el apoyo a la convocatoria del Movimiento Caribeño por la Paz y la Integración de celebrar en Barbados el 6 de octubre, Día Internacional contra el terrorismo adoptado por el CARICOM. En tal sentido, debemos fortalecer la lucha contra el terrorismo bajo cualquiera de sus formas y seguir denunciando el vínculo de ese flagelo con el imperialismo estadounidense y exigimos que de manera inmediata Cuba sea eliminada de la arbitraria y espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.
8. La situación en Palestina duele en la conciencia de quienes aman y defienden la paz. Pocos referentes anteriores se comparan con el nivel de destrucción, masacres e irrespeto a los más elementales derechos de cualquier ser humano. Palestina resulta un ejemplo fehaciente de la política criminal, genocida y de limpieza étnica del régimen sionista y del imperialismo, mientras constituye un espejo en el que nuestros pueblos nos vemos reflejados.
9. Si bien resulta frustrante la impunidad con la que ha actuado Israel y la ineffectividad de múltiples organismos para poner fin al genocidio, nuestras organizaciones deben redoblar esfuerzos para tener un mayor impacto en la opinión pública, en la adopción de acciones con efectos consistentes en favor de una paz digna para el pueblo palestino y señalar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que a diario se realizan.
10. Continuar expresando la más amplia solidaridad con los países y pueblos bajo ocupación y dominio colonial en América continental y el Caribe. Así como la causa justa de otros pueblos también colonizados en otros continentes, especialmente el pueblo saharauí.
11. Expresamos solidaridad con el pueblo trabajador argentino que ha sido víctima de la represión desmedida por parte del gobierno fascista de Javier Milei. Denunciamos la persecución política a líderes y miembros sindicales, además de activistas que promueven legítimas demandas ante los ingentes recortes sociales promovidos por el actual inquilino de la Casa Rosada.

12. Denunciamos las políticas xenófobas del gobierno de Estados Unidos con el resurgimiento de leyes retrógradas como la “Ley de Enemigo Extranjero”; y en particular, condenamos la sistemática campaña fascista y racista de criminalización y satanización del gentilicio venezolano que pretende justificar el ataque, secuestro y tortura de la población migrante, la separación de familias, resaltando el secuestro de niñas y niños utilizados como rehenes. Alertamos que esta política es parte de la agenda imperialista para justificar una acción directa y militar contra la soberanía de Venezuela. Así mismo, denunciamos y exigimos el regreso de más de 250 migrantes venezolanos que permanecen secuestrados en cárceles de El Salvador.
13. Denunciamos la injerencia imperialista de Estados Unidos en Venezuela, manifestada a través de la desestabilización política contra sus instituciones legítimas, promovida por medios transnacionales al servicio del hegemonismo yanqui. Estas acciones son expresión de la guerra sistemática y multifactorial contra la Revolución Bolivariana, con el objetivo de socavar la democracia, imponer un gobierno títere y saquear los recursos del pueblo venezolano. ¡Exigimos el cese inmediato de esta agresión, que busca someter a pueblos soberanos!
14. Haití sufre una grave situación humanitaria y de seguridad, que agudiza la inestabilidad social y la pobreza causada por siglos de saqueo colonial y neocolonial, subdesarrollo e intervención extranjera. El pueblo haitiano tiene derecho a encontrar una solución pacífica, sostenible y duradera a los enormes desafíos que enfrenta, sobre la base del pleno respeto a su autodeterminación, soberanía e independencia, por lo que expresamos nuestra solidaridad con el pueblo haitiano; nos oponemos a cualquier intervención militar en este país y apoyamos un plan de desarrollo social que beneficie a esta hermana nación.
15. Multiplicar la batalla comunicacional en todas las vías posibles, incluso las plataformas digitales para enfrentar las campañas de mentiras del imperialismo y sus grandes medios de comunicación que manipulan las realidades de nuestros países.

16. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno colombianos. Se hace un llamado por la implementación de los Acuerdos de Paz, y el respeto a la vida y a los derechos humanos, al tiempo que apoyamos el programa de paz total que impulsa el actual gobierno.
17. Rechazamos la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra nuestros pueblos con el objetivo de imponer agendas políticas y fomentar cambios de régimen. Resaltamos las graves implicaciones que estos instrumentos de guerra generan para la paz, el desarrollo y los derechos humanos. En este sentido exigimos el cese inmediato del Bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
18. Condenamos la persecución y la campaña de descrédito hacia las brigadas médicas cubanas que son un ejemplo de internacionalismo, solidaridad y cooperación entre los pueblos. Así mismo, condenamos las presiones diplomáticas y económicas ejercidas por los Estados Unidos contra aquellos países que acepten la colaboración médica cubana, lo cual resulta otra muestra del injerencismo y doble rasero del imperio.
19. Ampliar la divulgación del contenido de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz dada su actualidad y vigencia en el contexto político latinoamericano y caribeño y exigir a los gobiernos que honren el compromiso que la misma establece. También hacer extensiva esta campaña a movimientos populares, sindicales, estudiantiles, campesinos y demás sectores que asuman esta importante perspectiva de paz en todo continente. La reunión consideró positivamente el texto intitulado “Declaración de Principios de la Campaña Internacional para Hacer de América Latina y el Caribe una ‘Zona de Paz’” lo cual será la base para el inicio de la campaña.
20. Expresar nuestra solidaridad con los pueblos indígenas y comunidades de raíz africana de las Américas y el Caribe; a la vez que exigimos la reparación de daños causados por el colonialismo y la esclavitud a estas poblaciones.

21. Expresamos solidaridad con las naciones originarias de Estados Unidos y Canadá en su lucha contra la ocupación y contaminación de sus territorios ancestrales, fundamentalmente de la mano de megaproyectos extractivistas, ejecutados por transnacionales. Denunciamos el silencio cómplice de gobiernos occidentales y grandes medios que condenan violaciones de DDHH en el Sur Global mientras ignoran el etnocidio en su propio territorio.
22. Manifestar nuestro apoyo al pueblo de los Estados Unidos que lucha por la paz y rechaza la expansión de las bases militares y las acciones injerencistas de su gobierno, a su vez nos solidarizamos con los jóvenes estudiantes que están siendo reprimidos por el gobierno de los Estados Unidos.
23. Llamamos la atención sobre la militarización del Ártico y del uso del espacio exterior con fines belicistas.
24. Continuar fortaleciendo el CMP, incorporando organizaciones amigas defensoras de la paz.
25. Promover la participación de las nuevas generaciones, para garantizar un mayor conocimiento y generar acciones a favor de los principios y postulados de la paz.
26. Apoyamos al pueblo mexicano en sus luchas antiimperialistas bajo los principios de justicia social, soberanía energética y combate a las desigualdades.
27. Condenamos la guerra que ha provocado la OTAN, teniendo como objetivo a la Federación Rusa, en territorio ucraniano. Igualmente, condenamos la militarización de la Unión Europea, en especial Europa del este, mediante la expansión de la OTAN hacia los límites territoriales de Rusia. Nos pronunciamos por una solución política que garantice la paz en la región.
28. Condenamos enérgicamente y demandamos el fin inmediato de la agresión de EEUU e Israel en contra de Irán y los pueblos de la región,

particularmente Palestina, Líbano, Yemen y Siria, y llamamos por la total implementación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas demandando el fin de las violaciones de las leyes internacionales por Israel. Estos actos de agresión respaldados política y militarmente por el gobierno de EEUU amenaza la estabilidad regional y pone en riesgo la paz global. Y es continuidad de los crímenes de lesa humanidad que practica el sionismo y sus aliados imperialistas contra el pueblo palestino.

El sitio del Consejo Mundial por la Paz es www.wpc-in.org
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP):
www.siempreconcuba.org
En Brasil www.cebrapaz.org.br

Índice de Organizaciones

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
www.afepchile.cl

CEBRAPAZ
www.cebrapaz.org.br
Consejo Mundial por la Paz
www.wpc-in.org

Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos
www.derechosdelospueblos.net
Corporación 3 y 4 Álamos
www.3y4alamos.com

Haití No Minustah, Libre y Soberana
www.haitinominustah.wordpress.com
International Peace Bureau (IPB)
www.ipb.org

Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)
www.siempreconcuba.org

Instituto Tricontinental de Investigación Social
www.thetricontinental.org

Kavilando
www.kavilando.org

MOPASSOL
www.mopassol.com

Observatorio Derechos Humanos de los Pueblos
www.observatoriodhp.wordpress.com

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas - Chile
www.derechoalapaz.org
www.observadoreschile.blogspot.com

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
www.serpaj.org.ar (Argentina) www.serpajchile.cl (Chile)
www.serpajpy.org.py (Paraguay) www.serpaj.org.uy (Uruguay)

SICSAL- Alianza Convida-20
www.sicsal.net/convida20

SOA Watch
www.soaw.org

World Beyond War
www.worldbeyondwar.org

Medios Alternativos

www.elciudadano.com
www.pressenza.com
www.lemondediplomatique.cl
www.rebellion.org
www.telesur.tv
www.luisemiliorecabarren.cl
www.piensachile.com
www.resumenlatinoamericano.org
www.mapuexpress.org
www.resumen.cl
www.radio1demayo.blogspot.com
www.elindoamericano.cl
www.liberacion.cl

Se agradecen comentarios sobre este libro colectivo al correo:
info@derechoalapaz.org

“El presente libro, *Entrenamiento, Bases y Militarización en América Latina: La OTAN y Estados Unidos en América Latina*, compilado por Pablo Ruiz Espinoza, llega en un momento histórico de profunda reconfiguración geopolítica mundial. Su objetivo es tan claro como urgente: evidenciar las múltiples formas en que el militarismo global —articulado principalmente por los Estados Unidos y la OTAN— continúa reproduciendo estructuras de dominación en nuestra región bajo nuevos rostros, discursos y tecnologías.

A lo largo de estas páginas, un destacado conjunto de autores y autoras —entre ellos Alicia Lira Matus, Renán Vega Cantor, Paola Gallo, Olga Pinheiro, W.T. Whitney, Gabriel Aguirre, Alfonso Insuasty Rodríguez, Andrés Escobar Vásquez, David Barrios Rodríguez, Félix Mada-riaga, Hervi Lara Bravo, Vijay Prashad y Pablo Ruiz— ofrece un análisis colectivo y plural sobre un mismo fenómeno: la expansión del poder militar occidental y sus consecuencias sobre la soberanía, la paz y los derechos humanos en América Latina y el Caribe”.

Álvaro Ramis



quimantú